



INFORMES DE COYUNTURA

Informes de Coyuntura N° 3

La trama de la crisis. Modos y formas de protesta social a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001

Germán Pérez (coord.), Sebastián Pereyra (coord.), Martín Armelino, Matías Bruno, Marina Larrondo, Nicolás Parrici, Federico L. Schuster, Paula Varela, Melina Vázquez [autoras/es]

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Buenos Aires, 2002

Documento disponible para su consulta y descarga en el Repositorio Digital Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Para más información consulte: <http://repositorio.sociales.uba.ar/>

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Argentina.
Atribución-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 (CC BY 4.0 AR)



La imagen se puede sacar de aca: https://creativecommons.org/choose/?lang=es_AR



Informes de Coyuntura

n° 3

La trama de la crisis
Modos y formas de protesta social
a partir de los acontecimientos
de diciembre de 2001

Federico L. Schuster
Germán Pérez (coord.)
Sebastián Pereyra (coord.)
Martín Armelino
Matías Bruno
Marina Larrondo
Nicolás Patrici
Paula Varela
Melina Vázquez

Junio de 2002



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO GERMANI
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
ARGENTINA

Asesora Editorial: Mabel Kolesas

Gráfica: Ana Piaggio

ISBN 950-29-0690-X

Fecha: junio de 2002

Instituto de Investigaciones Gino Germani
Facultad de Ciencias Sociales. UBA
Uriburu 950, 6° piso
(C1114AAB) Buenos Aires. Argentina
Teléfono: (5411) 4508-3815; Fax: (5411) 4508-3822
e-mail: iiigg@mail.fsoc.uba.ar
Centro de Documentación e Información
e-mail: cdi@mail.fsoc.uba.ar
<http://www.fsoc.uba.ar>

Federico L. Schuster

Profesor de Filosofía. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires. Profesor Titular Asociado de la materia Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales (Carrera de Ciencia Política – UBA) Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, director del proyecto UBACyT S064 "La transformación de la protesta social en Argentina 1989-1999".

Germán Pérez

Licenciado en Ciencia Política. Jefe de Trabajos Prácticos de la materia Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales (Carrera de Ciencia Política – UBA). Beca UBACyT Doctoral.

Sebastián Pereyra

Licenciado en Ciencia Política. Ayudante de la materia Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales (Carrera de Ciencia Política – UBA). Beca CONICET interna de formación de posgrado.

Paula Varela

Licenciada en Ciencia Política. Ayudante de la materia Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales (Carrera de Ciencia Política – UBA). Maestría en Cultura y Comunicación (Facultad de Ciencias Sociales - UBA).

Martín Armelino

Estudiante de Ciencia Política. Ayudante de la materia Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales (Carrera de Ciencia Política – UBA).

Matías Bruno

Estudiante de Sociología. Participa como investigador de apoyo en el área de conflicto social del Centro Cultural de la Cooperación. Se desempeña como ayudante en la materia Sociología General (Carrera de Sociología – UBA).

Marina Larrondo

Estudiante de Sociología.

Nicolás Patrici

Estudiante de Ciencia Política. Becario UBACyT en la categoría Estímulo. Ayudante en la materia Historia Argentina (Carrera de Ciencia Política – UBA).

Melina Vázquez

Estudiante de Sociología.

Introducción

La República Argentina se encuentra hoy inmersa en una situación crítica de desenlace incierto. Estamos instalados en un espacio difuso entre un tiempo pasado que ya fue y un futuro que todavía no es. Todos queremos entender los acontecimientos del presente y saber hacia dónde vamos. Desde ya que no es fácil examinar un tiempo que vivimos y en el que nos vemos tan comprometidos. Sin embargo, las ciencias sociales tienen una responsabilidad en este sentido, y no pueden mirar hacia otro lado. Debemos realizar los máximos esfuerzos de análisis teórico y estudio empírico que nos permitan echar alguna luz sobre los acontecimientos de nuestro tiempo y nuestro mundo. No cabe duda de que la crisis económica, política y social que vive hoy la Argentina no son una novedad. Claro que en estos temas hay una distancia inabordable entre las condiciones objetivas y subjetivas así planteadas y su expresión concreta en la acción social y política. Podemos anticipar las condiciones del futuro, pero no su forma concreta y específica. Y esta forma no es por cierto una cuestión menor. Así, ahora, nos interesa y preocupa terminar de analizar en detalle las condiciones mencionadas. El horizonte de las protestas, de las asambleas populares, de las medidas políticas, del curso de la economía, de la cuestión social y del escenario de conflicto en que estamos es sin dudas un tema central hoy para quienes nos dedicamos al estudio de la realidad social. Es por eso que nos aventuramos a la difícil tarea de escudriñar el presente.

Aspectos metodológicos

En las páginas que siguen hemos intentado configurar un relato histórico de los acontecimientos que precipitaron una profunda crisis en el tejido social de la Argentina contemporánea. Consideramos que en la estremecedora urgencia de los acontecimientos se revelaba la necesidad de un relato que permitiera reconocerlos, no sólo en la forma de su vertiginosa sucesión cronológica, sino a la luz de una trama, es decir, narrados desde los márgenes del espacio de experiencia y el horizonte de expectativas que esos mismos acontecimientos lograron conmovir de una manera seguramente irreversible.

El valor de la narrativa, como forma de organización del discurso que describe y analiza la realidad social desde una perspectiva teórica, ha sido destacado en los últimos años por una serie de autores¹ en el marco de la discusión

¹ Ver: Danto, Arthur (1965): *Historia y narración*, Barcelona, Paidós, 1989; Ricoeur, Paul: *Historia y narratividad*, Barcelona, Paidós, 1999; Koselleck, Reinhart (1979): *Futuro pasado: Para una semántica de los tiempos históricos*, Barcelona, Paidós, 1993; White, Hyden

epistemológica denominado alternativamente como giro lingüístico, hermenéutico o interpretativo. La conjetura central que orienta las reflexiones de estos autores, y que inspira el enfoque metodológico del presente documento, consiste en demostrar que el discurso narrativo provee principios de inteligibilidad de la realidad histórica que resultan constitutivos de la propia comprensión humana del pasado y su contemporaneidad. Por lo tanto, la indagación de las operaciones que se ponen en juego en la construcción del texto narrativo, trasciende los problemas meramente referenciales o representacionales de este tipo de discurso, para concentrarse en la dimensión configurativa que la narración tiene sobre la experiencia del mundo histórico-social. La propia posibilidad de una narratología, resulta del esfuerzo hermenéutico por dar estatus de método a un dispositivo de inteligibilidad propio de la razón práctica.

Decidimos desarrollar nuestro relato en el período de tiempo que se extiende del 16 de diciembre de 2001 al 31 de enero de 2002, porque consideramos que refleja suficientemente, tanto las transformaciones que experimentó la protesta social durante el curso de la crisis, como los avatares del contexto político-institucional frente al cual los actores de la protesta transformaron sus demandas, sus modos de manifestarse e, incluso, sus propias identidades políticas. La idea del documento fue la de proveer elementos para el análisis aun ubicados en el foco de la crisis; más allá de las difícilmente previsibles derivaciones de semejante conmoción sociopolítica, estimamos que nuestro esfuerzo contribuye a pensar las condiciones de posibilidad de sucesivas transformaciones. El trabajo de relevamiento del referente primario de nuestro texto –las protestas sociales ocurridas en el período- fue arduo debido al desorden provocado en las propias fuentes –principales diarios de circulación nacional- por la multiplicación de acontecimientos críticos en general inesperados. Sin embargo, intentamos no apartarnos de las exigencias de precisión en la recopilación de información y minuciosidad en la descripción de los acontecimientos que este tipo de emprendimiento requiere.

Pero no sólo nuestro referente primario: la “*cronicalización*” de acontecimientos singulares que deben evaluarse de acuerdo a su valor de verdad por contrastación, merece ser considerado en esta introducción. Tan importante como aquel resulta el problema de la construcción del relato, la “*puesta en trama*” de los acontecimientos que la narración que ofrecemos organiza, dotando a su mera sucesión cronológica de un nuevo orden de inteligibilidad que los convierte en una realidad histórica. Al respecto seguimos la distinción metodológica introducida

por los narratólogos entre el referente primario del relato y su tema². Según esta perspectiva el tema del relato está connotado en la forma configurativa -trama- que la narración le imprime a la serie de acontecimientos que constituyen su denotación; es así que el tiempo del relato no representa ni se adecua al tiempo propio de la sucesión de los acontecimientos -como postula el imaginario historiográfico positivista- sino que dispone una determinada relación entre acontecimientos, agentes y acciones, estructurada según un principio de inteligibilidad cuya sanción corresponde a los recursos de autoridad del narrador. En nuestro caso, la voz del narrador que recorre el texto que sigue, se autoriza en una doble pertenencia: por un lado, a una comunidad académica con sus requisitos de rigurosidad en el relevamiento de los datos, precisión conceptual y coherencia argumentativa; y, por el otro y principalmente, al propio espacio de experiencia desde cuyos márgenes el relato surge, como intento por conjurar la perplejidad producida por la confusa proliferación de los acontecimientos.

Lo que más abajo se narra es la tragedia política de una comunidad expuesta a la fragmentación de su propia autorrepresentación como cuerpo político; así como la emergencia, aun incipiente y dificultosa, de nuevas identidades que se redefinen constantemente en el propio ejercicio de la protesta social. Nuestro tema es la presentación de esa tragedia, dando cuenta de las diversas modulaciones que, en una crisis como la que relatamos, se abren entre lo real y lo posible.

El carácter de la trama

La crisis que vive la Argentina en estos días, la que se refleja en la narración que sigue, es la crisis de un régimen de social acumulación. Por supuesto que esta crisis no es nueva, sino que se trata de la forma extrema de deterioro y desestructuración de un proceso que lleva entre tres y cinco años. Cuando hacia comienzos de los años '90 se consolidó en Argentina un régimen de acumulación cuyo origen remite a mediados de los '70, el país aceleró un enorme proceso de concentración de la riqueza, descapitalización del Estado y fuerte endeudamiento. Hacia 1995 ya aparecían claramente resultados críticos, especialmente en el alto nivel de desocupación y, en general, en el deterioro de la situación laboral. La disminución relativa de la inversión en programas de desarrollo social (educación, salud, etc.), que lleva ya más de un cuarto de siglo, corona un modelo que ha

² Ver: Ricoeur, Paul: "Para una teoría del discurso narrativo", en *Historia y narratividad*, Barcelona, Paidós, 1999; White, Hyden: "El valor de la narrativa en la representación de la realidad", en *El contenido de la forma: Narrativa, discurso y representación histórica*, Barcelona, Paidós, 1992.

llevado a la sociedad argentina a la crítica situación actual. En lo político, a su vez, la crisis remite a una democracia que ha quedado, desde su restauración a fines de 1983, rehén del poder económico financiero, expresando una gran debilidad de construir un proyecto que no siguiera los lineamientos que este poder marcara. La promesa excesiva de que *con la democracia se come, se cura y se educa*³ resultó impracticable. Paralelamente, la época se caracteriza por el deterioro de la imagen pública de los políticos, tanto por su incapacidad de dar lugar a una transformación de las condiciones generales del régimen –ligado esto a la debilidad antes mencionada–, como por la creciente sospecha de corrupción generalizada en el sistema.

En tal contexto, la protesta social se constituyó en la Argentina en un recurso político de peso creciente, al punto que en algún sentido se incorporó a la normalidad política del país. Sin embargo, en su construcción en el tiempo la protesta redefinió a los actores y generó las condiciones de sedimentación que condujeron a situaciones de crisis y ruptura política, de las cuales la que se refleja en nuestro relato es sin dudas la de mayor alcance e importancia. Resulta notable que los políticos no hayan escuchado el mensaje de la protesta social, o lo hayan hecho con una debilidad tal que siguieron creyendo que los mecanismos de representación funcionarían más allá de los contenidos de la política real. He allí una curiosa debilidad, heredera de una concepción teórico – ideológica hoy puesta en cuestión. Se trata de la idea de que la representación se confiere sólo en el voto; esto es, que los ciudadanos transfieren su representación de modo completo a los políticos por medio del voto, y que cualquier remoción de tal función se hará sólo por ese medio. No obstante, lo que sucede es que el representante encarna la representación en sus acciones y no en su cuerpo, por lo que la misma está puesta en cuestión o se refrenda en cada situación de decisión.

La protesta, en tal sentido, es un modo de manifestación de demandas específicas, que ratifican o trascienden, según el caso, las establecidas por el voto. La democracia, así, se convierte en un proceso continuo que incluye la representación, pero obliga a la consideración permanente de las acciones de los representantes y no se trata de un proceso discontinuo entre elección y elección. Es entonces llamativo que el mensaje no haya sido escuchado, considerando que su emisión alcanzó el volumen más alto entre 1997 y 2000. En el 2001 las cartas ya estaban echadas. La Alianza, coalición gobernante desde 1999 hasta su abrupta caída, aquí narrada, asumió en su programa la reforma de la política, orientada a eliminar la corrupción y el clientelismo partidario. Se trataba de una demanda clara

de la mayoría de la sociedad. Sin embargo, bastó que el Presidente De la Rúa asumiera el gobierno para que se manifestaran los límites estructurales de un emprendimiento de ese tipo. El costo, finalmente, fue alto.

De todos modos, como decíamos, la historia de esta crisis es larga. Resulta interesante marcar que el período de Raúl Alfonsín (1983-1989) cayó presa de su incapacidad para controlar las variables económicas y, como se dijo más arriba, a los poderes económicos y financieros, tanto nacionales como internacionales. Carlos Menem tuvo dos períodos presidenciales, gracias a que dio lugar a una reforma constitucional que le permitió la reelección. En el primero (1989-1995) produjo una enorme transformación económica (concretó las privatizaciones de las empresas estatales, cambió el régimen de jubilación, avanzó en la flexibilización de las relaciones laborales, propugnó la apertura y transnacionalización de la economía, controló la crónica inflación argentina⁴). El resultado de la profundización del modelo neoliberal y la alianza con los sectores de la alta burguesía y el poder económico financiero, fue una sociedad profundamente desigual y excluyente, con alta desocupación, pérdida de la capacidad productiva nacional y una inmensa transferencia de recursos, tanto de los sectores trabajadores y medios a los sectores altos, como de los sectores nacionales a los transnacionales, con una constante volatilidad de los capitales.

En este sentido, entonces, la actual crisis no resulta una sorpresa; por el contrario, su desencadenamiento era previsible. Desde el punto de vista económico, se sabía que la incapacidad productiva, la volatilidad de los capitales, la rigidez monetaria de la convertibilidad y el alto endeudamiento estatal conducían al desastre. Desde el punto de vista social, todos los estudios pronosticaban, ya desde los comienzos de los años '90 que el modelo en curso llevaría a una sociedad de alta exclusión⁵.

Quizás pocos notaron que era la última; que la crisis de la Alianza sería la crisis de todo el modelo político. Y, como se dijo, la Alianza fracasó. Podría verse en otro trabajo por qué, pero no cabe duda de que no pudo con la compleja situación económica, pero tampoco pudo producir el cambio político prometido y ni siquiera gobernar dentro de los parámetros existentes. No ha de resultar raro que en las

³ Enunciación reiterada durante su campaña electoral por Raúl Alfonsín, primer presidente del actual período democrático en la Argentina (1983-1989).

⁴ La inflación había llegado en 1989 a una situación inmanejable. El proceso hiperinflacionario desatado (sin que los grandes poderes económicos hubieran sido completamente ajenos a su producción) provocó la salida del gobierno de Alfonsín unos meses antes de los institucionalmente previsto, aunque con elecciones normales mediante. En 1991, el gobierno de Menem establece la paridad fija del peso con el dólar, sobre la base de un régimen de convertibilidad que duraría más de diez años.

⁵ Se hablaba en tales estudios de una inclusión plena de un tercio de la población y una exclusión plena de otro tercio, quedando el restante grupo en condiciones de inclusión precaria.

protestas sociales posteriores al 20 de diciembre creciera una idea que se coronó en una consigna de gran síntesis: *Que se vayan todos, que no quede ni uno solo*. Los sucesivos desencantos sociales con la UCR de Alfonsín, el PJ de Menem y la Alianza de De la Rúa dejan lugar a la idea de que no hay espacio en la conformación actual del sistema político argentino para la representación de amplias y diversas demandas sociales.

Desde el punto de vista de la constitución misma de las fuerzas de la protesta, los acontecimientos producidos desde el 19 y el 20 de diciembre de 2001, el estallido de la situación que hoy narramos, no resultaron tampoco una novedad extrema o inesperada. Los trabajos nuestros y de colegas⁶ revelan un nivel creciente de protestas en la Argentina (en cantidad, primero, en fuerza, luego y en organización, más recientemente) desde hace más de un lustro⁷. De manera tal que hacia mediados del año pasado estaban dadas las condiciones sociales, económicas y políticas (llámese desempleo, niveles inéditos de desigualdad distributiva, pobreza extrema, recesión, desequilibrio fiscal, deuda externa, improductividad de la economía, debilidad política del gobierno, crisis de representación, etc.), que, conjugadas, permitían esperar acontecimientos como los aquí narrados. Sin embargo, sabemos, quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, que una cosa es poder anticipar las condiciones del futuro y otra es saber exactamente cómo se va a presentar ese futuro. De modo tal que su forma concreta suele asombrarnos, aun conociendo las condiciones que la anticipan. Esa forma concreta es la que se ve en el presente trabajo y se caracteriza por los acontecimientos de protesta social que, entre el 19 y 20 de diciembre de 2001, dieron el golpe de gracia a un gobierno ya débil y, desde entonces, dieron lugar a un estado de conmoción y movilización permanente que, a la fecha de escribir estas líneas (más de cinco meses después), aún continúa. Aunque, no con la fuerza y las dimensiones de lo sucedido en el período que abarca este trabajo.

Las huellas del relato

La magnitud y lo atípico de las movilizaciones del 19 y 20 de diciembre, así como la inestabilidad política que inauguraron, suscitaron una buena cantidad de intervenciones que mezclaron de diferente forma el análisis teórico, la impresión

⁶ Véase por ejemplo Scribano, 1999; Scribano y Schuster (2001); Schuster, 1997, 1999; Schuster y Pereyra, 2001; PIMS 1997, 1998, 1999 y 2000; OSAL, 1999, 2000a, 2000b, 2001.

⁷ Resulta interesante señalar que durante la década del '90 tres gobernadores de provincia debieron abandonar sus cargos, dando lugar a la intervención federal, a partir de fuertes acciones de protesta, todas ellas muy diversas entre sí. Se trató de los gobernadores de Santiago del Estero, Catamarca y Corrientes.

periodística y la voluntad militante. Contra lo que sostienen algunas de esas interpretaciones, seguir la trama de las protestas nos permite comprender la complejidad que muestran los acontecimientos y, al tiempo que descubrimos la profundidad y centralidad de las crisis económica y política, también se vuelve inteligible la multiplicidad de respuestas, de actores y de conflictos que se desplegaron en la protesta social.

Los días previos a la caída de De la Rúa muestran una intensificación significativa de la movilización social en un contexto político inestable. Sin embargo, más allá del carácter excepcional de las jornadas de diciembre, todo el entramado de protestas y de movilización en general no resiste una reducción a la unidad y, por el contrario, resulta conveniente diferenciar algunos ejes o dimensiones principales. Efectivamente, los saqueos no responden a la misma lógica que las protestas en sentido estricto, es decir, al o a los cacerolazos y a la movilización de desocupados y piqueteros. Los saqueos son, en el mejor de los casos, expresión de la magnitud de la crisis del país pero, en cierto sentido, son también una forma de movilización y de presión política característica de las ya cíclicas crisis del sistema político argentino. Aún cuando la hipótesis de la movilización clientelar no se considere como eje central para explicar los saqueos -y es cierto que esa hipótesis es insuficiente, fundamentalmente en relación con la generalización del fenómeno- de todas formas, es necesario reconocer que en muchas zonas del país, especialmente en el primer cordón del Gran Buenos Aires, es difícil pensar que esos acontecimientos pudieran producirse y reproducirse por fuera de los canales centrales de contención de la movilización política de los sectores populares: el justicialismo y la policía bonaerenses.

Por el contrario, la organización y movilización de los sectores medios urbanos en Argentina, así como la de los desocupados, sí representan ejes novedosos a ser explorados. Sin embargo, el relato ilustra principalmente la aparición en la escena pública nacional de uno de estos ejes de protesta. Efectivamente, la narración así como la agudización de la crisis argentina tienen su centro en la noche del 19 de diciembre, fecha del primer "*cacerolazo*". Esta última palabra ha pasado a simbolizar la movilización de esos sectores medios a la que hacíamos referencia. Esa noche, presenciamos una nueva irrupción en la política nacional que permitió que la crisis económica y, fundamentalmente, la crisis de la política institucional argentina terminaran de tomar forma.

Ahora bien, esa puesta en acto marcó ciertamente un límite que no fue simplemente el de la capacidad de reproducción del sistema político. Una lectura atenta del relato permite entrever de qué manera, a lo largo de los días y las semanas, van surgiendo extremas dificultades para estabilizar y definir las

demandas propias del cacerolazo. De hecho, la narración de los días que siguen al 19 y al 20 de diciembre cuenta la historia de múltiples resignificaciones del conflicto y, finalmente, la configuración precaria de dos conflictos en particular. El cacerolazo se transformó progresivamente en la expresión de al menos dos de los ejes de movilización de los sectores medios: uno que se concentró decididamente en una pelea frontal por recuperar los ahorros confiscados, perdidos en el colapso del sistema financiero; otro, el de las asambleas, que aún cuando permitieron sostener el conflicto, evitando su clausura como consecuencia de una deliberación que ensanchó al infinito la polisemia del cacerolazo, progresivamente se cerró sobre sí mismo intentando encontrar el núcleo duro y los objetivos centrales de esas nuevas formas de participación política.

Ambos fenómenos representan, sin embargo, una transformación sustancial de la política argentina de los últimos años. Por un lado, pues, la capacidad de contestación de los furibundos ahorristas podría constituir el origen de una política de consumidores responsables, desencantados y dispuestos a controlar la discrecionalidad del funcionamiento económico del particular capitalismo argentino. Por otro lado, porque las asambleas podrían constituirse en polos de participación política que doten de nuevo contenido a la política local en los contextos urbanos.

Un tercer eje de protesta, completamente distinto a los anteriores, es el que involucra la movilización de los distintos sectores de desocupados y piqueteros, más o menos organizados, en distintas regiones de nuestro país. En este punto, habría que afirmar que el 19 y el 20 de diciembre no constituyen fechas claves en la ya larga lucha de desocupados y piqueteros como sí lo son algunas de las jornadas en que se sostuvieron los prolongados cortes de ruta en las provincias de Neuquén, Salta o Jujuy -e incluso en zonas del oeste y sur del conurbano bonaerense, desde 1996 en adelante. Una discusión sobre las características o incluso sobre la existencia misma del movimiento de piqueteros, excede las pretensiones de esta introducción. Sin embargo, la dinámica de esta nueva forma de protesta y movilización social se cruzó con las dimensiones de las crisis económica y política de la Argentina con bastante anterioridad a diciembre de 2001. Los desocupados y piqueteros movilizados llegaron al colapso de la economía y la política en Argentina con varios años de discusión y experiencia sobre las dificultades de su definición identitaria y organizacional. A mediados de 2001, ya existían varias líneas de agrupamiento nacional del movimiento piquetero (FTV, CCC, Bloque Piquetero, Coordinadora Aníbal Verón, Movimiento Teresa Rodríguez) así como una multitud de organizaciones locales de desocupados con varios años de funcionamiento. Es más, dos de esas líneas, tienen su origen en un intenso trabajo de movilización sindical que comenzó durante los primeros años de la década del

'90 y que progresivamente se diferenciaron y autonomizaron de las anquilosadas estructuras tanto de la CGT oficial como finalmente de la disidente. Debe señalarse, en este sentido, que al igual que durante la segunda mitad de los noventa, los sindicatos de docentes y estatales han jugado un rol fundamental en la organización y desarrollo de la protesta social.

En un artículo de 1985, el historiador Charles Tilly, analizó de manera sugerente las falencias que presentan los modelos de explicación de la acción colectiva, para entender situaciones de intensa movilización e inestabilidad política tales como las revueltas, estallidos, crisis o ciclos de movilización⁸. Al igual que la crisis de diciembre de 2001, la primavera de 1906 en Francia daba la impresión de constituir un desorden descontrolado. En buena medida, estas formas de designar y describir y calificar los hechos -de entre las cuales el estallido representa el paradigma en la historia de la protesta argentina de los últimos tiempos- se construyen sobre la base de prejuicios y definiciones estigmatizantes que tanto autoridades, como gobernantes y elites, suelen tener respecto de la movilización social. Asimismo, también se apoyan en las visiones que homogeneizan toda forma de lucha popular basada en la movilización y la protesta, descuidando los "*detalles*" que nos propone recuperar Tilly, cerrando el camino, por ende, a una versión más densa de los hechos que contenga, al menos, la perspectiva y los modos de ver de los propios actores.

Finalmente, en nuestro caso, recurrir a la puesta en trama implica la elección de una perspectiva metodológica distinta respecto de cualquier enfoque que afirme la homogeneidad y unidireccionalidad del fenómeno de la crisis argentina de diciembre y enero. Esa apuesta tiene la ventaja de recuperar tanto una dimensión histórica como una cotidiana de los hechos y, por ende, permite comprender, aún cuando los acontecimientos se muestren vertiginosos. Considerando que hasta la fecha resulta imposible realizar interpretaciones concluyentes hemos optado por presentar el material de manera tal que constituya una base para la polémica.

El relato

Domingo 16 de diciembre de 2001:

Como antecedente de los saqueos generalizados que se producirían tres días después, unas 800 personas tomaron en Concordia, provincia de Entre Ríos, uno de

los tres supermercados de la firma Maxi Total que recientemente se había declarado en estado de quiebra. El grupo, constituido por indigentes, rodeó la sucursal a la espera de que el síndico de la empresa quebrada permitiera la entrega de carne, pastas, verduras y otros productos que corrían el riesgo de descomponerse en los depósitos del supermercado sin que fueran consumidos. Finalmente, ingresaron en el local por la fuerza y se llevaron gran cantidad de comida pese a que la policía provincial recibió refuerzos de ciudades vecinas como Villaguay, Federación, Colón y San Salvador. En tanto, otro grupo intentó entrar al hipermercado Norte que, por prevención, ya había bajado sus cortinas y cerrado sus puertas. Una gran cantidad de policías custodiaba el lugar.

En las afueras de la ciudad capital de la provincia de Mendoza, unas 300 personas saquearon supermercados y almacenes de barrio por cuarto día consecutivo. En el departamento de Las Heras, la policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a unas setenta personas en defensa de un supermercado de la cadena Átomo, que ya había sufrido saqueos durante esos días en otros de sus locales. Los manifestantes, apostados en la puerta de entrada del supermercado, rompieron los vidrios del frente del local y quemaron cubiertas. Ante el intento de la policía de repeler el desorden, los protagonistas, exaltados, se defendieron con piedras. Hubo cuatro detenciones. El incremento de seguridad frente a los super e hipermercados fue en detrimento de los pequeños comercios – lo cual constituiría una de las permanentes demandas de los pequeños y medianos comerciantes durante los días venideros-: varios locales de comestibles fueron robados. En el departamento de Guaymallén, treinta personas robaron toda la mercadería de una carnicería y otro grupo logró ingresar en un centro avícola del que se llevaron pollos y huevos. El gobernador de la provincia, Roberto Iglesias (Alianza), acordó con los dueños de los supermercados entregar bolsas con alimentos a los pobladores de los asentamientos más humildes, buscando calmar la tensión de los manifestantes. En el término de una semana fueron saqueados cinco supermercados en la ciudad y algunos comercios minoristas. Voceros oficiales del partido de gobierno provincial acusaron a *punteros*⁹ del Partido Justicialista (PJ) que responden al sector liderado por el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, de “*alentar y dirigir*” esas acciones. El justicialismo lo negó. Idéntica acusación, proferida incluso por algunos sectores del sindicalismo independiente, se repetiría luego de la andanada de saqueos del 19 de diciembre.

⁸ Tilly, Charles, "Models and Realities of Popular Collective Action", *Social Research*, vol. 52, n° 4 (invierno de 1985) ["Modelos y Realidades de la Acción Colectiva Popular", en *Revista Zona Abierta* 54/55, 1990].

Lunes 17 de diciembre:

Hubo distintas protestas contra las nuevas medidas económicas que se centralizaron principalmente en el cuestionamiento de la retención provisoria de los depósitos establecida por el Poder Ejecutivo a principios del mes de diciembre, con el fin de resguardar al sistema financiero de lo que se estimaba un posible derrumbe con consecuencias imprevisibles. Sólo se permitía retirar una cantidad limitada de dinero efectivo de los bancos por semana mientras toda otra transacción quedaba restringida a operaciones en el interior del sistema financiero. De aquí en adelante, nos referiremos a este conjunto de medidas con la irónica nominalización con la que se lo identificó unánimemente y de manera casi inmediata: “el corralito bancario”.

Unas 400 personas, entre comerciantes y empresarios del partido de La Matanza (GBA¹⁰), cortaron desde el mediodía la Av. General Paz, a la altura de Lomas del Mirador. En medio de una ruidosa concentración expresaron su rechazo a las medidas económicas implementadas por el gobierno y en reclamo del pago en término de los haberes de jubilados y estatales de la zona. La protesta fue organizada por la Federación Empresaria de La Matanza y el Centro Comercial, Industrial y Profesional de Tapiales, que lanzaron un *“Alerta Roja en Defensa de Nuestros Derechos y Empresas”*.

En el barrio porteño de Núñez, comerciantes y vecinos cortaron la Av. Cabildo al 3700, en señal de protesta y preocupación por las ventas que -según dijeron- cayeron *“un 30 por ciento en las últimas tres semanas”*. Por ese motivo protestaron también los vecinos y comerciantes del barrio de Caballito en la esquina de Acoyte y Rivadavia. Vecinos y cámaras empresarias proyectaban un cacerolazo en Córdoba y Scalabrini Ortiz, donde se concentra gran cantidad de comercios, mayoritariamente de venta de indumentaria.

Dirigentes, empresarios y trabajadores de la industria del calzado se manifestaron en una caravana de 35 combis y camionetas en reclamo de medidas para su sector. La lenta caravana circuló en medio de bocinazos por las céntricas avenidas Julio A. Roca e Hipólito Yrigoyen hasta la Plaza de Mayo y provocó embotellamientos de tránsito que alteraron la circulación por las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires.

Un grupo de bailarines del Teatro Colón de Buenos Aires protestó frente a la sede del Gobierno de la Ciudad, en Avenida de Mayo y Bolívar,

⁹ Operadores políticos directamente vinculados a ciertos líderes políticos que desarrollan diversas actividades clientelísticas a nivel barrial.

¹⁰ Se denomina Gran Buenos Aires (GBA) al cinturón urbano aledaño a la ciudad de Buenos Aires donde se registran los más altos índices de concentración de población de la República.

frente al Cabildo y la Plaza de Mayo, para exigir la estabilidad laboral de los trabajadores del teatro.

En distintas ciudades y regiones del país se produjeron nuevos saqueos. En Rosario, provincia de Santa Fe, los habitantes de una villa de emergencia cercana al barrio La Travesía instalaron un piquete¹¹ cuya demanda era básicamente alimentaria. La protesta había comenzado el viernes con un reclamo similar que, según la policía, había podido controlarse. Ese lunes, unos cien manifestantes, entre ellos, mujeres, adolescentes y niños, se juntaron en un cruce de avenidas, cortaron el tránsito y quemaron cubiertas. Se habían apostado allí alrededor de las 11 de la mañana a la espera de una supuesta promesa de entrega de bolsones con alimentos. Ya entrada la media tarde, los alimentos no llegaban y el choque entre policía y manifestantes parecía inevitable. Ante la amenaza de que pudieran producirse saqueos, la policía intervino y reprimió con dureza, disparando cartuchos “antitumulto” y gases lacrimógenos; los manifestantes, en tanto, buscaron defenderse y respondieron con piedras. La refriega dejó más de veinte heridos por balas de goma, uno de ellos con 22 impactos en su cuerpo, y tres policías lesionados por piedras, uno de los cuales fue mordido además por un perro en su pantorrilla. Pasada la represión, alrededor de las 18, los gobiernos provincial y municipal hicieron llegar alimentos al lugar, 250 cajas de las veinte mil que prometieron entregar.

En Concordia, dos mil personas se instalaron en la playa de estacionamiento de un supermercado de la cadena Norte. La presencia del director de Asistencia Social provincial, Héctor Londra, y su promesa de que ese gobierno asistiría a las ocho mil familias necesitadas de la ciudad calmaron la tensión de los manifestantes.

Sin embargo, la novedad de ese día fue que el conflicto por la falta de alimentos se trasladó a Quilmes, en el Gran Buenos Aires, donde unos dos mil manifestantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón exigieron comida frente a los supermercados Auchan y Carrefour. La protesta terminó a primeras horas de la noche, luego de una asamblea en la que los manifestantes decidieron aceptar la propuesta tripartita hecha por los gobiernos nacional y provincial, y los supermercados de recibir tres mil bolsones de alimentos

¹¹ Un piquete es un corte de ruta que interrumpe la circulación por un tiempo determinado. En general, los cortes son de 24 horas como mínimo y convocan a un conjunto de personas que desarrollan todo tipo de actividades en el espacio del piquete: música, fútbol, comercio, tribunas políticas, ollas populares, etc. La puesta en escena del piquete consiste en la quema de gomas que producen altas e impactantes columnas de humo. En relación con esta puesta en escena de la protesta social, se denomina al movimiento de desocupados surgido a mediados de la década del '90 como movimiento piquetero.

frescos con veinte kilos cada uno y que el viernes quedarían saldados los pagos adeudados por los planes Trabajar.¹²

Por otra parte, un paro de los trabajadores ferroviarios dejó totalmente inactivo el servicio de trenes de pasajeros y de carga en todo el país. La medida fue tomada por los gremios de esa rama de trabajo, La Fraternidad y Unión Ferroviaria, en solidaridad con los empleados de la compañía Ferroexpreso Pampeano que había suspendido sus operaciones desde el miércoles 12 hasta fines de enero y amenazaba con despedir a sus 800 empleados. Durante el día, los trabajadores impidieron incluso la salida de servicios de emergencia (cada 30 minutos) instalando piquetes sobre las vías de algunas líneas en distintas localidades del conurbano. La empresa, controlada por el grupo económico Techint, llegó a un acuerdo con los gremios por el cual se comprometió a pagar el 70 por ciento de los sueldos adeudados de noviembre y reiniciar sus actividades. El paro se levantó a última hora de la jornada laboral y comenzaron a funcionar algunos trenes de pasajeros. Ferroexpreso Pampeano opera los corredores de carga Rosario-Puerto Belgrano (Bahía Blanca), una red de cinco mil kilómetros, y su principal actividad es el transporte de cereal.

Por su parte, tuvo buena respuesta la consulta popular organizada en todo el territorio nacional por el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO)¹³ durante los días 14, 15, 16 y 17 de diciembre. El escrutinio del 65 por ciento de las urnas arrojó 1.755.249 de votos positivos a dicha consulta, con proyección a superar los tres millones. El eje de la consulta fue la creación de un seguro de empleo y formación de 380 pesos para todos los jefes y jefas de hogar desocupados, y el establecimiento de una asignación universal de 60 pesos por hijo menor de

¹² Subsidios de entre 120 y 150 pesos que desde el gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales se entregan a grupos de desocupados y organizaciones de piqueteros-desocupados como paliativo frente a la falta de empleo.

¹³ Forman el FRENAPO: dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Víctor De Gennaro, Claudio Lozano, Marta Maffei, Víctor Mendibil, Juan Carlos Camaño, Alberto Morlachetti, Luis D'Elía, Alberto Pichinini, Juan González y Pedro Wasiejko; diputados nacionales, Héctor Polino, Alfredo Bravo, Oscar González, Jorge Rivas, Elisa Carrió, Marcela Bordenave, María América González, Jorge Giles, Eduardo Macaluse, Elsa Quirós y Gustavo Cardesa; el padre Luis Farinello; dirigentes de APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios); Floreal Gorini, Edgardo Form, Carlos Heller y Juan Carlos Junio del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos; Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria Argentina; Manuel Herrera (ARI); Estela Carlotto y Rosa Roisinblit, por Abuelas de Plaza de Mayo; Laura Conte y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora; el pastor José De Luca y Osvaldo Ullrich, por el MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos); Adolfo Pérez Esquivel por el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia); Horacio Verbitsky, del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales); los obispos metodistas Federico Pagura y Aldo Echegoyen; la Hermana Marta Pelloni; el Rabino Daniel Goldman, de la Comunidad Bet El; Antonio Forte, por la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados; Miguel Gazzera, del Sindicato de Fideeros, Fortunato Mallimaci, hasta entonces decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; Juan Carlos Dante Gullo (APDH); Rodolfo Liberman (Mesa de Jubilados y Pensionados); Nora Podestá (UMA); Graciela Rosemblum (LADH); Alfredo Villalba (Dip. Nacional).

dieciocho años. El reclamo por un seguro de desempleo¹⁴ conformó una de las banderas de las agrupaciones que nuclean a los desocupados desde su formación a mediados de la década del '90, entre ellas, de la CTA, que organizó la consulta popular en todo el país.

Martes 18 de diciembre:

Industriales y trabajadores del calzado protestaron conjuntamente frente al edificio de la Cancillería en reclamo de mayor protección para esta rama de la producción ante la *"invasión de importaciones brasileñas"*. En la manifestación participaron militantes del sindicato del sector, encabezados por Agustín Amicone y el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Rodolfo Daer, sumando unas dos mil personas que transportaban árboles de Navidad contruidos con zapatos y llevaban carteles con leyendas. Frente al edificio de la Cancillería, arrojaron zapatos, zuecos, botas y calzado de mujer.

Luego de seis días de saqueos, el gobierno nacional dispuso la distribución de comida entre los sectores más pobres en distintos lugares del país con el propósito de dar solución a una situación de conmoción del orden público que venía en franco crecimiento. También se decidió pagar con Letras de Cancelación Obligatoria Provincial¹⁵ (Lecop) las raciones de comida que el Estado comprara en adelante.

Entre tanto, la situación en las provincias seguía siendo difícil. En Concordia nuevos intentos de saqueo fueron frustrados por la policía, y se entregó comida para chicos desnutridos, mujeres embarazadas y discapacitados. En Córdoba hubo un refuerzo de bolsones alimentarios para los sectores más pobres y se prometieron bolsones adicionales con productos navideños. En Rosario, la distribución de ocho mil cajas de comida y la promesa de otras veinte mil calmó un tanto la situación vivida en los últimos días.

La mayor tensión se vivió en distintos puntos del GBA: en Billinghamurst, localidad del partido de San Martín, saquearon un supermercado Día que no tenía custodia privada ni vigilancia pública alguna. *"Vamos, agarren, pero guarda con la caja"*, ordenó uno de los cabecillas del saqueo. En 16 minutos, hombres y adolescentes, en su mayoría, se llevaron alimentos, bebidas y pañales. La policía llegó al mercado una vez ocurrido el robo. En otros locales del ramo y demás comercios cercanos a éste no hubo saqueos; la seguridad y la importancia comercial de esos negocios eran mayores. En Villa Martelli, se entregaron productos

¹⁴ El FRENAPO reivindica el subsidio de *empleo* (frente al de *desempleo*) por considerar las exigencias de los desocupados como parte de la problemática de los trabajadores.

frente a un supermercado Sol, y en Avellaneda fue notorio el refuerzo de seguridad en las cercanías de los supermercados con patrulleros, más policías y vallados.

En la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, grupos de desocupados de las localidades de Quilmes, Lanús y Berazategui reclamaron planes Trabajar frente al Ministerio de Trabajo.

Alrededor de las 21, en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), ciudad ubicada a 320 kilómetros de Buenos Aires, mil personas, entre las que se contaban familias enteras de distintos sectores de la ciudad, saquearon cinco supermercados (cuatro de los siete supermercados de la cadena Riccio y uno de la cadena Gran Rex) y se llevaron alimentos, bebidas alcohólicas, artículos de limpieza, bicicletas, productos de bazar y electrodomésticos. Cerca de las dos de la madrugada del 19 llegaron dos patrulleros y un autobomba al supermercado El Gurí, que ya estaba prácticamente vacío, e impidieron el ingreso de más gente en el local. No hubo represión. En las calles de la ciudad, se multiplicaron algunos robos y daños de negocios en el centro, en los que no hubo intervención policial por estar la mayoría de sus efectivos en las zonas de los saqueos que ocurrían en la vecina ciudad de Concordia.

También por la noche, pero en el partido bonaerense de San Miguel, la policía dispersó con balas de goma y gases lacrimógenos a 500 personas que saquearon pequeños comercios, rompieron vidrieras y robaron mercaderías de todo tipo. Los saqueadores respondieron con piedras a las balas policiales. Luego, las cámaras de televisión mostraron las heridas de bala de algunos de ellos; también hubo heridos entre los policías.

Miércoles 19 de diciembre:

Por la mañana, representantes del gobierno nacional, organizaciones no gubernamentales (ONG), legisladores, empresarios y sindicalistas se reunieron en la sede de Cáritas para analizar la situación social. Las deliberaciones se desarrollaron en el marco de la concertación que impulsaba el gobierno de la Nación y para la que la Iglesia Católica ofreció el “*ámbito espiritual*” de las tratativas. En la reunión, que había sido convocada por las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se analizarían los resultados de un informe sobre la situación de la democracia en el país que elaboró ese organismo internacional.¹⁶ El presidente

¹⁵ Uno de los numerosos bonos emitidos por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales con el objetivo de hacer frente a obligaciones fiscales sin la emisión de pesos, que estaba restringida por la ley de Convertibilidad entre el peso y el dólar vigente desde 1991.

¹⁶ De la reunión tomaron parte el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo; el ministro del Interior, Ramón Mestre; el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo; y el subsecretario de Comunicación, Juan Pablo Baylac. También asistieron los gobernadores de

Fernando De la Rúa fue agredido e insultado al llegar al edificio. En la misma reunión fue también duramente criticado por los dirigentes presentes. La acelerada pauperización de amplios sectores de la población y la morosidad en el desarrollo de planes de asistencia social constituyeron el núcleo de los reclamos.

En la ciudad de Córdoba -sede de las más importantes protestas del proletariado urbano en la historia argentina-, haciendo uso de la fuerza, unos 100 empleados de la Municipalidad irrumpieron durante la mañana en el palacio comunal ubicado en pleno centro. Provocaron un incendio en la planta baja y rompieron vidrios y muebles. Frente a esta situación, se desalojó todo el edificio. Al tiempo que una densa columna de humo salía de las ventanas de la planta baja, efectivos de la Guardia de Infantería ingresaron para controlar los disturbios. Hombres del gremio municipal negaron que los incidentes tuvieran relación con ellos. Mientras tanto, en una entrevista con una radio de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota decía: *“se está dando una anarquía”,* y advirtió sobre *“la falta de autoridad”* del gobierno del presidente De la Rúa en momentos en que *“los pobres viven en el desamparo y hay inquietud e intranquilidad entre los ricos (...) no hay ningún sector social que se encuentre satisfecho con lo que está viviendo”*. Culpó, no obstante, a la dirigencia política por la crisis actual.

En Concepción del Uruguay (Entre Ríos) el intendente, los dos jueces de instrucción y sus empleados, y el párroco debieron atrincherarse en la Jefatura de la Policía ante la amenaza de que quienes la semana anterior habían saqueado supermercados asaltarían esta vez los edificios públicos. Al fin de esa jornada, el enfrentamiento entre manifestantes y policías causó 15 heridos y 30 detenciones. Pasado el mediodía el pánico por la posible comisión de delitos contra el orden y la propiedad había alcanzado dimensiones nacionales.

En la ciudad de Buenos Aires, ante el temor de probables saqueos, los dueños de diferentes negocios de los barrios de Once, Tribunales, Palermo, Barracas, Flores, Liniers, Villa Devoto y Villa Lugano empezaron a bajar las persianas al mediodía. El rumor y la amenaza se propagaron luego de que grupos de vecinos comenzaron a recorrer los centros comerciales de distintos barrios. Por ejemplo, un grupo de cien personas se juntó en la esquina de las avenidas Pueyrredón y Corrientes (pleno centro comercial del barrio de Once) y pidieron

Córdoba, José Manuel de la Sota; y del Chaco, Ángel Rozas; el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Aníbal Ibarra; los senadores Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde. Además, participaron los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren; de la Sociedad Rural (SRA), Enrique Crotto; de la CAME, Osvaldo Cornide; de la Cámara Argentina de la Construcción, Gregorio Chodos; de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, José María de Simone; los responsables de la CGT oficial y disidente,

comida y ropa a los comerciantes. La división de Comunicación Social de la Policía Federal intentó disuadir informando que la situación en el área metropolitana estaba controlada. Si bien no se registraban mayores inconvenientes en el radio de la ciudad de Buenos Aires, el comunicado policial no hizo más que multiplicar los rumores.

En el GBA, en la localidad de Sarandí, unas cien bolsas con alimentos fue el acuerdo al que llegaron los manifestantes de Villa Luján, la policía y los dueños del mercado Long Hot. La policía ofició de intermediario del acuerdo entre la dueña del comercio y los 300 manifestantes de esa villa de emergencia, una de las más grandes de la zona, que estaban allí desde el mediodía: a los cabecillas de la protesta se los condicionó a desistir de cualquier acción violenta y a la dueña del comercio se le informó que los ánimos de los manifestantes estaban caldeados. Las bolsas contenían yerba, azúcar, arroz, fideos, puré de tomate, atún, harina y polenta, que sumaban unos siete kilos en víveres. En otra localidad del conurbano, José León Suárez, 40 personas saquearon un supermercado Norte luego de conseguir ingresar por los fondos del local. Al llegar la policía, los saqueadores escaparon con lo que habían logrado meter en los changuitos. Otras 200 personas esperaban en la puerta del lugar; las persianas ya estaban bajas, pero la policía que lo custodiaba aseguró que les serían entregados algunos alimentos. Entre los manifestantes se encontraban mujeres y niños, y no había ningún atisbo de violencia. De repente, la policía tiró una bomba de gas lacrimógeno dentro del supermercado y todos comenzaron a correr. Los efectivos policiales se apresuraron entonces a cargar una y otra vez sus escopetas, que lanzaban balas de goma contra los manifestantes. Muchos de ellos quisieron enfrentarlos tirándoles piedras. Una de ellas, que golpeó en el hombro a un policía, enfureció a su compañero, quien sacó su arma y disparó con balas de plomo. En unos minutos, los manifestantes se dispersaron. Cerca de allí, el autoservicio Darío ya había sido vaciado cuando llegó la policía. Su dueño, armado, había disparado algunos tiros al aire buscando ahuyentar a las personas que se habían juntado en la puerta de su negocio, pero de poco sirvió, puesto que lo atacaron a pedrazos y tuvo que refugiarse. Los saqueadores forzaron las persianas que ya estaban bajas y se llevaron todo lo que pudieron y encontraron a su alcance.

En las rutas, la situación también era inestable. Varios camiones de la firma Swift, líder en patés y picadillos, fueron apedreados y saqueados en la zona de Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe), donde la empresa posee una planta distribuidora, y en Rosario. Algo similar les ocurrió a algunos transportes de la empresa Molinos y

de lácteos La Serenísima, cuyos camiones regresaban con la devolución de la mercadería a General Rodríguez (donde está la planta matriz). Todas estas firmas y otras más resolvieron en el curso del día suspender sus tareas y el traslado de mercaderías de sus transportes.

Por la tarde, la mayoría de los comercios porteños ubicados en la distinguida Av. Santa Fe ya estaban cerrados. La misma situación se dio en los comercios de las galerías aledañas a las líneas de trenes subterráneos, ubicadas en las estaciones 9 de Julio, Carlos Pellegrini y Diagonal Norte.

Con respecto a los saqueos, desde el gobierno nacional se adjudicó cierta pasividad policial en el conurbano bonaerense a una maniobra de sectores del PJ. Sin embargo, la policía de esa provincia reprimió en el propio conurbano, como así también en La Plata, donde estatales y docentes habían protestado frente a la Legislatura Provincial contra el gobernador Ruckauf (PJ) y su proyecto de achicar el presupuesto 2002 de la provincia en un 20 por ciento. Hubo veinte heridos en la marcha que, convocada por la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), había sumado a dos mil maestros, judiciales, administrativos y trabajadores de hospitales públicos. También hubo represión policial en las provincias de Santa Fe (ciudades de Santa Fe y Rosario), Río Negro (ciudad de Cipoletti), Mendoza, Corrientes y Entre Ríos. El saldo fue de siete muertos y casi 140 heridos (76 de ellos, policías). En todos los casos, las muertes se produjeron por enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, y por disparos de los propietarios de comercios saqueados. Hubo 551 detenciones (350 en el GBA).

Ante el incremento de saqueos, represión, violencia y amenaza simultáneas, el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, convocó a todos los miembros de la fuerza en sus respectivos puestos de trabajo para intervenir en casos de disturbios como los que se estaban registrando ese día. *“Esto incluye a quienes están de franco y a los que están cumpliendo (trabajos) adicionales, quienes deben presentarse en sus destinos y permanecer allí durante la noche”*, había informado una fuente de esa fuerza. Similar medida se tomó en la provincia de Buenos Aires: *“Todos deben estar abocados a esta tarea de reprimir desmanes. La prioridad es esto”*, había explicado Ernesto Soria Paz, vocero del ministro de Seguridad bonaerense, Juan José Álvarez, aunque aclaró que la represión en los casos de saqueos era la *“última opción”*.

Casi al fin de la tarde, el gobierno nacional dispuso la puesta en marcha de un Programa de Emergencia Alimentaria de siete millones de pesos para tratar de paliar la grave crisis social que provocaron los saqueos. La suma se distribuiría en

los sectores más vulnerables y de extrema pobreza. El subsecretario de Comunicación, Juan Pablo Baylac, denunció que habían detectado la presencia de “activistas” en algunos saqueos a supermercados. *“En algunos casos existe activismo e inducción a la violencia, y en otros, una situación concreta de requerimiento alimentario.”* La cuestión del “activismo”, aún sin demasiadas precisiones acerca de las características de la práctica o la persona que así se aludía, constituyó uno de los principales argumentos a través de los cuales el gobierno justificó el carácter precipitado y simultáneo de los acontecimientos.

Finalmente, a última hora de la tarde, el presidente De la Rúa decretó el estado de sitio por treinta días en todo el territorio de la Nación como respuesta a los *“hechos de violencia generados por grupos de personas que en forma organizada promueven tumultos y saqueos en comercios de diversa naturaleza”*, según argumentaba el texto del decreto 1678/2001 del Poder Ejecutivo.¹⁷ Y agregaba: *“considerando que han acontecido en el país actos de violencia colectiva que han provocado daños y puesto en peligro personas y bienes con una magnitud que implica un estado de conmoción interior”*. Alrededor de las 19, en la esquina de las avenidas Córdoba y Scalabrini Ortiz, que liga a los barrios de Palermo y Villa Crespo, se organizó una batucada¹⁸ para protestar por la situación económica y se corearon cantos contra el ministro de Economía Domingo Cavallo y contra De la Rúa. En el barrio de Liniers, los comerciantes de la zona cortaron el tránsito protestando por el mismo motivo. Y en Barrio Norte y Belgrano se escucharon los primeros golpes de cacerolas, espumaderas y distintos implementos de cocina que conformarían el paisaje sonoro de varias ciudades del país durante meses. Poco antes de las 23, con un tono algo dubitativo y con notorios síntomas de abatimiento, De la Rúa leyó por la cadena nacional de radio y televisión un breve discurso de cuatro minutos en el que se buscaba informar y justificar el decreto que imponía el estado de sitio.¹⁹ El Presidente aludió a *“grupos enemigos del orden y de la República que aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no puedan alcanzar por la vía electoral”*. No obstante, concedió: *“Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social, pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o*

¹⁷ La norma mencionada fue derogada dos días más tarde por el decreto 1689/2001, firmado por el propio De la Rúa (junto con su jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el entonces ministro de Defensa, José H. Jaunarena), cuyo único considerando sostiene que “...en esta instancia, corresponde disponer su levantamiento, a fin de restablecer la plena vigencia de las garantías consagradas por la Constitución Nacional”. Ese mismo día (21/12/2001) el presidente interino Ramón Puerta firmaba el decreto 16/2001 y declaraba el estado de sitio en el territorio de la provincia de Buenos Aires por el término de diez días.

¹⁸ Expresión musical inspirada en los ritmos de samba tradicionales del carnaval brasileño, que se utiliza como forma de protesta.

delincuentes.” Y añadió: *“Las causas de esta situación vienen de lejos, todos los que hemos gobernado durante décadas nos debemos la autocrítica. Sólo saldremos adelante si asumimos nuestra responsabilidad histórica y dejamos de echarnos mutuamente culpas.”* Afirmó también: *“Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas, las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas, los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo (...) Así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas.”* De la Rúa finalizó con un pedido expreso de apoyo a la dirigencia política: *“Convoco una vez más a la responsabilidad de la dirigencia nacional y pido a mis compatriotas mantener la calma y colaborar para el restablecimiento del orden.”* En definitiva, el discurso se organizó sobre cuatro ejes temáticos: el reconocimiento oficial de que el orden público había sido definitivamente alterado, la virtual criminalización de cualquier participante en los saqueos y manifestaciones, la extensión de la responsabilidad por los acontecimientos a toda la clase política y, por último, el llamado a algún tipo de cogobierno que, en función de la responsabilidad compartida y por la profundidad de la crisis, debía ser concertado a la brevedad. Poco antes, el ministro del Interior, Ramón Mestre, había afirmado: *“Las fuerzas de seguridad actuarán decididamente para disuadir y dispersar a quienes se muestren en actitud sospechosa.”* Desde la oposición, figuras salientes del PJ, como el ex presidente Carlos Menem, el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf y el senador Eduardo Duhalde, apoyaron el decreto, pero impulsaron solapadamente la renuncia del ministro Cavallo; algunos rumoreaban también la caída inminente del gobierno de De la Rúa.

Luego del discurso presidencial, comenzó a escucharse en la mayoría de los barrios de la ciudad el cacerolazo, reprobando el discurso y el decreto mismo del estado de sitio. Desde los balcones y ventanas de los edificios de departamentos, los vecinos se sumaban al cacerolazo, acompañados de los bocinazos de colectivos de línea, taxis y autos particulares. Espontáneamente, en las esquinas se fueron armando grupos de manifestantes que portaban cada uno distintos trastos de cocina, como ollas, sartenes, tapas, espumaderas, hervidores, cucharones y demás objetos que produjeran ruido.

Quienes se juntaban sin trasto alguno, acompañaban con palmas. Y de las reuniones espontáneas en las esquinas se pasó a la marcha espontánea, que tomó su rumbo por las distintas avenidas de la ciudad. La espontaneidad de este primer gran cacerolazo, sin duda, una de sus principales características, pudo reconocerse

¹⁹ Véase Anexo Documentos.

en el detalle de la vestimenta de los participantes. Saltos de cama, ojotas, pantuflas, remeras raídas, pantalones cortos, camisetas, etc., simbolizaban el inmediato tránsito de lo privado a lo público. Los vecinos iban sumándose sin saber adónde se dirigían. Finalmente, los puntos centrales fueron, entre otros, la Plaza de Mayo, la Plaza del Congreso, el Obelisco, el monumento al Cid Campeador (próximo al Parque Centenario), el frente del edificio donde reside el ministro Caballo (en Av. del Libertador y Ocampo) y conocidas esquinas como Independencia y Entre Ríos, y Pueyrredón y Córdoba. La protesta se extendió a otras ciudades como Rosario y La Plata, y al GBA. Principalmente, participaron de la manifestación los sectores medios y populares urbanos, que constituyen la mayoría de la población de la ciudad de Buenos Aires.

Al tiempo que las cuadras se cubrían de manifestantes, en algunas esquinas se improvisaban fogatas con basura, los recipientes plásticos que la contenían y que están apostados en la vía pública, algunas maderas, gomas y demás objetos inflamables. Algunos manifestantes utilizaron también esos contenedores para golpear con palos y acompañar el ruido de las cacerolas. La invasión de calles y avenidas provocó la anulación fáctica del tránsito: colectivos, taxis y autos se solidarizaban con quienes marchaban por el asfalto tocando las bocinas de sus vehículos. Se escucharon cánticos del tipo: *“Salta, salta, salta, pequeña langosta, De la Rúa y Menem son la misma bosta...”*; *“A ver, a ver, quién maneja la batuta, si el pueblo unido o el gobierno hijo de puta (yuta puta...)”*; *“Sin radicales, sin peronistas vamo' a vivir mejor...”*; *“Qué boludos, qué boludos, al estado de sitio, se lo meten en el culo...”* y *“Que se vayan todos”*.

Otro punto saliente de esta protesta fue su carácter desafiante a la autoridad estatal, puesto que bajo el estado de sitio quedan suspendidas las garantías constitucionales y, por lo tanto, derechos como el de reunión no están contemplados. La gran cantidad de manifestantes impidió que el Estado, al menos en las últimas horas del 19, disuadiera con represión a los manifestantes. Sin embargo, la madrugada del 20 mostraría un escenario totalmente distinto.

Curiosamente, el “cacerolazo” como acción de protesta surgió en 1998 en el seno mismo de la Alianza cuando, una vez constituida por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frepaso, buscó desde la oposición captar futuros votos independientes mediante este tipo de protestas contra el gobierno de Carlos Menem y las sospechas de corrupción que caracterizaron su gestión.²⁰ Esta vez, el cacerolazo surgió en el mismo

²⁰ Como antecedentes más aislados, cabe mencionar que en octubre de 1990 se registró en la provincia de Buenos Aires un cacerolazo realizado por docentes de CTERA en reclamo de mayor presupuesto para educación. Por otro lado, en mayo de 1993, la CONADU, organización gremial de docentes universitarios, organizó un cacerolazo en demanda de

bastión de la ahora disuelta fuerza política gobernante: la ciudad de Buenos Aires. Los cuestionamientos al gobierno de De la Rúa que se desprendieron del cacerolazo giraron en torno a la bronca por el discurso presidencial, que se consideró desvinculado de las preocupaciones de la ciudadanía, la angustia y la sensación de amenaza por los saqueos, el caos bancario provocado por las restricciones de efectivo de las últimas semanas, la siempre creciente desocupación y la crisis económica reinante, los sucesivos impuestazos sobre los sectores medios urbanos y populares, los recortes salariales a esos sectores, cristalizados en los empleados estatales y docentes y, como trasfondo de todo ello, una rotunda descalificación moral de la dirigencia política.

Las esquinas que albergaron esa noche las espontáneas reuniones y manifestaciones de "caceroleros" en las ciudades más importantes del país, constituirían a su vez el escenario -en los días siguientes- para la formación de numerosas asambleas populares.

Jueves 20 de diciembre:

Poco después de la medianoche, la Plaza de Mayo, el Congreso de la Nación, el frente del edificio de departamentos en el que vivía el ministro de Economía y la residencia presidencial de Olivos albergaban gran cantidad de manifestantes; había ruido de cacerolas y continuaban los cánticos. Entre los manifestantes había jóvenes, jubilados, familias enteras, alguna que otra joven pareja con su primer hijo en brazos. A pesar de la crisis, el escenario rememoraba el júbilo producido por el contagio afectivo de una verdadera fiesta cívica.

En la Plaza de Mayo, sobre la explanada contigua al edificio de la Casa Rosada, en la calle Balcarce, que separa la Casa de Gobierno de la plaza, se habían apostado numerosos efectivos policiales. De repente, se dio la primera corrida de manifestantes desde ese sector de la plaza hacia atrás, en dirección a la calle Bolívar, paralela a Balcarce, que enfrenta a la otra punta de la plaza con los edificios del Cabildo y del Gobierno de la ciudad. Los policías habían tirado la primera bomba de gases lacrimógenos. Minutos después, una nueva corrida marcó la primera desmovilización de la plaza. El temor y la tensión de los noveles manifestantes provocaron corridas por Avenida de Mayo, y las diagonales Norte y Sur. Algunos pedían a gritos que no corrieran *"porque no pasaba nada, sólo eran gases"*; otros proponían esperar un rato en esquinas cercanas y volver a la plaza;

mejoras salariales. En ambos casos, la protesta fue utilizada como "inauguración" de planes de lucha. Asimismo, en noviembre de 1997, los vecinos de la ciudad de Cipoletti organizaron un bocinazo y cacerolazo para pedir la renuncia de un cuestionado juez que intervenía en una causa de triple homicidio.

otros corrían y se dispersaban al tiempo que vociferaban: “¡Hijos de puta, hijos de puta, hay chicos y bebés!” Todos sentían el intenso ardor que los gases provocan en los ojos, gargantas y narices; algunos, más experimentados, se mojaban la cara bajo las canillas de las puertas de los edificios o en las alcantarillas de las avenidas. Las cacerolas y cánticos no cesaban.

A la 1.20 se supo que había renunciado el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y que todo el gabinete de De la Rúa había presentado su renuncia para permitirle al Presidente la posibilidad de negociar un acuerdo con el Partido Justicialista que descomprimiera la delicada situación institucional en la que se encontraba el gobierno.

A las 2.05 la Plaza de Mayo y las cuadras aledañas seguían ocupadas por manifestantes, pero la gran mayoría de los que habían llegado con *shorts* y ojotas, las señoras mayores, las familias con sus hijos pequeños y muchos jóvenes habían sido disuadidos efectivamente por los gases. Muchos otros, sin embargo, se quedaron y resistieron. En el Ministerio de Economía y en las cuadras que lo rodean se produjeron incendios, pedradas y diversos desmanes. Decenas de personas encendieron fuego y apedrearón la fachada del edificio en la manzana de Hipólito Yrigoyen, Balcarce, Av. Paseo Colón y Adolfo Alsina. En la Av. Julio A. Roca (o Diagonal Sur), los manifestantes persiguieron a patrulleros de la Policía Federal y les arrojaron objetos para que se retiraran. La sede del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), ubicado en la intersección con Perú, también fue apedreada.

A lo largo de la madrugada, se produjeron los primeros enfrentamientos entre la policía y los manifestantes autoconvocados en la Plaza de Mayo. También los hubo en la Plaza del Congreso. Una vez que la policía logró dispersar a la mayoría de los manifestantes con sus cacerolas a fuerza de gases e intimidaciones, muchos se dirigieron a la plaza que está frente al edificio del Poder Legislativo y se encontraron con vecinos que habían llegado de los barrios de Almagro, Caballito, Balvanera y Flores. Pasadas las cuatro de la madrugada, cuando había atisbos de desconcentración, la Guardia de Infantería disparó bombas de gases y se produjo un confuso desbande con corridas por todas las calles. Algunos grupos de manifestantes organizados enfrentaron a la policía y acorralaron a varios efectivos, que dispararon sus armas; una de esas balas hirió en el bajo vientre a un manifestante, que quedó tirado y sangrando sobre las escalinatas del Congreso. La imagen del cuerpo desparramado sobre las imponentes escaleras del acceso principal al Palacio Legislativo recorrería en pocas horas el mundo como símbolo de la acuciante crisis argentina.

En distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires, hubo manifestantes que atacaron los domicilios privados de funcionarios políticos: del jefe de Gabinete Chrystian Colombo; del jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra; de la hija del Presidente; y de la ex funcionaria del gobierno de Menem, María Julia Alsogaray, a quien le vaciaron varias bolsas de basura en la puerta de su casa. La puerta de entrada del edificio donde reside Carlos "Chacho" Álvarez, vicepresidente renunciante del gobierno en funciones, quedó destruida luego de recibir tres balazos.

Ya en la mañana, la Policía Federal intentó desalojar a unas decenas de manifestantes que habían permanecido durante toda la noche frente a la Casa Rosada. Los choques entre unos y otros se fueron sucediendo a lo largo del día y se desplazaron hacia las distintas calles que dan acceso a la plaza, como las diagonales Norte y Sur y Av. Paseo Colón, hacia la zona del Obelisco en Av. 9 de Julio y Corrientes, o bien hacia Avenida de Mayo, que comunica a la Plaza de Mayo con la del Congreso.

La brutal represión policial que ocurriría a lo largo de todo ese día fue justificada por distintos funcionarios en la declaración del estado de sitio. La policía utilizó carros hidrantes, efectivos de la Montada (se denomina así al grupo de policías de a caballo) -que literalmente embistieron contra los manifestantes- y de Infantería, helicópteros y motos con policías armados de itakas, gases lacrimógenos y balas de goma. La respuesta de los manifestantes fue con piedras y palos; además, incendiaron vallas y contenedores plásticos para residuos, rompieron vidrieras, ventanales e instalaciones de bancos, sobre todo de los cajeros automáticos.²¹ Fueron dañados, además, los bancos COMAFI, Bapro y Galicia, ubicados en Diagonal Norte, que comunica la Plaza de Mayo con Av. 9 de Julio, precisamente donde se erige el Obelisco, como también la tradicional tienda de ropa masculina Modart, la confitería London, un local de la cadena de productos de computación y música Musimundo, otro de la cadena Mc Donald's y un supermercado Norte. Hubo sangrientos enfrentamientos por más de siete horas.

La represión comenzó al mediodía frente a la Casa Rosada. Primero fue contra una protesta de oficinistas (muchos de los que participaron estaban en las cercanías del lugar porque era su hora de almuerzo) y demás civiles que pedían la renuncia de De la Rúa con aplausos, cánticos, algunas cacerolas y alguna bandera argentina. Había entre los manifestantes hombres de camisa y corbata, algunos con portafolios, teléfonos celulares y agendas en mano, mujeres maquilladas de

²¹ Los cajeros automáticos se constituyeron en íconos de las últimas medidas tomadas por Cavallo: la decisión de bloquear la libre salida de depósitos de los bancos, confiscando los ahorros de los clientes de los diferentes bancos, y la "bancarización" forzada y forzosa de la economía.

tailleur, jubilados y estudiantes. Como es habitual en los días jueves, realizaban su tradicional ronda las integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, un símbolo de la lucha contra la violencia y la represión a través de los años de búsqueda de sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar. Entre los presentes se paseaba un cartel escrito con fibra negra que reflejaba irónicamente la voluntad de los manifestantes: *"De la Rúa, ¿te censaron?, si no existís. ¡Andáte!"* También estaban presentes militantes de distintas agrupaciones y adolescentes que luego enfrentaron con gomeras la golpiza policial. Había militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados, ubicados en Diagonal Norte, donde confluyen la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Catedral y otros edificios que pertenecen a la administración pública, y militantes del Polo Obrero (una rama del Partido Obrero), de Izquierda Unida y del MAS, apostados en la Diagonal Sur, donde se encuentra el edificio de la Legislatura porteña. También estuvieron presentes (pero sólo en la plaza) grupos que vivaron al detenido coronel Mohamed Alí Seineldín, cantaron el Himno Nacional y corearon cánticos contra De la Rúa.

La Policía Federal buscó cumplir la orden oficial de disolver la manifestación primero con una avanzada de la Montada sobre un grupo que gritaba en torno a la Pirámide de Mayo, en el centro de la plaza. Hubo fotógrafos de distintos medios gráficos baleados y manifestantes molidos a bastonazos. Como consecuencia de esa primera intervención se produjo una gran dispersión de los manifestantes, pero diez o quince minutos más tarde estaban otra vez en la plaza, mientras los caballos policiales permanecían amenazantes sobre la explanada del edificio del Banco Nación, ubicado sobre Av. Rivadavia, en uno de los laterales de la plaza y en cruz con la Casa Rosada. En ese momento, llegó a la plaza la jueza Federal de turno María Romilda Servini de Cubría, que luego de ver por televisión las primeras acciones de represión se dirigió hasta el lugar para indagar de oficio a la policía. Una hora después, parecía que la manifestación se había tranquilizado, pero se escuchaban frases alusivas contra la dirigencia política: *"Paredón, paredón, a todos los corruptos que vendieron la Nación", "Adónde está, que no se ve, esa gloriosa CGT. Que se vaya, que se vaya..."*

Luego se vio llegar una corona fúnebre, ovacionada por el público al grito de *"Cavallo se murió, Cavallo se murió"*. Un grupo de manifestantes comenzó a tirar piedras contra la policía y volvió la represión, que no pararía hasta las últimas horas de la tarde: dos camiones hidrantes que avanzaron por Av. Rivadavia y por Hipólito Yrigoyen (la otra calle lateral de la plaza) desataron la agresión contra los manifestantes. La infantería de la Policía Federal descargó un centenar de gases lacrimógenos. El desbande fue concretado por el avance policial, que comenzó a ganar terreno a fuerza disparos al cuerpo desde los patrulleros. A esa altura, había

gran cantidad de efectivos sobre el pavimento, otros montados a caballos y con bastones de goma, y otros en motos. Cada unidad se componía de dos efectivos, el conductor y el acompañante, que cargaba una escopeta recortada. Por ambas diagonales, proliferaban colectivos de la fuerza policial que llegaban a la plaza con más refuerzos mientras un helicóptero seguía a los grupos más numerosos. A esas alturas, quienes resistían ya no eran los oficinistas del mediodía, sino militantes de distintas agrupaciones y ciudadanos indignados por el accionar policial. Retrocedían ante la avanzada policial y luego regresaban a la plaza para tirar piedras antes de replegarse nuevamente. Volvía la tregua, se reagrupaban a pocas cuadras de allí (en Avenida de Mayo y 9 de Julio) y, al rato, cargaban otra vez: así sucesivamente durante alrededor de cuatro horas. En medio de las corridas y de los gases, un grupo de motociclistas (conocidos como “motoqueros”) llegó a las laterales de la plaza y comenzó a dar vueltas en círculos retrasando el avance de la Montada sobre los manifestantes. Mientras aceleraba haciendo de barrera entre los caballos y quienes resistían, uno de los motoqueros enfrentaba a la policía sosteniendo un mástil con una bandera argentina. Durante las cuatro horas que duraron los enfrentamientos, las motocicletas auxiliaron a los heridos trasladando a las personas baleadas y golpeadas hasta las ambulancias cercanas a la plaza. Dos de los motociclistas serían asesinados por la policía en medio del operativo represivo. Los motoqueros del SIMECA (Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes) serían recordados y vivados en las manifestaciones posteriores como la *“caballería de la batalla del 20”*.

Cerca de las 17, los manifestantes se reorganizaron, apostados en Diagonal Norte, bajo la cual corre la línea D de trenes subterráneos, en la que se estaban realizando trabajos de remodelaciones. Allí, los manifestantes tumbaron los baños químicos que utilizan los obreros y los usaron como barricada; también sobre Avenida de Mayo cruzaron cuerdas de vereda a vereda para atrapar a los caballos de la Montada y prendieron fuego con basura, recipientes plásticos y maderas en varias esquinas.

Frente al edificio del Congreso Nacional, en Av. Entre Ríos y Rivadavia, a las 14 se habían concentrado partidos de izquierda, encabezados por militantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC) de La Matanza,²² para emprender una marcha a

²² La Matanza, uno de los partidos más numerosos del conurbano bonaerense, ocupa uno de los primeros puestos en las estadísticas sobre desempleo, subempleo y niveles de pobreza e indigencia, no sólo de la provincia de Buenos Aires sino también del país. La CCC, vinculada al Partido Comunista Revolucionario (PCR), forma parte de las organizaciones sindicales opositoras a la CGT. Uno de sus referentes más populares es Carlos “Perro” Santillán, sindicalista de la provincia de Jujuy. En el partido de La Matanza, la CCC ha formado un movimiento con piqueteros liderados por Juan Carlos Alderete, que gozan de una amplia legitimidad no sólo entre sus bases, sino también entre sus interlocutores institucionales de los gobiernos tanto municipal y provincial como nacional.

la Plaza de Mayo a la que se habían sumado otros ciudadanos espontáneamente. Media hora después, comenzó la represión. Las primeras balas de goma desarmaron la columna que marchaba por Avenida de Mayo. Los manifestantes se defendieron con piedras, adoquines y palos, quemaron contenedores de basura y maderas que desprendían de los bancos de la Plaza del Congreso, elementos con los que construyeron frágiles barricadas. Todos corrían sin sentido, la policía tiraba balas y gases y golpeaba duro a los manifestantes que apresaba. “*¡Viste qué puto soy!*”, le gritaba un agente de la Brigada Especial a uno de los detenidos mientras le pegaba con un trozo de manguera de goma dura en respuesta a las arengas del tipo “*¡putos... yuta puta... hijos de puta...!*” de los manifestantes a los policías. A estas alturas, el encono entre los grupos no reconocía autoridad pública ni derecho individual alguno. A las 16.30, la policía ocupaba la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia, y los manifestantes, distintas esquinas aledañas; nadie se movía, nadie retrocedía y, de pronto, otra vez los policías reprimían por una calle al tiempo que los manifestantes avanzaban por otra. Mientras ocurría la represión, a pocas cuadras del edificio del Congreso fueron saqueados un local de la cadena de videos Blockbuster, uno de Mc Donald's y un supermercado Eki.

Durante el día, en el sector financiero, hubo algunas particularidades. El índice MerVal aumentó un 17.5 por ciento luego que los inversores salieran a comprar acciones como forma de resguardar su capital ante las versiones que hablaban de una devaluación del peso argentino respecto del dólar. A pesar de la suba de la Bolsa de Valores, el índice del riesgo país trepó a los 4.619 puntos básicos. Por otra parte, el vocero del FMI, Thomas Dawson, rechazó toda responsabilidad sobre la crisis argentina por parte de ese organismo de crédito internacional –uno de los blancos dilectos de la arenga de los manifestantes- y no respondió ante la consulta periodística de si el FMI sería más flexible en caso de que se instituyera un nuevo gobierno. “*El gobierno argentino tiene la responsabilidad de sus propias políticas económicas*”, dijo. No obstante, Anne Krueger, número dos del organismo, se manifestó dispuesta a colaborar con el país.

A media tarde, mientras las calles de la ciudad de Buenos Aires mostraban distintos focos de represión y violencia entre la policía y manifestantes, se esperaba alguna señal institucional. Unas breves palabras del Presidente, flanqueado por algunos funcionarios de rictus consternado, pidieron un gesto del PJ para llegar a un acuerdo por el cual surgiera una forma de cogobierno y, de esa manera, buscar alguna solución política. En tanto, dentro del Congreso, negociaban dirigentes de la UCR y del PJ. Luego de una reunión entre Humberto Roggero, titular del bloque del PJ en la Cámara de Diputados, y José Luis Gioja, titular del mismo bloque en la Cámara de Senadores, se firmó un documento en el que el PJ, al menos en su

representación legislativa, pedía *“un gesto de grandeza del presidente de la Nación”*, lo cual era una señal de que ese partido ya estaba dispuesto a hacerse cargo del poder sin margen para cohabitación alguna. Ramón Puerta, vicepresidente provisional del Senado, le había aclarado a su par de la UCR, Carlos Maestro, que el PJ no estaba dispuesto a aceptar *“cualquier forma de cogobierno”* y que ellos consideraban *“agotada”* la gestión de De la Rúa. Ese rechazo llevó a Maestro a comunicarse con De la Rúa para decirle que ya no había alternativas a su renuncia. El Presidente presentó su dimisión de puño y letra ante el Parlamento luego que el PJ rechazara la convocatoria a un gobierno de unidad nacional realizada por De la Rúa en su última aparición pública como jefe de Estado. El rechazo de los gobernadores y líderes del PJ a las propuestas de De la Rúa se justificó argumentando que el gobierno intentaba transferirles responsabilidades en la crisis. El mensaje de De la Rúa al Parlamento decía: *“Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios. Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República.”*

A las 19.45 se distribuyó el texto de la renuncia entre los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. Siete minutos más tarde, en un ritual ya conocido por otros presidentes argentinos, De la Rúa subió al helicóptero destinado al presidente de la Nación y abandonó la Casa Rosada poco más de dos años después de su ascenso al poder. Se trasladó a la residencia presidencial de Olivos, acompañado de su familia, mientras algunos funcionarios con despachos en la Casa de Gobierno embalaban sus pertenencias. El nuevo presidente electo por la Asamblea Legislativa saldría del acuerdo que alcanzara el PJ en su interior, puesto que había logrado la mayoría en ambas cámaras luego de las últimas elecciones legislativas de octubre de 2001, en las que obtuvo la mayoría en la Cámara de Senadores y en la que también alcanzó una virtual mayoría en Diputados.

Ramón Puerta se convirtió en el presidente de la Nación hasta tanto convocara a una Asamblea Legislativa -por ley de acefalía, esto debía ocurrir en las 48 horas siguientes- que eligiera a un nuevo presidente. En rigor, en casos de renuncia, la presidencia de la Nación es cubierta por el vicepresidente, pero Carlos “Chacho” Álvarez, electo vicepresidente en octubre de 1999, había renunciado a ese cargo en octubre de 2000 luego de una resonante denuncia de sobornos que el Poder Ejecutivo habría pagado a algunos senadores a cambio de la sanción de una resistida ley de Reforma Laboral, episodio que prácticamente determinó una ruptura en la alianza de gobierno. En consecuencia, la tercera posición en la línea de sucesión presidencial queda a cargo del presidente provisional del Senado.

Con la renuncia de De la Rúa, los enfrentamientos entre policías y manifestantes cesaron. El día finalizó con 25 muertos y más de 400 heridos. Por la noche, el secretario de Seguridad de la Nación, Enrique Mathov, comenzó a declarar ante la jueza Servini de Cubría, acusado por las 25 muertes que causó la represión de los últimos días. El fiscal Luis Comparatore pidió también que las declaraciones alcanzaran al ministro del Interior, Ramón Mestre, y al renunciante presidente, De la Rúa.

Viernes 21 de diciembre:

La jueza Servini de Cubría, que llevaba adelante la causa por la represión a manifestantes en la Plaza de Mayo, resolvió prohibir la salida del país a De la Rúa. También se la prohibió el juez Norberto Oyarbide, quien investigaba al ya ex presidente por el presunto delito de traición a la patria, a raíz de que por su cargo era el responsable máximo por las muertes ocurridas el jueves 20. Ambas resoluciones alcanzaron al ministro del Interior, Ramón Mestre, y al jefe de la Policía Federal, Rubén Santos.

Los 14 gobernadores del PJ y legisladores de ese partido elaboraron un documento para presentar en la próxima Asamblea Legislativa en el que convocaron a elecciones generales para el 3 de marzo de 2002, nombraron presidente de la Nación hasta esa fecha al gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, y establecieron para dicha elección el mecanismo de ley de lemas.²³ Se descontaba la aprobación completa de estas medidas, debido a la mayoría de escaños que sumaban para dicha asamblea. Las negociaciones fueron tensas y complejas por la cantidad de postulantes que aparecieron como presidenciables del PJ, además de las dificultades que implicaba proyectar una inmediata elección presidencial en un clima de inestabilidad política profunda marcada por un inédito rechazo hacia la clase dirigente.

Desde la Unión Cívica Radical, su presidente, el gobernador del Chaco, Ángel Rozas, dijo que su partido apoyaría en esa asamblea al hombre que propusiera el PJ como presidente provisional, pero que exigiría que *“complete el mandato hasta diciembre de 2003”*, y agregó, *“por la profunda crisis que estamos atravesando”*.

²³ La ley de lemas implica que un partido o alianza pueden presentar varios candidatos y que el que resulte más votado sumará los sufragios de los restantes enrolados en la misma fuerza. El argumento a favor de este mecanismo es que tiende a impedir la división de partidos, al tiempo que alienta la formación de fracciones en el interior de cada partido. El argumento en su contra es que se le quita representatividad a los candidatos que finalmente resulten beneficiados. Dicha ingeniería electoral le permitía al PJ encontrar algún mecanismo para llegar a consensos básicos en el interior de esa fuerza, que vivía una compleja disputa por el control del partido luego que Menem terminó su mandato como presidente de la Nación y por encontrar una nueva figura presidenciable. En la lista se anotaban los gobernadores Carlos Ruckauf (Buenos Aires), José Manuel de la Sota (Córdoba), Carlos Reutemann (Santa Fe) y Néstor Kirchner (Santa Cruz).

Rechazó también la utilización de la ley de lemas *“porque no garantiza que el candidato más votado sea el próximo presidente de los argentinos y, por lo tanto, sería una nueva deslegitimación”*. La primera reacción frente a la crisis del principal partido del gobierno saliente consistió en apoyar el liderazgo opositor para renovar la primera magistratura a condición de evitar un llamado a elecciones cuyos resultados habrían sido catastróficos para una fuerza política con aspiraciones electorales.

Mientras tanto, la zona de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, mostraba los restos de la represión y la violencia desatadas el día anterior. Había sangre en las veredas, restos de gomas quemadas en los cruces de calle, cuatro camionetas y un auto destruidos por el fuego, locales devastados y reducidos a cenizas, vidrieras destrozadas. En ese lugar, alrededor de las 19, un grupo de motoqueros del SIMECA se hizo presente para rendir homenaje a dos de sus compañeros baleados el día anterior por la policía; estaban acompañados por militantes de la agrupación de derechos humanos HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Eran pocos aún los motoqueros que se habían concentrado alrededor del Obelisco cuando un auto particular se lanzó contra ellos, atropellando a uno de los manifestantes y dándose a la fuga. Los otros motoqueros intentaron perseguir al auto, pero fueron interceptados por motos policiales que también buscaron atropellarlos, según contaron a los periodistas miembros del SIMECA. Allí fueron heridos dos motoqueros con fracturas en sus brazos. Finalmente, cuando los motoqueros trataron de reagruparse nuevamente en el Obelisco, efectivos policiales y algunos autos particulares visiblemente articulados con la policía los reprimieron y persiguieron hasta San Juan y 9 de Julio. Allí fue detenido uno de ellos. Más tarde, cuando los motoqueros restantes llegaron al Hospital Argerich para visitar a sus compañeros heridos, fueron golpeados por la policía en la sala de espera. En ese incidente, y pese a que mostraba su cara golpeada, el motoquero Marcos Gómez fue detenido.

En el plano social, entre los habitantes del GBA siguió el pánico por rumores de nuevos saqueos. En el sur del conurbano, en Lanús, los dueños de un supermercado levantaron un muro con ladrillos frente al local, por lo que sus clientes debían entrar, “hasta que pasaran los saqueos” -según la dueña-, por una pequeña puerta de una casa lindera, como a escondidas. En Lanús Oeste, el ulular de sirenas no daba tregua desde el miércoles y los rumores alimentaban el temor de los pobladores: se decía que avanzaban grupos de vándalos dispuestos a arrasar con todo a su paso e, incluso, a saquear viviendas. En la madrugada, los vecinos

armaron barricadas en las calles quemando gomas y maderas. *“A mi casa no van a entrar. Si tengo que matar para proteger a mi familia voy a matar. Estoy armado”*, advirtió un vecino, veterinario de profesión, que agregó: *“Se escuchaban tiros. Había policías patrullando con itakas. Uno de ellos me dijo que tuviera cuidado, que había grupos que querían copar las casas. Con los vecinos armamos una barricada.”* Cerca de allí, el testimonio de un joven manifestaba su preocupación: *“Nos dijeron que mil personas de las villas de Budge, La Salada y Fiorito venían a asaltar casas. Además, pasó la policía y recomendó que los que tuvieran revólveres los usaran porque ellos no darían abasto.”* Los vecinos salieron a la calle con palos, cuchillos y revólveres, y armaron trincheras quemando maderas. Hubo gente que hasta electrificó las rejas de entrada de sus casas. En Valentín Alsina, por ejemplo, un testimonio daba cuenta de la situación de pánico y expectativa: *“A las 4 a.m., me llamó un amigo para avisarme que venía una horda saqueadora. No pasaba nada, pero yo agarré un insecticida y me paré en la ventana para rociarlos en las caras a quienes quisieran entrar. A las 5, seguía todo tranquilo.”* En el barrio de Villa Celina, un policía les advirtió a algunos vecinos: *“Está viniendo gente de la villa, enciérrense en sus casas”*, y en el barrio El Crisol (Victoria, zona norte del GBA) había vecinos preparados con cuchillos y todo tipo de fierros con los que pudieran golpear duramente; uno de ellos tenía en el living de su casa un balde plástico cargado de cascotes, un revólver sobre una mesita ratona y su perro dóberman que vigilaba desde la terraza. Otra vecina había colocado un cable conectado a 220 voltios que se adosaba a las rejas que separaban la vereda de su jardín.

En verdad, la desmesura y temeridad de los rumores no encontró correlato alguno en los saqueos que efectivamente se cometieron aquel día. Tal desproporción, estimulada por la policía de la provincia de Buenos Aires, según lo indican los testimonios, sumada a su pasividad frente a algunos de los saqueos cometidos, llevó a sectores del oficialismo renunciante a elucubrar la posibilidad de un complot tramado por el PJ bonaerense –liderado por el ex vicepresidente Eduardo Duhalde y el entonces gobernador, Carlos Ruckauf- que habría precipitado la caída del gobierno.

Sábado 22 de diciembre:

No sólo los integrantes del gobierno saliente abonaron la conjetura de una instigación política en los sucesos de los últimos días. Los líderes piqueteros Luis D'Elía, de la Federación Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), que forma parte de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA)²⁴ y Juan Carlos Alderete, de la

²⁴ El panorama sindical argentino del momento reconoce tres centrales obreras, dos de ellas integradas por gremios de reconocida tradición peronista -la CGT oficial y la disidente- y un

Corriente Clasista y Combativa (CCC), desligaron responsabilidades de su gente en relación con los saqueos de la semana que terminaba. D'Elía sostuvo: *"Hubo una clara acción de los servicios de inteligencia y un dejar hacer de altos funcionarios de la gobernación bonaerense. Soy testigo de que el jueves, después de la renuncia de De la Rúa, aparecieron coches particulares recorriendo las barriadas de La Matanza y sus ocupantes alertaban sobre la inminencia de la llegada de una ola de saqueos a casas particulares."* Y Alderete, por su parte, afirmó: *"Hubo una parte de la política que usó pandillas para hacer acción psicológica, aprovechando la crisis social."*

La represión policial y los saqueos dejaron, según cifras oficiales, un total de 29 muertes en todo el país: siete en Buenos Aires, nueve en el conurbano (siete muertos por la represión policial del jueves, seis por heridas de bala y uno por aplastamiento), seis en Rosario, dos en Paraná, uno en Santa Fe, uno en Corrientes, uno en Córdoba, uno en Cipoletti (Río Negro) y uno en Tucumán. De las siete víctimas producidas en Buenos Aires, seis ocurrieron durante los enfrentamientos del jueves, a causa de heridas de bala. Los hospitales capitalinos atendieron a 186 personas y a más de 500 auxilios. La gran mayoría de los aproximadamente 4.500 detenidos (2.717 de ellos, en Buenos Aires) a partir del miércoles fueron liberados en las últimas horas del viernes, salvo en la provincia de Tucumán. El epicentro fue la Plaza de Mayo.

Domingo 23 de diciembre:

Esa madrugada, la Asamblea Legislativa se aprestaba a consagrar presidente de la Nación al gobernador Adolfo Rodríguez Saá con votos del PJ, el respaldo de Acción por la República (el partido que lidera Domingo Cavallo) y de otros partidos menores como Fuerza Republicana (liderado por el represor tucumano Antonio Bussi), y el Partido Unión Bonaerense (del ex policía bonaerense Luis Patti). Con esos apoyos, el PJ obtuvo la mayoría necesaria de 169 votos (su bancada alcanza los 119 escaños) para imponer las decisiones que habían surgido del documento firmado en el interior del PJ. La traba que extendió la sesión comenzada el sábado por más de siete horas de asamblea fue la ley de lemas, que finalmente se impuso como mecanismo electoral para las elecciones del 3 de marzo de 2002, en las que se elegiría nuevo presidente de la Nación para completar el período hasta diciembre de 2003. Los cuestionamientos sobre la ley de lemas vinieron desde la UCR, el Frepaso, el ARI (Alternativa por una República de Iguales)

nucleamiento conformado por los gremios más castigados por la reforma del estado producida durante los años de gobierno menemista como los empleados estatales y docentes

y algunos representantes de partidos provinciales, por considerar dicha decisión anticonstitucional, puesto que la Carta Magna no reconoce ese sistema para las elecciones presidenciales. Según explicaban, para que pudiera llevarse a cabo debería reformarse antes la Constitución.

Por la mañana, Rodríguez Saá asumió el cargo por 90 días. En su discurso ante la Asamblea Legislativa declaró, ante una ovación generalizada de los legisladores y asistentes al convite, que la Argentina suspendería el pago de la deuda externa y que los fondos destinados a dicho pago serían utilizados en planes sociales y de trabajo. Ratificó, también, la vigencia del plan de convertibilidad y la posibilidad de instrumentar una tercera moneda, además del peso argentino y el dólar, que podría ser el mismo Lecop. Anunció, finalmente, la puesta en marcha de un plan de emergencia alimentaria con la colaboración de las provincias, la reducción de los sueldos de la administración pública, cuyo tope sería de tres mil pesos, y la venta del parque automotor estatal, de modo de obtener fondos para los planes ideados.²⁵ Por la tarde, se reunió con los líderes sindicales de la CGT oficial, Rodolfo Daer, y de la CGT disidente, Hugo Moyano, y con el senador nacional y también sindicalista Luis Barrionuevo.

Lunes 24 de diciembre:

"Me eligieron por mi inteligencia, no por mi prontuario", declaró Carlos Grosso al llegar a Casa de Gobierno el día de nochebuena, mientras el riesgo país superaba los cinco mil puntos y Rodríguez Saá enviaba su declaración jurada a la Oficina Anticorrupción. La afirmación de tono arrogante corresponde a un personaje que la opinión pública relaciona directamente con los hechos de corrupción que caracterizaron al gobierno de Carlos Menem, en el marco del cual Grosso ocupó la intendencia de la ciudad de Buenos Aires. Su designación como asesor de la presidencia de la Nación por parte de Rodríguez Saá sería identificada como un símbolo de la irritación a la que fue sometida una sociedad civil ya suficientemente crispada en aquellos días. Al día siguiente de haber asumido, y después de haber llamado *"mártires"* a las víctimas de la represión del jueves, el Presidente nombró al comisario Roberto Giacomino al frente de la Policía Federal, en reemplazo de Rubén Santos, designado por el delarruismo e implicado en los sangrientos sucesos de las últimas jornadas. Ese mismo día, el gobierno comenzó la entrega de los planes de empleo con los que el Presidente prometió llegar a un millón de puestos

más buena parte del movimiento de desocupados autodenominados piqueteros (CTA).

²⁵ Véase Anexo Documentos.

de trabajo. Continuaban las colas interminables en los bancos y las protestas por la falta de efectivo. Con la llegada de la noche y concluida una agenda plagada de reuniones, el nuevo Presidente viajó a su casa de San Luis a pasar la Navidad.

Martes 25 de diciembre:

Pese a la Navidad, en la Casa de Gobierno se vivió un día acelerado. Después de 17 años, las Madres de Plaza de Mayo ingresaron en la Casa Rosada y el presidente Rodríguez Saá recibió por separado a las dos líneas que integran la asociación. También recibió a los líderes del movimiento piquetero nucleado en La Matanza, Luis D'Elía y Carlos Alderete. Referentes centrales de la protesta social en la Argentina de los últimos diez años accedían en una misma mañana a una entrevista con el Presidente. La titular de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, afirmó que se fueron satisfechas luego de la conversación con el Presidente, ya que éste prometió que el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley ante el Congreso que, según la dirigente, *“dejaría en libertad a los 2.400 compañeros procesados y detenidos”*. Tati Almeida, de la Línea Fundadora, expresó que, además de la liberación de los presos políticos, solicitaban la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que restringían los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura a los escalafones superiores de las Fuerzas Armadas. La Asociación también pidió la publicación de la lista completa de los asesinados la semana anterior durante la represión a los manifestantes. Aquel día, las visitas a la Casa de Gobierno se completaron con los integrantes del frente productivo y una cena con importantes empresarios.

Tras un breve encuentro, el secretario de Justicia y Asuntos Legislativos, Alberto Zuppi, y la jueza federal María Romilda Servini de Cubría decidieron que habría amnistía para todos aquellos que estaban presos acusados de un delito *“no grave”*, tras haberse manifestado en la plaza y en las calles durante la jornada del 20 de diciembre. El luto por los acontecimientos de la semana anterior se extendía por la muerte de una nueva víctima: luego de una agonía de cuatro días, moría un joven a causa de haber recibido un balazo en la cabeza durante uno de los saqueos que se habían producido en Rosario.

Tony Blair, Silvio Berlusconi y Jacques Chirac enviaron sus saludos al nuevo presidente. También Fidel Castro lo hizo en una carta publicada en el diario cubano *Granma* donde puso énfasis en la decisión de Rodríguez Saá de suspender los pagos de la deuda externa.

Mientras continuaba el feriado bancario y cambiario decretado por el nuevo gobierno, Rodríguez Saá puso en marcha 116.060 convenios del

Programa Nacional de Empleo, parte del total de un millón de planes que el gobierno pensaba implementar antes de la finalización de enero de 2002. El reparto de dichos planes correspondería a las 23 provincias y a la ciudad de Buenos Aires; también se entregaron diez mil planes de empleo al Ministerio de Defensa y tres mil a organizaciones sociales de desocupados y piqueteros, un número sensiblemente inferior a los 90 mil que los líderes del movimiento de desocupados habían solicitado en la reunión con el primer mandatario. La disputa por el reparto de los planes entre las provincias y las organizaciones no gubernamentales giró en torno a la acusación por parte de estas últimas del supuesto uso clientelístico que algunos gobiernos provinciales venían haciendo de estos recursos provistos por el gobierno nacional.

Miércoles 26 de diciembre:

El presidente Rodríguez Saá visitó la CGT, donde fue recibido por una dirigencia sindical encabezada por el titular de la CGT oficial -Rodolfo Daer- y el jefe de la disidente -Hugo Moyano-, quienes celebraron cada uno de sus anuncios. Iniciado el encuentro, Moyano manifestó a Rodríguez Saá: *“El movimiento obrero está a su disposición.”* Sin embargo, en cuanto el Presidente se retiró, ambos dirigentes sindicales coincidieron en que *“el movimiento obrero no da cheques en blanco a nadie”*. Las declaraciones del Presidente se centraron en la *“restitución del injusto descuento del 13 por ciento a los jubilados”* instrumentado por la administración anterior; también afirmó que la ley de Empleo votada durante el gobierno de De la Rúa tenía los días contados y que se convocaría al consejo del salario para *“aumentar el salario mínimo de 200 a 450 pesos”*; prometió enviar al Congreso un proyecto para *“poner tope a las jubilaciones de privilegio, que en ningún caso superarían los tres mil pesos”*; y realizó la presentación de una tercera moneda para el país, el “argentino”, que comenzaría a circular en enero de 2002 y tendría como respaldo todos los bienes inmuebles y tierras fiscales que pertenecen al Estado, lo cual permitiría *“reactivar la producción nacional, generar empleo y empezar a reconstruir la Argentina”*. De esta manera, intentó alejarse de quienes proponían la devaluación o la dolarización, reflejo de una pugna feroz entre sectores económicos durante aquellos días de profunda incertidumbre, en tanto la primera llevaría paulatinamente a la disminución de los salarios y la segunda, a *“entregar la soberanía nacional”*. El salón de actos de la CGT se sacudía entre aplausos y consignas peronistas junto con cantos hirientes

para el radicalismo. La reunión con los “gordos”²⁶ del sindicalismo renovó las tradicionales convenciones de la liturgia peronista desaparecidas desde la campaña electoral que llevó a Menem al poder en 1989. La imagen de euforia reflejada en los rostros, las manos tomadas y las camisas empapadas en transpiración, mientras se entonaban las estrofas de la marcha partidaria, formaron parte de la tapa de todos los periódicos del día siguiente. Los motivos para semejante festejo resultan aún hoy desconocidos.

El secretario de Hacienda, Rodolfo Frigeri, anunció que próximamente se pagarían los salarios con los nuevos “argentinos”, que serían ofrecidos a los ahorristas para recuperar el dinero atrapado en el “corralito”, y que se incrementaría la emisión de los bonos Lecop hasta tanto se realizara la impresión de la tercera moneda. Asimismo, indicó que, si bien se mantenía el feriado cambiario y el corralito de los depósitos, volvía a funcionar el *clearing* bancario: se podrían acreditar cheques y hacer transferencias entre bancos, siempre que fueran en pesos.

Las secuelas de la represión del 19 y el 20 no cesaban. De la Rúa, en un escrito presentado a la jueza Servini de Cubría, negó haber sido responsable de la represión y de las muertes producidas en Plaza de Mayo y en el centro porteño horas antes de su caída. La investigación arrojó como primeras conjeturas provisionales que hubo un plan, una organización y una orden de matar, de modo que se manejaba la posibilidad de citar a De la Rúa, como máximo responsable, y a ex funcionarios de su gobierno para ser indagados. El nuevo ministro de Justicia, Alberto Zuppi, mantuvo una reunión con sus colaboradores más cercanos, con quienes conversó, a pedido del Presidente, acerca de la elaboración de una herramienta jurídica que permitiera librar de la cárcel y “extinguir” los procesos penales contra los detenidos o acusados en las protestas sociales. Asimismo, asumió el nuevo jefe de la Policía Federal, el comisario Roberto Giacomino, quien debería hacer frente a una compleja investigación que podría poner tras las rejas a algunos de sus subordinados.

Numerosos ciudadanos realizaron presentaciones judiciales que cuestionaron la aplicación de la ley de lemas para las elecciones presidenciales previstas para el 3 de marzo de 2002 y que podrían llevar a la anulación de esta convocatoria. En el marco de un peronismo fragmentado y de un radicalismo derrotado por su fracaso en el gobierno, comienzan a circular versiones de la intención de Rodríguez Saá de

²⁶ Se denomina así al grupo de sindicalistas que forman la cúpula de las centrales sindicales inclinadas a la negociación directa con el poder político. Se trata de una “burocracia sindical” que ha bloqueado su renovación manteniendo un poder de presión que, se estima, no siempre se utiliza en beneficio de los trabajadores.

permanecer en el gobierno durante el período que restaba para la conclusión del mandato de Fernando De la Rúa, en octubre de 2003.

En los diarios nacionales se publicaron los resultados de una investigación, basada en información del INDEC, según los cuales, en octubre de 2001, el 44,2 por ciento de la población urbana argentina vivía por debajo de la línea de pobreza. Si se incluía a la población rural, la cifra ascendía al 45 por ciento.

Jueves 27 de diciembre:

Se agravaba la lucha interna del peronismo debido a los crecientes y no desmentidos rumores que aseguraban la intención de Rodríguez Saá de permanecer en el cargo hasta octubre de 2003. Las versiones incluso pronosticaban una posible presentación del Presidente como candidato en esa oportunidad. La polémica sobre la extensión del mandato de Rodríguez Saá generó en el peronismo una fuerte reacción opositora encabezada por uno de los aspirantes a suceder al entonces presidente: el gobernador cordobés José Manuel De la Sota. El dirigente recalcó que, en la elección de Rodríguez Saá, los gobernadores había dejado claro que quien asumiera el gobierno provisional no sería candidato y que ir contra lo acordado significaría desconocer la resolución de la Asamblea Legislativa y, consecuentemente, atentar contra la ley. El gobernador santacruceño, Néstor Kirchner, el otro gran candidato junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex vicepresidente de Menem durante su segundo mandato, Carlos Ruckauf, insistieron en su voluntad de presentarse a elecciones el 3 de marzo de 2002. Aportando a la confusión general acerca del futuro institucional del país, el ex presidente Carlos Menem reapareció en la Casa Rosada, pero esta vez para apoyar el proyecto de Rodríguez Saá y declarar que éste debía continuar hasta 2003.

Por su lado, Ángel Rozas, el jefe de la UCR, manifestó también su apoyo a la nueva gestión y destacó la necesidad de *“lograr un acuerdo de concertación Nacional”*; también apoyó la creación de un millón de puestos de trabajo y la pronta puesta en circulación de la nueva moneda, el “argentino”.

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría denunció haber recibido presiones para que no avanzara en las investigaciones de la represión policial en la Plaza de Mayo de la semana anterior; sin embargo, aseguró no tener miedo y manifestó su voluntad de seguir adelante con la investigación hasta llegar a los responsables. Acerca de la responsabilidad de los funcionarios de la gestión de De la Rúa, señaló que por el momento no serían interrogados ya que aún se desconocía cómo había sido dirigido el operativo. Sin embargo, circuló una información que comprometía a los funcionarios vinculados con la seguridad del anterior gobierno: el día de la renuncia de De la Rúa se habían cometido cinco

asesinatos con balazos en el pecho o la cabeza y, en todos los casos, los heridos estaban desarmados. También los apoderados legales de la Asociación Madres de Plaza de Mayo denunciaron al ex presidente Fernando De la Rúa por los golpes que recibieron en la represión de la protesta del 20: la denuncia se centró en los presuntos delitos de lesiones, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en perjuicio de siete Madres. Además de De la Rúa, la denuncia apuntó al ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos. Hebe de Bonafini aseveró: *“Ni en la dictadura militar fue tan impresionante la embestida contra las Madres.”*

Se realizó un funeral cívico en homenaje a las víctimas de la represión durante la movilización popular que hizo renunciar a De la Rúa; allí estuvieron varias organizaciones de derechos humanos: HIJOS, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), partidos de izquierda y un gran grupo de motoqueros que recordaron a sus dos compañeros muertos por la policía. Uno de los carteles decía *“echamos a Cavallo, echamos a De la Rúa. Ahora es el turno de la Corte Suprema de Justicia”*. Ésta fue la primera de una importante serie de protestas que tuvieron como principal demanda la renuncia de los ministros del Tribunal Supremo de la Nación, acusados de acuerdos espurios con el poder político y variadas corruptelas.

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo se disponía a enviar al Congreso dos proyectos de ley para desprocesar a los detenidos durante el estado de sitio impuesto por De la Rúa. Uno de los proyectos planteaba la *“extinción de acciones penales por hurto y robo relativo a objetos o bienes de primera necesidad y por daño que no hubieran afectado gravemente las propiedades entre el 17 y el 23 de diciembre”*; el otro le otorgaba treinta días a la comisión para *“extinguir acciones penales y penas perpetradas antes del 17 de diciembre”*, es decir que este “blanqueo judicial” abarcaba también a los detenidos en los cortes de ruta y en las protestas durante los dos años del gobierno de la Alianza, como Emilio Alí y Raúl Castells. Se cumplían así los pedidos de las Madres y de los líderes del movimiento de desocupados.

En la jornada, el ex gobernador de Santa Fe, Víctor Félix Reviglio, sospechado de corrupción durante su gestión, sufrió un *escrache* en la puerta de su casa en la capital de la provincia. Los vecinos, al grito de *“ladrón”*, repudiaron su designación como secretario de Políticas de Salud en la administración de Rodríguez Saá. El *escrache*, forma de protesta que consiste en trasladarse al domicilio del individuo repudiado e individualizarlo con cánticos, insultos y huevazos, iría ganando adeptos con el desarrollo de la crisis. La metodología del *escrache* fue

puesta en práctica inicialmente por la asociación HIJOS para identificar los domicilios de los represores que habían actuado durante la última dictadura militar. La extensión de la práctica a los políticos, por parte de los ciudadanos que comenzaron a nuclearse en asambleas populares de vecinos, generó un debate acerca de la legalidad de esta forma de protesta en la medida en que implica una virtual privación ilegítima de la libertad, según afirman sus detractores.

La secuencia de la crisis financiera siguió con una circular del Banco Central en la que se daba a conocer una disposición según la cual las deudas de los ahorristas en dólares serían canceladas en pesos, uno a uno.²⁷ Se estableció también una mayor inmovilidad de los depósitos a plazo fijo impidiéndose la transferencia de un banco a otro. Los reclamos de los ahorristas no se hicieron esperar: a través de cotidianas movilizaciones y cacerolazos frente a los bancos, contra el cobro en dólares de los resúmenes de las tarjetas de crédito y por la prolongación en el plazo de los vencimientos de los servicios públicos. También reclamaron por la demora en las transferencias entre cuentas de diferentes bancos, lo que generaba en aquellos días una virtual desaparición del dinero por plazos que, en algunos casos, alcanzaron una semana. La vuelta a la actividad bancaria después de seis días sin poder realizar depósitos ni transferencias volvió a ofrecer el paisaje de sucursales repletas de ahorristas impacientes. Se calculaba que la cifra de pesos y dólares que quedó en el corralito rondaba los 66.185 millones. El gobierno, por su parte, volvió a negar los rumores de una inminente devaluación del peso.

En el plano internacional, previo a la renuncia de De la Rúa, el FMI había suspendido el envío de un desembolso acordado por 1.264 millones de dólares; sin embargo, y aun ante la cesación de pagos declarada por el presidente Rodríguez Saá, quien anunció que el gobierno argentino *“debe primero solucionar la emergencia social”* -antes de cumplir con sus obligaciones externas y negociar con el FMI-, el organismo se mostró dispuesto a reanudar negociaciones con el país, tal como lo expresó su titular, Horst Köhler, y su vicepresidenta, Anne Krueger.

²⁷ La expresión “uno a uno” se refiere a la paridad cambiaria entre el peso y el dólar vigente en la Argentina desde 1991 y que se conoce con el nombre de “convertibilidad”. El plan de convertibilidad fue puesto en marcha en abril de 1991 como parte de las medidas de emergencia económica que lanzó el gobierno de Carlos Menem, y consistió en un plan de estabilización sostenido fundamentalmente sobre tres pilares: a) la fijación por ley del tipo de cambio (un peso = un dólar), b) el respaldo de la totalidad de la moneda nacional en circulación por una cantidad equivalente en dólares y oro en manos del Banco Central de la República Argentina (“convertibilidad monetaria”) y c) la eliminación -también por ley- de la indexación de precios y todo tipo de contratos.

Viernes 28 de diciembre:

Hacia el mediodía, se escucharon las primeras cacerolas de la jornada frente a Tribunales para exigir la renuncia de la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez en la historia argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estuvo en el centro de las demandas de la protesta social. La ira popular se desató cuando sus integrantes respaldaron la vigencia del corralito a través de un fallo que rechazaba el pedido de un ahorrista que accionó judicialmente para disponer de sus ahorros. El repudio a la Corte tenía, no obstante, antecedentes cercanos: la misma Corte había dictaminado el 20 de noviembre de 2001 que no estaba probado que el ex presidente Carlos Saúl Menem fuera el jefe de una asociación ilícita que organizara el tráfico de armas a Ecuador y Croacia y habilitara su liberación después de largos meses de arresto domiciliario.

La manifestación fue convocada por la Asociación de Abogados Laboristas. Alrededor de las 13 se habían juntado en la zona de Tribunales, sede del Poder Judicial, unas 500 personas, número que se duplicó hacia la tarde. Una de las consignas fue repetir el encuentro cada viernes hasta que la Corte renunciara. Al cacerolazo asistieron abogados, docentes, comerciantes, estudiantes, escribanos, empleados, vale decir: ciudadanos de todas las edades y oficios. Fueron mencionados uno por uno los nombres de los cinco ministros que el menemismo designó en la Corte, luego de ampliar de cinco a nueve el número de miembros y generar lo que se conoció como la "mayoría automática" que acompañó todas las decisiones del gobierno. Algunas de las pancartas decían *"fuera la Corte corrupta"*, *"ya echamos a Cavallo y De la Rúa, ahora le toca a la Corte corrupta y alcahueta de Menem"*. Como cierre de la protesta, y tal como se repitió durante los cacerolazos, se cantó el Himno Nacional.

Paralelamente, un conflicto gremial derivó en la suspensión del servicio de trenes de la empresa TBA desde las 13. Dos vagones fueron incendiados en la estación Castelar y, por la tarde, se quemó otro vagón en la estación Once, y se produjeron destrozos en una parte de la estación. Hacia la noche el servicio se mantenía interrumpido y los trabajadores se manifestaron con un "corte de vías". Un sector de la Unión Ferroviaria reclamó el cobro del aguinaldo que la empresa había decidido pagar en dos cuotas en enero y febrero próximos.

Por la tarde, Rodríguez Saá le solicitó la renuncia a David Espósito, titular del Banco Nación, quien fue así el primer funcionario despedido del gobierno a dos días de su asunción. La declaración de que sería necesario emitir 15 millones de argentinos para enfrentar los compromisos fiscales marcó su suerte; tanto el

establishment financiero como diputados y senadores concordaron en que, en tal caso, se dispararía una hiperinflación.

Hacia la noche, los sectores medios urbanos volvieron a participar del tercer cacerolazo. Fue tan espontáneo como los anteriores, pero más heterogéneo en sus reclamos. Se criticó la designación de políticos corruptos, el corralito de depósitos y salarios y la permanencia de una Corte de Justicia desacreditada. Se empezó a hacer oír desde los balcones de diversos barrios porteños como Palermo, Barrio Norte, Caballito, Belgrano, Boedo y Barracas, y luego se volcó a las calles. Los grupos comenzaron a juntarse en esquinas clave de Buenos Aires y en algunas de ellas se quemaron gomas. Un grupo de aproximadamente 500 personas se acercó a la quinta de Olivos, donde se encontraba el Presidente, para hacer sonar sus cacerolas. Alrededor de las 23, hubo una movilización espontánea de los vecinos hacia Plaza de Mayo. Al igual que el 19 de diciembre, el cacerolazo fue inesperado, espontáneo y furioso; al principio pacífico, violento al final. Contra la expectativa de la dirigencia política, el cambio de gobierno no había logrado detener el curso de la protesta social.

Sólo se veían banderas argentinas y carteles de producción doméstica que decían: *"basta de corrupción"*, *"que se vaya la Corte de Justicia"*, *"nadie votó a Menem, Grosso, Manzano, Daer y Moyano"*. Las razones que impulsaban la movilización eran, según los propios manifestantes, las siguientes: el corralito financiero, la corrupción, la ley de lemas, la permanencia de los ministros de la Corte y la reaparición en la escena política de dirigentes vinculados al menemismo, así como la proximidad del gobierno con el sector más cuestionado del sindicalismo. La llegada de un partido de izquierda con una bandera política generó el rechazo de la mayoría de los manifestantes y obligó a los militantes a guardar la insignia. Las banderas aceptadas fueron las de las recientemente formadas asambleas populares de vecinos y una de la asamblea popular de almaceneros.

Si bien para los mismos caceroleros es imposible precisar el momento y el modo en que comenzaron a generarse las asambleas populares de vecinos en medio de movilizaciones y protestas continuas, según el relato de algunos de sus protagonistas, las asambleas se constituyen de dos maneras: de forma espontánea, a partir del encuentro de los vecinos en las esquinas "tradicionales" de cada barrio que, en pleno cacerolazo barrial (previo a la partida hacia la plaza) comienzan a autoconvocarse fijando hora y lugar de reunión *"para organizarnos y resolver nuestros problemas"*; y a través de la convocatoria de los militantes de los partidos políticos de izquierda que, protagonistas también de la protesta cacerolera, colocaron carteles anónimos en las calles de los barrios estableciendo hora y lugar

de una reunión de vecinos. El tercer cacerolazo marca el inicio de la aparición de banderas que designaban lo que luego sería parte imprescindible del paisaje de la protesta en Buenos Aires: las asambleas populares y barriales.

El dispositivo de seguridad frente a la Casa Rosada no era de gran envergadura, parecía que no había disposición a desatar la represión como durante la jornada del 19 de diciembre. Se calculó la presencia de alrededor de 15 mil personas. Como había sucedido con el ex ministro Cavallo en la madrugada del 20, los manifestantes tuvieron su recompensa con la noticia de la renuncia de Carlos Grosso a su puesto de asesor de la Jefatura de Gabinete. Tal como lo evidenciaron los cánticos: *"pasamos Nochebuena, pasamos Navidad, echamos a De la Rúa y ahora a los demás"*; no se descartó que hubiera nuevas renunciaciones en las próximas horas. Sin embargo, nadie imaginó que entre esas dimisiones estaría la del propio presidente.

Sábado 29 de diciembre:

Cerca de las dos de la mañana se desató la violencia. Un grupo de personas, cercanas a las vallas que separaban la Casa Rosada de los manifestantes, comenzó a tirar petardos y bengalas hacia el interior de la Casa de Gobierno. Luego, un grupo saltó las vallas y copó el área de entrada, y algunos se treparon por las ventanas. Los policías se agruparon en una de las calles laterales a la Casa Rosada -la esquina de Balcarce e Yrigoyen- y desde allí comenzaron a discutir con manifestantes, uno de estos últimos repetía: *"nosotros somos del pueblo, igual que ustedes, no entiendo por qué el otro día nos mataron como a perros. Si nosotros peleamos por ustedes también, no entiendo por qué nos reprimen"*. Cuando el grupo que estaba en la entrada de la Casa Rosada intentó derribar la puerta con una de las vallas, la policía lanzó gases lacrimógenos. Algunos manifestantes se enfrentaron con dos policías, los patearon y le robaron el arma a uno de los uniformados, mientras otros manifestantes corrían en auxilio de los oficiales. En la esquina de Hipólito Yrigoyen y Rivadavia se produjo un intercambio de piedras y gases. Algunos negocios y bancos de las calles cercanas fueron blanco de piedrazos y destrozos.

La manifestación que se desarrolló en el Congreso fue un desprendimiento de la multitud que copó la Plaza de Mayo antes de medianoche. Iniciada la represión, la gente había corrido en todas las direcciones posibles. En Avenida de Mayo, a diferencia de la plaza, no se escuchaban tantos reclamos por la imposibilidad de extraer dinero de los bancos, sino que las quejas se centraban más

en la política y los políticos. En el Congreso, aunque los manifestantes se colocaron sobre las escalinatas al grito de *“¡Argentina, Argentina!”*, la policía no tardó en arrojarles gases para que se desconcentraran. Pero no tardaron en volver. Un grupo forzó las puertas del Congreso y se extrajeron del interior sillones, cortinas y paneles que fueron encendidos produciendo una estremecedora escena de fuego y humo en la entrada principal del Palacio Legislativo. Uno de los participantes gritaba, manifestando una intención que estaba peligrosamente cerca de consumarse: *“Hay que quemarlos a todos estos hijos de puta.”* No pudieron llegar hasta otras zonas del edificio del Congreso porque la policía los desalojó con gases lacrimógenos. Algunos permanecieron en la calle, escenario improvisado de una espontánea épica urbana, cantando por enésima vez el Himno Nacional al son de las cacerolas. Más allá de las intervenciones disuasivas de la policía, la represión resultó mucho menos encarnizada y violenta que la que terminó con la protesta del 20.

En otro punto de la ciudad, sin embargo, la madrugada seguía agitada por el odio y la violencia inexplicables. Tres jóvenes miraban televisión en un maxikiosco cuando uno de ellos hizo un comentario irónico acerca de los policías que fueron golpeados por los manifestantes durante el cacerolazo. Un hombre de civil, suboficial retirado de la Policía Federal, que trabajaba en la seguridad del lugar, los acribilló. A continuación sacó del lugar los tres cuerpos con ayuda del personal de la comisaría 23, en la que había trabajado tiempo atrás y donde se refugió luego de sus crímenes para evitar el linchamiento al que se proponían someterlo los vecinos.

Avanzado el día, renunció todo el gabinete de Rodríguez Saá a sólo seis días de la asunción. El presidente, a raíz del cacerolazo de la noche del viernes y la madrugada del sábado, había pedido la renuncia a sus ministros y secretarios; quedarían sólo Rodolfo Gabrielli, ministro del Interior y Luis Lusquiños, secretario privado del Presidente. Rápidamente partió hacia Chapadmalal, sede de la residencia de verano del Presidente de la República, a reunirse con los gobernadores peronistas para consensuar un nuevo gabinete y medidas de emergencia para frenar el descontento, y ratificar las elecciones con la ley de lemas para el 3 de marzo. Después de su discurso volvieron a sonar las cacerolas en algunos barrios porteños. A las 11.10, el Presidente recibió la llamada de George Bush, quien prometió ayuda, a través del FMI, siempre que la Argentina trabajara con los organismos internacionales. El gobierno intentó mostrarse solvente ante el recrudecimiento de la crisis resolviendo asuntos como la defunción del “argentino”, el mantenimiento del corralito con un límite de extracciones de mil pesos semanales y el compromiso de

respetar los derechos de propiedad. Durante ocho horas, el secretario de Hacienda, Rodolfo Frigeri, intentó acordar con quince economistas un plan para la crisis. Como agravante de la crisis política, por primera vez desde que la Asamblea Legislativa propuso la ley de lemas, un juez federal de Mar del Plata falló en contra de esta ley en uno de los tantos recursos judiciales presentados durante los días pasados.

Por la tarde, otros acontecimientos violentos tensaron aún más la situación. Mientras tomaba el té con su familia en un *shopping* de la ciudad de Buenos Aires, Rodolfo Barra, ministro de Justicia durante el gobierno de Menem, fue descubierto por un hombre que lo increpó para que se retirara: *"Por culpa de personajes como Menem y vos estamos así. Andáte de acá."* Otras personas se sumaron al espontáneo escrache obligando a Barra a dejar el centro comercial, custodiado por la seguridad del lugar, en medio de los insultos y ruidos de golpes en las mesas de quienes se encontraban en el bar.

Los vecinos del barrio de Flores atacaron la comisaría 23, donde se encontraba el policía retirado que en la madrugada había asesinado a los tres jóvenes. Hubo un feroz enfrentamiento al cual los policías respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma mientras más vecinos se iban sumando en un cacerolazo bajo la consigna *"el barrio unido jamás será vencido"*. Avanzada la noche, los vecinos seguían protestando en la puerta de la comisaría. En menos de veinticuatro horas se habían registrado intentos de ocupar la Casa de Gobierno, el Palacio Legislativo y una comisaría de la ciudad de Buenos Aires.

Domingo 30 de diciembre:

Para la reunión convocada por Rodríguez Saá con los gobernadores de su partido en Chapadmalal, el secretario Frigeri tenía un paquete de medidas consensuadas con los economistas de distintas extracciones políticas y el Presidente había decidido difundir los nuevos integrantes del gabinete y ratificar el llamado a elecciones para el 3 de marzo. Sin embargo, el encuentro se vio frustrado ante la ausencia de los principales gobernadores que una semana atrás habían apoyado la designación de Rodríguez Saá como presidente provisional: José Manuel de la Sota (Córdoba), Carlos Reutemann (Santa Fe), Néstor Kirchner (Santa Cruz), Rubén Marín (La Pampa) y Carlos Manfredotti (Tierra del Fuego), entre otros, faltaron al convite. Estas ausencias quitaron legitimidad a cualquier decisión que allí se tomara; el Presidente entendió las deserciones como la obstaculización de la interna peronista a su plan de gobierno y al armado del nuevo gabinete. La reunión se había convocado fuera de la ciudad de

Buenos Aires para evitar mayores disturbios; no obstante, la entrada del complejo presidencial presencié un cacerolazo mientras la reunión se llevaba a cabo. Ángel Maza, el único gobernador que bajó del auto para hablar con la prensa, terminó abucheado e insultado por los manifestantes autoconvocados.

Después de la frustrada reunión, Rodríguez Saá partió hacia San Luis, provincia que gobernó por más de diez años, acompañado de algunos gobernadores de las denominadas provincias chicas. Su discurso estaba previsto para las 21, pero se retrasó hasta las 23, cuando apareció en la cadena nacional de radio y televisión con un mensaje plagado de errores técnicos durante toda la transmisión. La escena remedaba una reunión de familia en el living de la residencia del gobernador, con este último sentado en un escritorio delante de algunos gobernadores, funcionarios del gobierno de la provincia de San Luis, familiares, allegados y desconocidos que miraban la cámara informalmente vestidos y con gesto adusto. En su mensaje explicó el plan que quiso poner en marcha y dio las cifras del proyecto de presupuesto para el año 2002. Sorprendentemente, reivindicó las medidas tomadas en una semana de gobierno visiblemente orgulloso por su efímera gestión: la suspensión del pago de la deuda externa; la iniciación del proceso de inclusión social de los marginados por el *“perverso”* sistema; el plan para la creación de un millón de puestos de trabajo; la puesta en marcha de un plan de austeridad con la venta de autos oficiales, corte de celulares y el techo salarial de tres mil pesos para el Poder Ejecutivo Nacional, y la reducción del 40 por ciento del plantel de personal político; el estrechamiento de relaciones con Europa, Estados Unidos y el Mercosur; la anulación del estado de sitio en Buenos Aires, San Juan y Entre Ríos, etc. Y *“todo en siete días, de los cuales sólo tres fueron hábiles”*, se ufanó. También mencionó que a esa hora tenía pensado anunciar un plan para levantar el corralito sobre los depósitos. Hacia el final acusó a De la Sota, sobre quien enfatizó la ausencia a la cumbre de los gobernadores: *“me han quitado el apoyo, especialmente el gobernador de Córdoba que priorizó la interna partidaria a los intereses de la patria”*. Acto seguido anunció su renuncia al no obtener consenso entre los gobernadores peronistas para crear un plan de gobierno que calmara los reclamos que el viernes habían derivado en el cacerolazo y que se llevó consigo al gabinete.²⁸

Después de su discurso en la Plaza de Mayo se juntaron unas cien personas, a quienes la policía les exigió que se retiraran alegando que tenían ordenes de la jueza Servini de Cubría para reprimir en caso de que la zona no se despejara.

El encono del puntano lo llevó incluso a negarse a seguir en el cargo hasta tanto la Asamblea Legislativa le aceptara la renuncia, alegando repentinos

²⁸ Véase Anexo Documentos.

problemas de salud. El reiterado estado de acefalía que afectaba a la República no haría más que agravarse una hora después, cuando Ramón Puerta, el presidente provisional del Senado y virtual vicepresidente de la Nación, espantado por la crisis interna del PJ al que pertenece, renunció a asumir en reemplazo de Rodríguez Saá hasta que la Asamblea Legislativa designara otro presidente. De modo que el encargado de la conducción del órgano parlamentario que debería designar un nuevo presidente sería Eduardo Camaño, titular de la Cámara de Diputados. El país asistía absorto a la sucesión de renunciaciones como espectador de una delirante tragicomedia política.

Por su parte, y sin reparar en el estado de confusión generalizado, De la Sota respondió inmediatamente a las acusaciones de Rodríguez Saá: *"Lamento que el ex presidente se haya referido a los nueve gobernadores del PJ para descargar culpas que no son tales."* Destacó también que el ex primer mandatario nunca lo contempló para tomar decisiones, excepto cuando tuvo que *"salvar las papas"*, y pidió además que se convocara a elecciones lo antes posible, con lo cual rechazaba que la Asamblea Legislativa eligiera un nuevo presidente hasta 2003. Hubo versiones que afirmaban que, además de De la Sota, el senador Eduardo Duhalde sería un posible candidato para el gobierno con mandato hasta 2003. Carlos Ruckauf, por el contrario, así como también Puerta, estimó más urgente concretar un gobierno de salvación nacional que incluyera figuras de otros partidos, dando prioridad a *"un plan para gobernar"* antes que acordar la convocatoria a nuevas elecciones; él mismo se consideró capacitado para encabezar dicho gobierno. Néstor Kirchner negó haber precipitado la renuncia de Rodríguez Saá a la presidencia y cuestionó la gestión del efímero presidente aduciendo que pretendía prolongar su mandato hasta 2003, a través de un *"pacto de Olivos II"*, acordado entre radicales y menemistas.

Por la noche siguió la protesta por el crimen de los tres jóvenes. La justicia dictó el procesamiento con prisión preventiva para Juan de Dios Velaztiqui, quien fue encontrado penalmente responsable de los homicidios, y un embargo sobre sus bienes. El reclamo durante todo el día, por parte de los vecinos, logró que la dirigencia de la Policía Federal destituyera a toda la cúpula de la comisaría 23.

El lunes 31 de diciembre fue la víspera de un nuevo año políticamente incierto para los argentinos.

Martes 1° de enero de 2002:

Tras intensas negociaciones durante el último día del primer año del nuevo milenio, la Asamblea Legislativa se disponía a reunirse luego del mediodía. Habían pasado apenas 12 días de la última reunión de diputados

y senadores, que en una jornada festiva había proclamado presidente provisional al irascible Adolfo Rodríguez Saá. Los rostros de los legisladores ya no denotaban euforia, sino consternación; la crisis había desbordado el control de los partidos mayoritarios y se requería dramáticamente un acuerdo que trascendiera las ambiciones electorales. El acuerdo llegó y la Asamblea Legislativa se reunió con el claro propósito de designar presidente interino de la Nación, hasta el 30 de octubre de 2003, a Eduardo Duhalde, candidato justicialista derrotado por la Alianza renunciante en las elecciones de octubre de 1999. En una extensa sesión, la Asamblea eligió al candidato justicialista, quien obtuvo 262 votos a favor, 21 en contra y 18 abstenciones. Indiscutido líder del peronismo bonaerense, Duhalde había sido vicepresidente de la primera gestión de Carlos Menem (1989-1995) y renunciado a su cargo para ocupar por dos períodos consecutivos la gobernación de la provincia de Buenos Aires. En el momento de su proclamación como presidente de la Nación ocupaba una banca como senador por la misma provincia. La designación de Duhalde conformaba claramente una estrategia de las cúpulas de los dos partidos mayoritarios, radicalismo y justicialismo, aunque acompañada por importantes sectores minoritarios del Frepaso y partidos provinciales, para sostener un sistema de partidos conmovido por la deslegitimación de sus liderazgos en el marco de una profunda crisis económica y social.

En cuanto la Asamblea Legislativa comenzó a sesionar, cerca de las 18, a escasos metros del Congreso se produjo un enfrentamiento entre militantes de partidos de izquierda (MST, Izquierda Unida, Partido Obrero, Convergencia Socialista) y militantes vestidos con remeras blancas con la inscripción *"Duhalde Presidente"*. Los simpatizantes y militantes del peronismo bonaerense habían asistido para apoyar a su líder y casi presidente, mientras que las agrupaciones de izquierda repudiaban toda renovación de los antiguos liderazgos y proponían una Asamblea Constituyente. Los sucesos tomaron otro cariz cuando el intercambio de piedras, vidrios y cascotes entre los 200 militantes llegó a dos cuadras del Congreso. Hubo insultos e insinuaciones políticas de ambos bandos. Los disturbios duraron diez minutos, hasta el arribo de la Infantería de la Policía Federal que dispersó a los contendientes con gases lacrimógenos, balas de goma y palos. Cerca de allí, dentro de una plaza soleada y calurosa, más de dos mil manifestantes esperaban la decisión de la Asamblea en torno a la elección del nuevo presidente.

Por la noche, mientras el Congreso sesionaba con el objetivo de realizar la elección, se registraron en la ciudad de Buenos Aires varios cacerolazos. Fueron en las zonas de Congreso, Balvanera, Caballito, Palermo, Flores y Belgrano. Mientras diputados y senadores elegían al Dr. Duhalde como nuevo presidente de la Nación, y éste leía su discurso de asunción donde reconocía que la Argentina estaba *“quebrada”*, pero también aseguraba que los depósitos retenidos en el sistema financiero serían restituidos en la moneda en que habían sido depositados, los tibios cacerolazos despertaron la inquietud de muchos ciudadanos que, tras la elección, se lanzaron a la calle a manifestar su desacuerdo y a protestar por la permanencia de la Corte *“corrupta”* y por el nuevo acuerdo palaciego de los partidos mayoritarios postergando las elecciones.²⁹ En el barrio de Congreso, donde se encuentra el Palacio Legislativo, momentos después del discurso del presidente entrante, los manifestantes alcanzaron el número de 500. No se registraron hechos de violencia.

La designación del nuevo presidente, cerca de las 22.30, estuvo seguida por mensajes de apoyo provenientes de varios países, entre ellos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, que calificó a la Argentina como *“un aliado valioso y un amigo”*, asegurando que *“una vez que Argentina elabore un plan económico sostenible, en cooperación con las instituciones financieras internacionales, estamos dispuestos a apoyar al país mediante el FMI y otras instituciones”*.

Miércoles 2 de enero:

Una vez llegado a la presidencia, Duhalde ensayó un guiño para movilizar un juicio político a Julio Nazareno, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y a Adolfo Vázquez, ministro del mismo tribunal, ambos cuestionados por la liberación de Emir Yoma y Carlos Menem, imputados en el caso de venta de armas a Ecuador y Croacia. Por su parte, el jefe del gobierno porteño, Aníbal Ibarra –dirigente del Frepaso e integrante de la Alianza-, solicitó una remoción general de la Corte. Este pedido se sumó al de Gustavo Béliz y Elisa Carrió -ex legisladora radical y figura descollante de la oposición al acuerdo entre los partidos mayoritarios-, que hicieron expreso su desacuerdo ante el presidente Duhalde. Nazareno se sumó a la lista de escraches del día cuando varios manifestantes se presentaron frente a su domicilio. A pesar de los rumores de renuncia y declaraciones oficiales, según los integrantes de la Corte,

²⁹ Véase Anexo Documentos.

sólo los mecanismos previstos por la Constitución podrían alejarlos del cargo.

El Ministerio de Economía, liderado ahora por el ex diputado Jorge Remes Lenicov, analizó las alternativas del nuevo plan económico para salir de la convertibilidad. Como lo había establecido el nuevo presidente en su discurso frente a la Asamblea Legislativa, la alianza con el capital financiero que sustentó el modelo inaugurado por Menem en 1991 había quedado definitivamente obsoleta y debía ser sustituida por un modelo fundado en una nueva alianza con los *“sectores de la producción y el trabajo”*. El nombramiento de José Ignacio de Mendiguren, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), como encargado del flamante Ministerio de la Producción, indicaba la determinación del gobierno de cambiar el rumbo de la política económica. La propuesta mejor consensuada consistía en una devaluación controlada del peso, que se estimaba en el orden del 30 por ciento, para establecer una paridad de un dólar a 1,30 pesos.

Mientras tanto, el caos financiero no daba tregua a los cada vez más irascibles ahorristas. Los bancos abrieron de 8 a 20 con actividades estrictamente limitadas. Por séptimo día hábil consecutivo, no se pudieron comprar dólares ni hacer transacciones con esa moneda.

Jueves 3 de enero:

El nuevo ministro de Economía asumió con amplio respaldo de varios sectores políticos y empresarios. En el acto de asunción, que fue presenciado por más de un centenar de personas ligadas a las altas cúpulas políticas de los partidos mayoritarios, la bienvenida al nuevo ministro Jorge Remes Lenicov se tradujo en un cálido aplauso con discretos aires de optimismo. Se anunció la pesificación de las tarifas de servicios públicos, que dejarían de estar atadas al precio del dólar. Asimismo, se anunció un *“virtual congelamiento”* de las tarifas de servicios vigentes en la actualidad. Por su parte, las empresas privatizadas de servicios públicos comenzaron a negociar con el gobierno un seguro de cambio para saldar sus deudas contraídas en dólares. Desde el gobierno, trascendió que el Poder Ejecutivo estaría autorizado por ley a fijar precios máximos en productos que fueran de provisión oligopólica o monopólica. Entre estos productos se encontraban los combustibles, medicamentos y servicios públicos varios. El proyecto de ley omnibus que establecería las nuevas reglas económicas autorizaría también al Ejecutivo a imponer

retenciones a las exportaciones petroleras, fondos que se destinarían a financiar las consecuencias de la devaluación sobre el sistema financiero. Los argentinos asistían expectantes a la transformación repentina del sistema de reglas económicas que había ordenado su interacción durante diez años.

Las referencias a la agitación social de las últimas semanas por parte del gobierno entrante no se hicieron esperar. En una entrevista, el nuevo jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que *“los problemas de la Argentina no se resuelven sólo con protestas o con cacerolazos, se resuelven con políticas claras con capacidad para generar consensos”*. El amplio consenso parlamentario del que había surgido el gobierno de transición que afirmó liderar el presidente Duhalde buscaba de esta forma una tregua social para encarar una importante redistribución del ingreso hacia los sectores exportadores a través de la devaluación del peso.

Viernes 4 de enero:

Como consecuencia de la inminente devaluación, comenzó a circular el temor por el desabastecimiento de medicamentos en la ciudad de Buenos Aires y varias provincias. El reclamo se hizo expreso por parte de farmacéuticos y consumidores, aunque los laboratorios afirmaron que seguían entregando sus productos de forma normal.

Hacia el mediodía llegó al Congreso el proyecto de ley de Emergencia Pública y Régimen Cambiario. A medida que se trataba el proyecto, los cambios avanzaban sobre dos ejes centrales: la flexibilización del corralito y la necesidad de definir el contenido de un artículo de la ley que protegiera a los deudores en dólares frente a la devaluación.

En la residencia de Olivos, el presidente Duhalde se reunió con un centenar de empresarios ante quienes afirmó su intención de cambiar el eje de poder que predominó durante la última década. Sostuvo: *“Mi gobierno pondrá fin a la alianza del poder político con el poder financiero que perjudicó al país, para sustituirla por una alianza con la comunidad productiva.”* Un largo debate se abrió luego, cuando debieron tocar el tema de los precios. Según afirmaron los empresarios, no estaba en sus intenciones mover los precios de sus productos salvo que se vieran afectados por la incidencia directa del aumento del dólar. Si bien se estimaba que la extensa recesión, que ya llevaba más de cuatro años, podría ser un freno para el desencadenamiento de un proceso inflacionario, de todos modos, los incipientes aumentos de precios y la confirmación del congelamiento de los salarios

previamente recortados durante el gobierno de la Alianza, conformaban nuevos motivos para el descontento popular.

Sábado 5 de enero:

La intriga por el desarrollo de la política económica del nuevo gobierno crecía en forma constante. Las declaraciones de los funcionarios resultaban confusas y, a veces, contradictorias. En el Palacio de Hacienda circularon versiones en torno al nuevo plan del gobierno para después de la devaluación. Se aseguró que el tipo de cambio sería fijo y rondaría los 1,38 pesos por cada dólar. El programa elaborado por el Ministerio de Economía constaba de tres partes: rediseño del corralito financiero, confección del presupuesto con déficit cero y negociación con el FMI. Según fuentes del ministerio, la reprogramación de los depósitos a plazo fijo se haría en un lapso de tiempo máximo de seis meses.

En el plano de las políticas sociales, el secretario de la presidencia, Aníbal Fernández, aseguró que se crearían un millón de puestos de trabajo en el mediano plazo, según el Presidente, con el fin de *“garantizar la paz social”*. El secretario también aclaró que se respetarían las necesidades regionales y que el pago se haría con bonos debido a las dificultades financieras para emitir moneda genuina.

El desarrollo de la protesta seguía sus carriles espontáneos. En la ciudad de Mendoza, los vecinos obligaron al ministro de Economía de la provincia, Lucio Duarte, a abandonar una mesa de café en un bar de esa ciudad. Entre cacerolazos y bocinazos realizaron un “escrache espontáneo”. Una veintena de personas protestó en forma directa ante la presencia del funcionario, quien decidió abandonar el lugar para evitar problemas mayores. Los manifestantes lo repudiaron con gritos e insultos que incluyeron al gobierno nacional y a los miembros de la Corte Suprema.

Domingo 6 de enero:

Luego de nueve horas de sesión, el Senado otorgó sanción definitiva a la ley omnibus que terminaba con la convertibilidad. El texto, que fue aprobado con cinco abstenciones, cincuenta votos a favor y seis en contra, era el mismo que había salido el día anterior de la Cámara de Diputados. Se fijó el precio del dólar oficial a 1,40 pesos para todas las transacciones relacionadas con el sistema financiero y el comercio internacional, al mismo tiempo que se reconoció la existencia de un mercado paralelo para el resto de las operaciones donde el dólar tendría una cotización flotante o libre. Las deudas en dólares inferiores a los cien mil dólares se

convertirían a pesos en una relación de uno a uno con el dólar, en una operación que se denominó *"pesificación general de la economía"*. Se anunció también una flexibilización parcial del corralito: se podrían extraer hasta 1.500 pesos por mes en las cuentas de depósitos de sueldos y jubilaciones.

Se completó el equipo de gobierno con la asunción de los ministros Horacio Jaunarena, en Defensa, y Graciela Gianettasio, en Educación.

La Red Solidaria³⁰ convocó a una misa en la que se pediría por la *"recuperación Nacional"* a las seis de la tarde en la Catedral metropolitana. El presidente Duhalde asistió a la misa al igual que miles de fieles que se reunieron en distintos puntos del país. El oficio religioso fue parte de una convocatoria más amplia en la que representantes de distintas confesiones religiosas - miembros de la comunidad judía y protestantes- se comprometieron para orar en todo el país a partir de las 18.

Los sectores de mayor poder adquisitivo se lanzaron a padecer extenuantes colas en las casas de electrodomésticos para aprovechar a adquirir productos –en su mayoría importados- ante el temor de un brusco aumento de precios. En los supermercados, comenzó a registrarse el descontento y la indignación generalizados ante la remarcación de precios por parte de los comerciantes, principalmente en los productos alimenticios y de perfumería.

Lunes 7 de enero:

Con una celeridad alarmante, aumentaron los precios de los productos importados: café, pañales, electrodomésticos y de perfumería; también se registró un incremento en los artículos de exportación: harina, azúcar, pan y yerba. El dólar libre cotizó a 1,45 pesos.

Jaqueada por varios pedidos de juicio político y un fuerte descontento popular, motivo de numerosos cacerolazos que se repetían sistemáticamente los jueves por la tarde frente a la sede de Tribunales, la Corte Suprema debía decidir sobre la legalidad del corralito financiero ante la andanada de recursos de amparo presentados por los ciudadanos. Existía un antecedente: el 28 de diciembre, el Tribunal había anulado una resolución en primera instancia que había permitido al juez Kipper recuperar 200 mil dólares del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Su potestad sobre los recursos judiciales resultaría el más importante recurso de presión por parte de los integrantes del máximo tribunal para evitar el juicio político que significaría su segura destitución.

La esposa del Presidente, Hilda "Chiche" Duhalde, ex diputada nacional y coordinadora del área social del gobierno, anunció un plan de subsidios y alimentos

³⁰ Institución no gubernamental de asistencia pública encabezada por la Iglesia Católica.

a jefes de hogar que abarcaría a un millón de personas y por los cuales deberían comprometerse a *“trabajar y garantizar la escolaridad de sus hijos”*. Los anuncios de planes de asistencia social y empleo se multiplicaban cotidianamente sin coordinación aparente.

Luego de algunos días de expectativa e incertidumbre la protesta social se reactiva en las provincias. En Mendoza se realizó una protesta de empleados estatales en la que participaron alrededor de 250 personas, que exigían el pago del aguinaldo, aún no abonado, así como el salario de diciembre que todavía no tenía fecha de pago. La protesta culminó con el violento saldo de siete policías heridos y un policía golpeado. Los manifestantes pidieron ser recibidos por las autoridades y ante la negativa intentaron ingresar por la fuerza en la Casa de Gobierno de la provincia, iniciándose una represión policial que fue contestada con piedras. El gobernador de Mendoza, Roberto Iglesias, confirmó luego el pago del aguinaldo, no así el del sueldo de diciembre.

En la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, una multitud de 700 clientes, enardecidos debido a que el Banco de La Pampa suprimió sin aviso los acuerdos para los giros en descubierto –lo cual originó el rechazo de más de tres mil cheques-, paralizaron la casa central reclamando la renuncia del presidente de la entidad.

El gobierno nacional manifestó su preocupación y analizó la posibilidad de que se produjeran nuevos estallidos sociales en el conurbano bonaerense. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá -ex vicegobernador y sucesor de Carlos Ruckauf por la incorporación de este último como canciller del gobierno de Duhalde-, intentó crear una red de contención con los intendentes administrando veinte mil nuevos subsidios para jefes de hogar desocupados.

Algunos indicadores de la situación de los servicios públicos gestionados por el Estado daban cuenta de la profundidad de la crisis: en el área de educación, el estado debía cuatro cuotas del incentivo docente, complemento de los sueldos de los trabajadores de la educación congelados por casi una década; en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, se denunciaban cotidianamente faltantes de insumos básicos, desde drogas, hasta material descartable.

Martes 8 de enero:

La situación de los depósitos incautados en el corralito financiero se publicó en una investigación del diario *Clarín*: el 93,9 por ciento de los depósitos se encontraba en la banca privada y sólo un 6,1 por ciento, en la banca pública. Respecto de la moneda en que estaban depositados, el 72,8 por ciento estaba en

dólares mientras que el 27,2 por ciento, en pesos. Las cifras manifiestan las dimensiones de la devaluación instrumentada por el gobierno en una economía notoriamente dolarizada.

En medio de fuertes rumores que aseguraban que la Corte Suprema de Justicia fallaría en contra del corralito como resultado de su enfrentamiento político con el gobierno, el tribunal emitió un nuevo fallo a favor del corralito, ratificando la suspensión de las medidas cautelares que hubieran permitido a los ahorristas retirar los depósitos bancarios. En ese momento, la Asociación de Abogados Laboralistas, organización precursora de las protestas contra la Corte, organizó para el 10 de enero un nuevo cacerolazo frente a Tribunales para exigir la renuncia de los miembros del máximo tribunal.

Comenzaron las reacciones internacionales por la decisión del gobierno de pesificar las tarifas de las empresas privatizadas, sin perjuicio de una eventual revisión de los contratos que estas últimas habían celebrado con el estado argentino durante el anterior gobierno justicialista. El líder del gobierno español, José María Aznar, criticó duramente las medidas del gobierno, acusándolas de *“populistas y proteccionistas”* y de no tener en cuenta los intereses de su país como principal inversor extranjero en la Argentina. Paradójicamente, en Barcelona se realizaron los primeros cacerolazos internacionales en solidaridad con los ahorristas argentinos.

La cúpula de la Iglesia Católica, convocada por Duhalde para prestar un “marco espiritual” para las conversaciones con los distintos sectores políticos, sindicales y empresariales, emitió un documento donde exhortaba a todos los sectores a considerar sus responsabilidades en la crisis que vivía el país.

En la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires, los recolectores de residuos protestaron frente a la Municipalidad quemando montañas de basura y arrojando residuos contra el edificio en reclamo del pago de sueldos y aguinaldos que les adeudaba la empresa Álvarez y Patiño, subcontratada por la comuna para realizar ese servicio. Durante la mañana comenzaron a quemar las bolsas de basura hasta que recibieron un mensaje de las autoridades municipales donde se les solicitaba un plazo de cinco días para negociar las deudas. Sin considerar plazo alguno, empezaron a arrojar botellas contra el municipio hasta que llegó la policía y, tras una violenta discusión, se llegó a un arreglo. El intendente de Lanús, Manuel Quindimil, se comprometió a pagar las deudas y romper el contrato con la empresa.

Los problemas con el Banco de La Pampa continuaron con una violenta protesta en la sede de la ciudad de General Pico. Los manifestantes exigieron la restitución del 70 por ciento del descubierto y obligaron a los titulares de la entidad

a refugiarse en locales comerciales aledaños de los cuales fueron rescatados cerca de las 23 por patrulleros de la policía.

Miércoles 9 de enero:

El ministro de Economía Jorge Remes Lenicov rectificó los anuncios de pocos días atrás anunciando un nuevo cronograma para salir del corralito. Los plazos fijos comenzarían a devolverse a partir de enero de 2003, dado que los bancos no disponían del dinero para hacer frente a un retiro masivo. Al mismo tiempo, el gobierno informó que el ajuste del gasto público alcanzaría los ocho mil millones de pesos.

Con el afán de paliar la crisis social, el gobierno anunció la posibilidad de distribuir productos retenidos en la aduana: ropa, alimento y calzado para los planes sociales. Asimismo, se declaró la emergencia sanitaria y llegaron partidas de insulina desde Brasil, luego de varios días de reclamos y protestas. El canciller Ruckauf calificó al envío de las partidas de insulina desde Brasil como un *“gesto de amor”*.

En la ciudad de La Plata, los docentes universitarios y empleados administrativos de la universidad local cortaron las calles para realizar un cacerolazo frente al rectorado en reclamo del pago de sueldos de diciembre y el medio aguinaldo. Las autoridades de la Universidad de La Plata adujeron que los fondos no fueron girados por el gobierno. Con la solidaridad de la comunidad educativa, los manifestantes se agruparon en asamblea permanente de docentes, no docentes, padres y alumnos.

En la capital de la provincia de Córdoba se produjo una violenta protesta de taxistas. Los trabajadores, que bloquearon las principales avenidas de la ciudad, exigían que se reglamente el trabajo de los remises. Acusaban al intendente de no cumplir con la promesa de vetar la ordenanza por la cual se les permitía a los remises utilizar autos usados. La jornada de protesta, que se desarrolló con disturbios, caos y destrucción de vidrieras, comenzó en el Parque Sarmiento de la ciudad y se trasladó luego al *shopping* Patio Olmos, con corte del tránsito y quema de neumáticos. Los taxistas se enfrentaron con los remiseros que encontraron a su paso y luego con la policía. El saldo de este choque fue de 25 manifestantes detenidos y nueve policías heridos.

Jueves 10 de enero:

El gobierno levantó el feriado bancario. A las 17, como parte del cacerolazo convocado por la Asociación de Abogados Laboristas, cientos de manifestantes se congregaron frente al Palacio de Tribunales para reclamar la renuncia de los

miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuando aún no había pasado una hora desde que el tribunal firmara nuevas ratificaciones que avalaban el corralito.

Durante la noche, los vecinos de distintos barrios porteños y del norte del Gran Buenos Aires volvieron a la calle para hacer sonar las cacerolas. Las concentraciones empezaron cerca de las 22 con pocas personas al principio, pero en el transcurso de las horas se fueron sumando nuevos manifestantes. Ya cerca de la medianoche, los diversos grupos se dirigieron hacia distintos puntos clave de la ciudad: la Plaza de Mayo, el Congreso y el Obelisco. Estaba en marcha la primera gran protesta durante el gobierno de Duhalde. Los principales puntos de reunión, donde los vecinos se concentraron para luego marchar, fueron las esquinas principales de los distintos barrios. En Barrio Norte, Santa Fe y Scalabrini Ortiz, y Santa Fe y Salguero. Allí, alrededor de 200 personas en cada esquina se concentraron golpeando sus cacerolas y reclamando la devolución de sus depósitos. Otras esquinas en donde se sucedían escenas similares fueron: Corrientes y Scalabrini Ortiz en Almagro, Olazábal y Crámer, y Luis María Campos y Federico Lacroze en Belgrano, y Rivadavia y José María Moreno en Caballito. Otros vecinos apoyaban el reclamo y batían cacerolas desde los balcones. Todo acontecía en barrios cuyos habitantes forman parte de la clase media y media alta urbanas.

También los vecinos de la zona norte del GBA se concentraron para hacer sonar las cacerolas cercando la quinta presidencial de Olivos. Otro foco importante de la protesta fue la ciudad de Rosario, donde más de mil manifestantes se reunieron frente al tradicional Monumento a la Bandera.

Otra protesta acontecida en la misma jornada, consecuencia de la crisis sanitaria, fue la convocada por la Liga Argentina de Protección al Diabético, donde alrededor de cien enfermos de diabetes se congregaron para protestar por la falta de insulina y solicitar que el gobierno garantizara su distribución continua. *“Esto no es un cacerolazo, es un jeringazo”*, comentaba un jubilado que participaba en la protesta.

Por la mañana, en Wilde, localidad ubicada al sur del GBA, las familias de las víctimas de la “masacre de Wilde” -acontecida cuatro años atrás, cuando un grupo de policías asesinó a cuatro personas- seguían reclamando justicia con una manifestación frente a los tribunales de Lomas de Zamora.

Viernes 11 de enero:

Se desarrolló otra jornada de protesta con saldo violento en el centro porteño, con un nuevo cacerolazo que confluyó hacia Plaza de Mayo. Al igual que el jueves, los vecinos de los barrios porteños comenzaron a congregarse para marchar hacia la Plaza de la República y el Congreso Nacional. La jornada culminó con

daños, saqueos y roturas en distintas zonas cercanas a Plaza de Mayo. Los destinatarios excluyentes de la ira de los manifestantes fueron los bancos. Quince entidades financieras fueron atacadas en Avenida de Mayo y en Callao, con daños tales como rotura de vidrios e incendio de cajeros automáticos. Los bancos atacados fueron los siguientes: Francés, Lloyds Bank, BankBoston, Río, Sudameris, Provincia de Buenos Aires y Bansud. También fueron destruidas las paradas de colectivos y los teléfonos públicos de Avenida de Mayo. Prácticamente no se registraron acciones represivas.

En Córdoba se realizó una protesta de empleados municipales de la ciudad capital. Autoconvocados alrededor de las 14 en una asamblea, 400 trabajadores repudiaron el anuncio del intendente, quien admitió no tener recursos para pagar los sueldos de diciembre. La represión comenzó cuando los manifestantes se enfrentaron con la policía al incendiar el automóvil de un funcionario del gobierno de la comuna. El resultado de los disturbios fue 10 trabajadores heridos con balas de goma. A raíz de este episodio, hubo versiones de una posible renuncia del intendente Germán Kammerath, quien luego las desmintió por radio agregando el dato curioso de que los asambleístas producían un gasto de 250 mil pesos por día de asamblea. La provocación del funcionario encendió nuevos cacerolazos por toda la ciudad que exigían su renuncia.

Las protestas se extendieron por las provincias de Salta, San Juan, Catamarca, Neuquén, Mendoza y Santiago del Estero. En Jujuy, se produjeron varios cortes de ruta. En Neuquén, la justicia detuvo por la noche a los principales dirigentes de la CTA y de ATE³¹ en distintos allanamientos vinculados con las protestas de desocupados.

Sábado 12 de enero:

El presidente se limitó a reconocer la legitimidad de los motivos que impulsaban las protestas y solicitó tiempo para poner en marcha las reformas que, estimó, devolverían al país a una cierta normalidad.

En Mendoza un importante dirigente provincial fue atacado e insultado por manifestantes que realizaban un cacerolazo. El diputado radical y ex intendente de la capital, Víctor Fayad, se encontraba sentado en un bar junto a su madre cuando medio centenar de personas rodeó su mesa aplaudiendo y levantando sus carteles con consignas como: *"Basta de radicales y peronistas, queremos elecciones."* La ira de los manifestantes fue creciendo. Hubo empujones y algunos puñetazos que obligaron a la policía a intervenir, pero ni Fayad ni su madre aceptaban irse del café. *"Caraduras, que se vayan"*, gritaba Sonia Aciar, una ama de casa con ocho

³¹ Asociación de Trabajadores del Estado, integrada a la CTA.

hijos quien afirmó que los políticos *"deberían tener vergüenza de salir a la calle"*. Una lluvia de hojas de árboles y tierra de los canteros de la peatonal cayó sobre el diputado, que tuvo que solicitar custodia policial para dejar el lugar. Era el segundo "escrache espontáneo" que se registraba en la coqueta peatonal mendocina en menos de una semana.

Domingo 13 de enero:

En un clima de declaraciones cruzadas y trascendidos, el presidente Duhalde intentó ganar iniciativa lanzando una convocatoria al "Diálogo Social". Tanto la Iglesia Católica como el PNUD venían trabajando hace tiempo en dicha convocatoria. El llamado a la concertación se iba a realizar, en un principio, con un gran acto en el recién restaurado convento de Santa Catalina de Siena, ubicado en el microcentro, y reuniría a figuras de todos los sectores. Pero el temor a un cacerolazo en la puerta del templo de San Martín y Viamonte ante la concentración de figuras políticas llevó a un cambio de planes. Se decidió reemplazar el acto por un discurso transmitido en cadena nacional. Previsto inicialmente para la noche del mismo domingo, el mensaje fue emitido al día siguiente, y acompañaron al Presidente en su discurso el presidente del Episcopado, monseñor Estanislao Karlic, y el titular del PNUD, Carmelo Angulo Barturen. Duhalde afirmó que no participaría de las elecciones presidenciales de 2003 y anticipó que también renunciaría a los cargos en el justicialismo: *"Quiero ser un servidor despojado de compromisos partidarios y de ambiciones futuras."*

En una entrevista otorgada a un medio nacional, el Presidente se refirió en estos términos al fenómeno del cacerolazo: *"Creo que es absolutamente legítimo. La gente puso la plata en el banco y ahora no entiende por qué no la puede sacar. Defienden sus intereses. Lo que temo es la mezcla del cacerolazo con acciones violentas."*

También en una entrevista con un matutino, el diputado de la UCR Leopoldo Moreau confirmó que un sector del radicalismo bonaerense había elevado un pedido para que el tribunal de conducta del partido expulsara del mismo al ex presidente Fernando De la Rúa, en respuesta a la hipótesis que éste había hecho pública en relación con un supuesto complot para sacarlo del poder.

Ese domingo se realizó en Parque Centenario una Asamblea Interbarrial, difundida de boca en boca, en la que participaron cerca de mil representantes de las asambleas barriales que venían reuniéndose periódicamente desde los últimos días de diciembre. Asistieron también integrantes de la Asamblea de Avellaneda, una delegada de una fábrica tomada en Tierra del Fuego (Aurora Grundig), amigos de los chicos asesinados en Floresta, delegados de los motoqueros y docentes de la

UBA y de CTERA disidentes de sus conducciones gremiales. Se discutieron allí propuestas llevadas por los delegados de las asambleas y se tomaron las siguientes resoluciones: 1) protestar contra los servicios privatizados: el miércoles 16, se descolgarían los teléfonos de 12 a 14 y se haría un apagón de 20 a 22; 2) apoyar la convocatoria al cacerolazo de los abogados laboristas contra la Corte Suprema para el jueves 17 a las 17 en Talcahuano y Lavalle (una de las asambleas propuso hacer un escrache contra Nazareno, que vive en Posadas al 1400); 3) ir a la marcha del sábado 19 a las 18 en Floresta (Gaona y Bahía Blanca) por los chicos asesinados; y 4) reconocer que hay dos campos, y que los ahorristas "acorralados" están en el mismo campo que los trabajadores, desocupados, piqueteros y todas las víctimas del sistema.

Lunes 14 de enero:

Por la madrugada, alrededor de 500 desocupados cortaron la entrada al Mercado Central en demanda de entrega de alimentos. Luego de varias horas de permanecer en el lugar, dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa -nucleamiento que aglutinaba a la mayoría de los manifestantes- les exigieron a los changarines³² la entrega de bolsas con cinco kilogramos de alimentos en cada una; una por cada puesto. La reacción de los changarines a dicho pedido fue inmediata y se suscitó un enfrentamiento entre ambos sectores que terminó con la muerte de un manifestante y varios heridos. Los furiosos trabajadores se oponían a perder su jornal por la intervención de los desocupados.

Duhalde recibió a la Confederación Rural Argentina (CRA), a la Sociedad Rural Argentina y a la Federación Agraria Argentina (FAA). Las organizaciones del agro entregaron al Presidente un documento en el cual se expresaba como demanda central la *"celeridad en los trámites de insumos estratégicos del Agro"*. También le solicitaron al Presidente la anulación de las retenciones a las exportaciones agrarias. Dentro del gobierno continuaron las discusiones por las condiciones de pesificación de los depósitos bancarios.

Martes 15 de enero:

Por otro lado, el FRENAPO reclamó la creación de un seguro de empleo de 380 pesos para jefes y jefas de hogares desocupados, a través de un petitorio que se entregó durante una reunión con el Presidente.

³² Así se denomina a los encargados de transportar los productos en los centros de distribución.

Durante la tarde, pacientes transplantados de hospitales públicos reclamaron por la falta de insumos y medicamentos. En el reclamo también participaron farmacéuticos y vecinos autoconvocados de diferentes barrios porteños y de la provincia de Buenos Aires. La crisis sanitaria y educativa convocó la solidaridad de las asambleas populares constituidas en los barrios.

En la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe, se produjo una violenta manifestación de productores rurales endeudados, de la que también tomaron parte operarios frigoríficos, productores, empresarios y vecinos locales, además de la Corriente Clasista y Combativa; los manifestantes sumaron un total de ocho mil personas. El reclamo se centraba en la pesificación de las deudas uno a uno. Sin que se produjeran incidentes, la multitud recorrió a pie ocho cuadras de Av. Buenos Aires, con el intendente Eduardo Ronconi, Martín Bacalini de la Federación Agraria y Hugo Racca, presidente del Centro Económico de Casilda, a la cabeza. Al llegar a las cuatro plazas, algunos jóvenes con las caras tapadas y mochilas comenzaron a tirar piedras contra el Banco Bisel. A partir de allí se desencadenó la furia, que se extendió por varias cuadras a la redonda contra los demás bancos y oficinas de recaudación de impuestos y de servicios. La jornada culminó esa misma tarde con los bancos destruidos, las oficinas públicas incendiadas, 14 heridos y 19 detenidos, la mayoría de los cuales fueron liberados, menos tres que tenían antecedentes por delitos comunes. Esas imágenes, que fueron el tema central de los noticieros nacionales, reinstalaron el temor de nuevos levantamientos violentos en localidades del interior del país.

En la provincia de Jujuy, sede de las más radicalizadas protestas de desocupados junto con Salta y Neuquén, un millar de trabajadores estatales se manifestó a través de un cacerolazo que culminó con el ataque a bancos y con la rotura de vidrieras. El uso de capuchas por parte de los participantes fue generalizado, lo cual provocó diversas conjeturas acerca del carácter premeditado de los disturbios. El fantasma de los “activistas”, considerados instigadores de los hechos de violencia acontecidos durante las protestas masivas, recorrió el imaginario conspirativo de políticos y periodistas desde el discurso pronunciado por De la Rúa el 19 de diciembre.

También en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, extremo del país, inaugurando una forma de protesta que combinaba las difundidas demandas de la hora con una escenificación marcada por aspectos confesionales muy arraigados en el norte argentino, alrededor de 40 personas realizaron una crucifixión como forma de protesta bajo el lema *“tenemos hambre, que el gobierno no sea corrupto”*. Muchos de los manifestantes se crucificaron espontáneamente atando sus cuerpos a postes de luz. En la protesta, convocada por el padre Jesús Olmedo, párroco de

La Quiaca, participaron empleados estatales, municipales y desocupados. Los manifestantes se esforzaron en aclarar que las crucifixiones tenían un carácter “social y religioso”. Al ser “crucificados”, los protagonistas decían su nombre, los hijos que tenían y mencionaban sus necesidades. Por prescripción médica, la crucifixión colectiva se organizó a partir de las 10 en dos turnos sucesivos de cinco horas cada uno. Los “crucificados” fueron 39 por turno, a los que se fueron sumando espontáneamente otros manifestantes. A las 19, la protesta finalizó con una misa comunitaria celebrada por el padre Olmedo en la plaza central de la ciudad. Allí el prelado exigió asistencia social a la desocupación y reducción del gasto público.

Dos mil quinientas personas protestaron en una manifestación en Plaza de Mayo. La protesta fue encabezada por empresarios ligados al rubro inmobiliario. La demanda se centró en la flexibilización del corralito debido a la parálisis que la incertidumbre financiera provocaba sobre las operaciones del sector. Los participantes lograron entregar un petitorio al gobierno.

El presidente Duhalde y su equipo se reunieron por la tarde con miembros de la CGT y de la CTA con el objetivo de convocar a jornadas de concertación. Al mismo tiempo, en la Plaza de Mayo, agrupaciones piqueteras se manifestaron en demanda de asistencia. Confluyeron en la protesta la CCC, el Polo Social³³ y el Movimiento Teresa Rodríguez.³⁴ Como en ninguna otra oportunidad, quedó de manifiesto la fractura interna dentro del movimiento de desocupados: por un lado, la fracción más radicalizada refractaria a cualquier tipo de negociación con el gobierno y permeada por un discurso fuertemente revolucionario –el Movimiento Teresa Rodríguez-, y por el otro, los sectores propensos a la negociación con el gobierno independientemente de su distanciamiento de las estructuras sindicales tradicionales vinculadas al Partido Justicialista, los grupos pertenecientes a la CTA.

Miércoles 16 de enero:

En el barrio de Liniers, ahorristas y comerciantes tomaron las avenidas realizando numerosos actos de protesta contra el corralito financiero. Por la tarde, vecinos del barrio y ahorristas realizaron un cacerolazo por los mismos motivos frente a las entidades bancarias. Comenzaron a escucharse consignas que integraban la demanda de los ahorristas con la problemática de los desocupados: “*piquete y cacerola, la lucha es una sola*”.

³³ Partido de izquierda popular formado por ex integrantes disidentes del FREPASO que cogobernaba con el radicalismo para las elecciones legislativas de 2001.

³⁴ Movimiento de desocupados originado en el sur del conurbano bonaerense. El nombre propio que identifica a la agrupación corresponde a una trabajadora de la educación asesinada por la policía en una de las primeras protestas piqueteras realizada en las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, provincia de Neuquén, en abril de 1997.

En la ciudad de Buenos Aires, 200 camioneros de transporte de carga se manifestaron, compartiendo el reclamo de sus patrones de la pesificación total de las deudas en una relación uno a uno con el dólar. Ubicaron sus camiones en la céntrica Av. Entre Ríos frente al Congreso, con lo cual provocaron un importante caos en el tránsito.

La tensión en las provincias no cedía: se registraban numerosas protestas con distintas demandas y formatos. En Santa Fe, ciudad capital de la provincia del mismo nombre, un millar de productores agropecuarios, vecinos y comerciantes se manifestaron contra el corralito. Realizaron quemas de gomas y cortes de calle frente a bancos. En Catamarca, cuatro mil obreros y empleados municipales y estatales, realizaron una ruidosa batucada frente al Palacio de Gobierno en reclamo del pago del aguinaldo. En la provincia de Salta, cuatro mil personas se manifestaron con un cacerolazo frente a la casa del gobernador en reclamo de la reducción del gasto político. La cuestión de la reducción del gasto político conformó uno de los débiles intentos de legitimación del sistema político, tanto durante el gobierno de De la Rúa como del efímero gobierno de Rodríguez Saá y también del de Duhalde, a través de la propuesta de reformas políticas que no llegaron consumarse. En Tucumán, un centenar de ahorristas realizaron un cacerolazo frente a los bancos bajo el lema *"que se vayan todos, los ladrones corruptos y traidores a la patria"*. En la provincia de Corrientes, en reclamo de planes Trabajar, beneficiarios de los programas de emergencia laboral cortaron los accesos al puente interprovincial General Belgrano.

Nuevamente en La Quiaca, empleados municipales y estatales, ruralistas, docentes y estudiantes protestaron en demanda de la disminución del gasto político. La protesta terminó con violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes debido a la fatídica combinación entre la represión desmesurada y la respuesta masiva de los manifestantes con piedras y palos. El episodio concluyó con 17 personas detenidas, policías heridos y destrozos en la casa del intendente comunal.

Luego de varios cruces, en un comunicado la Corriente Clasista y Combativa indicó que *"ni Castells ni la corriente que lidera tienen que ver con la CCC"*, y remarcó que formulaba esta denuncia *"ante el reiterado uso que hace Raúl Castells de su antigua pertenencia a la CCC"*, mientras que la Coordinadora Aníbal Verón rechazó presuntas acusaciones del diputado bonaerense Luis D'Elía y del dirigente piquetero Juan Carlos Alderete de generar violencia en el conurbano.

Jueves 17 de enero:

Sin que mermara su concurrencia y nuevamente convocada por la Asociación de Abogados Laboristas (AAL), se produjo frente a Tribunales una manifestación a modo de cacerolazo cuyo principal reclamo fue la renuncia de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Si bien la convocatoria fue realizada por la AAL, participaron también de la protesta asambleas barriales, sindicatos, la CCC, grupos piqueteros, la Izquierda Unida, el Partido Obrero (PO) y la Asociación de Trabajadores del Estado. Luego de permanecer por unas horas frente a Tribunales, la multitud se dirigió al domicilio del presidente de la Corte, Julio Nazareno, para realizarle un escrache. A la demanda de la renuncia de los miembros de la Corte se sumó la demanda del *"fin del corralito"*. Luego del escrache, algunos manifestantes se dirigieron al PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral - Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) para continuar con la protesta. En la medida en que el rechazo popular a los jueces de la Corte se incrementaba, la mañana del jueves en Tribunales fue convirtiéndose en un ámbito de convergencia entre distintos actores protagonistas de la protesta con trayectoria sociales, intereses, identidades y demandas distintas.

En Rosario, unas dos mil personas se manifestaron en las calles en demanda de planes Trabajar y justicia. De esta marcha participaron una gran cantidad de vecinos autoconvocados, junto con distintos sindicatos y organizaciones piqueteras. Es destacable la gran cantidad de gendarmes que se encontraba en la zona, aunque la marcha terminó sin complicaciones.

Por primera vez, en una entrevista concedida a medios gráficos, el presidente Duhalde admitía que los depósitos no podrían ser reintegrados en la moneda original en la que habían sido realizados dado que *"la plata no está"*. Sin embargo, afirmó que garantizaría el mantenimiento del *"poder adquisitivo"* de los depósitos, sin mayores precisiones acerca de la fecha exacta de su devolución.

Mientras tanto, las pujas y presiones corporativas, principalmente entre el sector financiero y el exportador, por la distribución de los costos de la devaluación ocupaban tapas de diarios y noticieros. El gobierno, no obstante, mantenía una evidente indefinición.

Viernes 18 de enero:

Cerca de 800 dirigentes de diferentes cámaras y centros comerciales de la ciudad de Buenos Aires y GBA participaron de una marcha por el fin del corralito financiero. En el mismo momento, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, pequeños ahorristas autoconvocados realizaron escraches frente a entidades

bancarias. La reiteración cotidiana de esta práctica transformaría el paisaje de la *city* porteña en un remedo de una ciudad medieval con grandes edificios literalmente tapiados por estructuras metálicas para protegerlos de los ataques de los ahorristas.

La situación agónica de las cuentas públicas provinciales y nacionales disparó una violenta secuencia de protestas salariales. En Santiago del Estero, sede de una de las más virulentas “puebladas” de los años ‘90, conocida como el “santiagueñazo”, alrededor de 500 obreros municipales protagonizaron un enfrentamiento con policías y gendarmes en medio de una manifestación frente a la Municipalidad en la cual reclamaban el pago de sueldos atrasados. Como resultado del enfrentamiento hubo policías y manifestantes heridos y alrededor de 50 detenidos. En la provincia de Entre Ríos, luego de un cacerolazo, dos bombas molotov fueron arrojadas en la casa del gobernador de la provincia. En la ciudad de La Plata, 30 empleados del Consejo Provincial de la Familia se instalaron frente a la Casa de Gobierno en demanda por el retraso de sueldos. Asimismo, en Ensenada, localidad próxima a La Plata, 50 manifestantes cortaron las calles desde las 9 de la mañana. Hubo también, en la provincia de Buenos Aires, protestas docentes por el pago de salarios. Las más significativas se registraron en Berazategui y Quilmes. En Formosa 500 empleados de la Municipalidad marcharon hacia la sede comunal en reclamo de aportes de coparticipación para el pago de salarios. Trabajadores de la administración pública iniciaron un paro con corte de calle en reclamo del pago de sueldos atrasados en la provincia de San Juan.

Tampoco la protesta de desocupados parecía ofrecer ninguna tregua. En la provincia de Neuquén, unas tres mil personas protestaron a través de una movilización en el centro de la ciudad capital en reclamo de la libertad del titular de ATE, gremio combativo principal afectado por los procesos de reforma del Estado. En la provincia de Jujuy, se produjeron 13 cortes de ruta en reclamo por la falta de trabajo convocados todos por asociaciones de desocupados.

En reclamo de “*justicia y castigo*” por la represión de la manifestación del 20 de diciembre de 2001, se realizó en Plaza de Mayo una multitudinaria manifestación convocada por la CTA, HIJOS y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).

Sábado 19 de enero:

En una imprevista reunión, el presidente Duhalde afirmó que no se podrían devolver los depósitos en dólares tal y como había sido prometido el día de su juramento frente a la Asamblea Legislativa. Explicando el tema, el Presidente aclaró que “*ni el país ni los bancos tienen los dólares, y no los tendrán por mucho, mucho*”

tiempo". Sin embargo, el Presidente aseguró que se mantendría el poder adquisitivo de los ahorros.

Durante toda la jornada se sucedieron reuniones tanto en el Ministerio de Economía como en la residencia de Olivos. Por su parte el ministro de Economía, Remes Lenicov, declaró que el país avanzaba a una mayor pesificación de la economía, y que se estaban analizando las estrategias para garantizar el poder adquisitivo de los depósitos realizados.

Domingo 20 de enero:

Más de mil vecinos de distintos barrios que participaron de varios cacerolazos se reunieron por segundo domingo consecutivo en el Parque Centenario para coordinar acciones de protesta y fijar horarios de boicots a las empresas de servicios privatizados. Era la primera reunión masiva de la Asamblea Interbarrial que nucleaba a los delegados de las numerosas asambleas vecinales surgidas en el vértigo de la crisis. Había pocos carteles entre los asambleístas: uno de ellos mostraba el dibujo de una rata fumando un habano con la frase *"Fuera la banda de Nazareno"*, aludiendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Julio Nazareno, quien más de una vez fue fotografiado por los reporteros gráficos fumando habanos. Los demás carteles no tenían leyendas, sólo anunciaban el nombre de los barrios que participaban de la reunión. Hubo delegaciones de Colegiales, Chacarita, Villa Crespo, San Telmo y el Cid Campeador, entre otras.

En la asamblea, que duró tres horas sin que decayera la cantidad de participantes, se aprobó: 1) hacer un cacerolazo nacional el viernes 25, a las 20; 2) sumarse a la protesta contra la Corte Suprema de Justicia, que comenzó a realizarse todos los jueves en las escalinatas del Palacio de Justicia; 3) descolgar los teléfonos el miércoles 23, entre las 12 y las 14, y convocar a un apagón para el mismo día a las 22; 4) iniciar acciones de repudio contra aquellos medios de comunicación que *"no reflejen lo que ocurre en la calle"*. Se decidió, por ejemplo, protestar contra el noticiero de Canal 13, el de mayor audiencia de la televisión argentina, con un cacerolazo frente al canal, también el miércoles a las 20; 5) "abrazar" al edificio del Congreso de la Nación como símbolo de la defensa de las instituciones republicanas el martes 22 al mediodía.

Al final de la reunión, se acordó realizar una nueva asamblea el domingo 27. Durante la votación de esas acciones de protesta hubo diferencias y tironeos entre los asambleístas. Liliana Mondino, del barrio de Colegiales, dijo: *"Estamos los que queremos decidir medidas concretas y están los que buscan que la asamblea apruebe medidas más abstractas, como convocar a una asamblea general constituyente. Yo prefiero que aquí haya poca política y que se decida un plan*

práctico de acciones. El tema de las consignas es denso, pero mi impresión es que los vecinos que nos queremos ocupar de la cosa pública no nos vamos a cansar fácilmente." Gerardo Pereyro, del barrio de Caballito, consideró, por su parte: *"Hay poca práctica y muchas indecisiones."* Durante la asamblea, además, se puntualizó el carácter no delegativo de las asambleas de base: *"La regla es que el Parque sirva para coordinar y las asambleas barriales actúen como soberanas."* Además de las acciones de protesta votadas, se eligieron también algunas consignas, de las cuales la primera se dirigía a la totalidad de la clase política: *"Que se vayan todos."* La breve expresión surgida de la asamblea se transformaría en el grito de combate de todos los reclamos sucesivos sin distinción de sectores sociales o procedencias políticas. Las demás consignas se centraron en la represión (*"Juicio y castigo a todos los asesinos"*), el endeudamiento externo (*"No al pago de la deuda"*) y las referidas a la Corte Suprema y el corralito financiero. Las restricciones bancarias fueron el último de los puntos que se trató y hubo críticas expresas *"a quienes creen que las cacerolas suenan solamente en contra de los bancos"*, en clara alusión a la responsabilidad de la dirigencia política en el descalabro general, por un lado, y como advertencia acerca de que las convicciones que impulsaban la movilización trascendían el interés por la recuperación de los ahorros, por otro.

Frente a la quinta presidencial de Olivos, unas cien personas realizaron un cacerolazo sobre la avenida Maipú y organizaron un debate sobre cómo salir de la crisis. *"Se propusieron alternativas al modelo neoliberal"*, comentó un joven participante, *"la intención es elevarlas al presidente Duhalde"*. La protesta finalizó sin incidentes y, antes de retirarse, los manifestantes acordaron volver el domingo siguiente.

Lunes 21 de enero:

Dos centenares de manifestantes del barrio porteño de Mataderos se reunieron, al mediodía, en la esquina de Av. Juan B. Alberdi y Cafayate para protestar *"contra los bancos de capital extranjero y contra la dirigencia política"*. Formaron un "corralito humano" y realizaron un cacerolazo contra el sistema financiero que impide la extracción de los depósitos bancarios. Los manifestantes "acorralaron" la sucursal del Banco Francés ubicada en la esquina de Alberdi y Pilar, al tiempo que canturreaban, con implacable rima consonante: *"Chorros, ladrones, devuelvan los millones."* Portaban banderas argentinas, alguna que otra de color verde y negro, que identifica a los hinchas del equipo de fútbol Nueva Chicago, dominante en el barrio, y un cartel con leyendas en castellano e inglés, para que pudiera ser leídos por televidentes del extranjero: *"They are stealing our future (Están robando nuestro futuro)."* Raúl Ríos, vecino del barrio, dijo: *"ésta es una*

convocatoria espontánea de vecinos y comerciantes de la zona que estamos cansados de que nos metan las manos en los bolsillos". Luego, el grupo se dirigió hasta una sucursal del Banco Río, al ritmo metálico de cacerolas y sartenes, y desde allí siguieron hasta el Banco Itaú y las sucursales de los bancos Bansud y Galicia. El recorrido finalizó frente al Banco Nación, a dos cuadras del inicio de la marcha, con la entonación del Himno Nacional. Los manifestantes prometieron un nuevo cacerolazo para el jueves 24 en repudio al FMI y a la dirigencia política argentina. En tanto, uno de los delegados de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de la ciudad de Buenos Aires, Alfonso Villalobos, informó que dicha agrupación, compuesta por vecinos de los barrios de Villa Crespo, Chacarita, Caballito, San Telmo, Colegiales, Parque Lezama, Parque Centenario y Belgrano, entre otros, había convocado a un *"cacerolazo nacional"* para el viernes 25.

En la provincia de Buenos Aires, la Cooperativa Padre Mujica inició un corte de ruta en Acceso Oeste y Vergara para reclamar la construcción de viviendas en la zona de Hurlingham. Por otro lado, más de un millar de manifestantes agrupados en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón cortaron durante cinco horas el tránsito en Puente Pueyrredón, que conecta la ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense, e impidieron el acceso normal a la ciudad para exigir al gobierno nacional *"medidas urgentes para paliar la crisis social"*. Pedían planes de empleo para los jefes de familia desocupados y planes de alimentación. Uno de los dirigentes del MTD, Juan Cruz, dijo a la agencia de noticias Télam que el corte del puente era *"el anuncio para que el gobierno tome en cuenta el plan de lucha que vamos a lanzar el miércoles [23]"*. Dicho plan incluía todo el arsenal de formas de protesta características de la amplia movilización social de aquellos días: cortes de calles y rutas, cacerolazos y escraches. Por su parte, los desocupados de La Matanza -enrolados en la FTV-CTA y la CCC- decidieron que volverían a marchar a Plaza de Mayo, como ocurrió en 2001. Los manifestantes decidieron partir el domingo 27 por la noche desde el conurbano bonaerense, precisamente desde la ruta 3, donde los desocupados de La Matanza realizan habitualmente sus piquetes, para llegar en la tarde del lunes a Plaza de Mayo. Además, los líderes piqueteros Luis D'Elía (FTV-CTA) y Juan Carlos Alderete (CCC) reconocieron la intención y la posibilidad de acercar posiciones con otros grupos de manifestantes, como los caceroleros, en obvia alusión a los sectores urbanos de la ciudad de Buenos Aires. *"Trabajamos convencidos de que en algún punto tenemos que converger, porque el problema de los piqueteros es el mismo que el nuestro, y aún mucho más grave"*, dijo Eduardo Sutzky, vecino del barrio de Liniers. Los piqueteros de la FTV y la CCC buscaron así sumar apoyos para su protesta en momentos en que se habían producido conflictos internos en la Mesa de Conducción

Nacional de Desocupados, de la que participaban también los piqueteros del Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez y el Movimiento Aníbal Verón. Las diferencias entre esas agrupaciones habían provocado la división en dos grupos: FTV y CCC por un lado, y el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez y el Movimiento Aníbal Verón –que conformaban el Bloque Piquetero- por otro. Cada sector había marchado y reclamado en forma separada y en esas últimas semanas se habían acusado mutuamente. A ello se sumó que la administración nacional y la provincial se habían retrasado en el pago de los planes de empleo y los beneficiarios a quienes se les habían vencido sus programas en diciembre se habían quedado sin dinero. Además, todavía no estaba claro si se concretaría la promesa de destinar un millón de pesos a subsidios para jefes de hogar sin trabajo o sólo habría 300 mil para todo el país. Los organizadores de la FTV y la CCC esperaban que para la movilización los acompañaran los estatales de ATE y los docentes que, en la provincia de Buenos Aires, se vieron afectados por un nuevo ajuste, producto de un proyecto de reforma educativa para modificar el régimen de licencias docentes junto con otros cambios que repercutirían en el ingreso de los maestros.

En el sector sindical, dirigentes de la CGT se reunieron con el presidente Duhalde y le pidieron la apertura del corralito, la implementación de un seguro de desempleo con capacitación laboral, la restitución del 13 por ciento del salario a los jubilados y empleados estatales y la profundización de la *“emergencia alimentaria y sanitaria”* para atender a los más desprotegidos. Sin embargo, el reclamo principal de los “gordos” fue el de la “desdolarización” de la economía argentina, para que *“salga adelante”*. En la reunión participó el secretario general de la CGT, Rodolfo Daer, a quien secundaron Carlos West Ocampo, Armando Cavalieri, José Luis Lingieri, Raimundo Hermoso, Oscar Lescano, José Pedraza y Diógenes Salazar. Por otra parte, los dirigentes de los gremios que nuclean a los maestros anticiparon que podría retrasarse el inicio de clases luego que el gobierno nacional anunciara el fin del Fondo de Incentivo Docente.³⁵ El secretario de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, dijo ese día sobre el gobierno: *“Está provocando que no empiecen las clases, porque quitar el incentivo es afectar nuevamente el salario de un sector que está totalmente rezagado como el docente.”* Por su lado, la titular de la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) agregó: *“Estamos dispuestos a dialogar sobre las formas de pago del Fondo de Incentivo Docente, ya sea en bonos, letras de tesorería o cualquier otro sistema, pero no vamos a iniciar conversaciones sobre la base del no pago. No*

³⁵ Dicho incentivo fue la solución que, en 1999, el entonces flamante gobierno de la Alianza encontró para desarticular la protesta de los docentes, quienes, desde 1997, estaban en huelga de hambre instalados en una carpa frente al edificio del Congreso de la Nación en reclamo de un aumento de salario.

descartamos ninguna medida de fuerza pero queremos que se cumpla con lo que dice la ley. Nosotros recibimos el pago del incentivo por dos años y tienen que abonarnos los restantes tres."

En ocho provincias hubo protestas contra el sistema financiero y la falta de trabajo. En Santa Fe, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios marchó en señal de repudio contra el corralito y para exigir la pesificación de sus deudas. Los comerciantes llegaron a la Casa de Gobierno y entregaron un documento destinado al gobernador Carlos Reutemann. La movilización dedicó fuertes insultos a las sedes de las sucursales del Lloyds Bank y Citibank, y a la sucursal de Telefónica Argentina, todas custodiadas por la policía. La Casa de Gobierno del Chaco fue atacada a balazos, al parecer por manifestantes desocupados, aunque ninguna de las organizaciones que los agrupan admitió haber usado armas de fuego. Doscientos desocupados se concentraron frente a la sede del gobierno para exigir un fuerte control social sobre la distribución de alimentos y subsidios de empleo. Se produjo un enfrentamiento con la policía y hubo disparos que dieron contra los cristales de la Casa de Gobierno. La policía detuvo a un sospechoso, que no estaba armado.

En Jujuy, los desocupados de la Corriente Clasista y Combativa levantaron en parte los cortes de ruta después de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional por la entrega de 5.200 puestos de trabajo y 500 subsidios para madres solteras. Los dirigentes de la CCC se reunieron en el sur de la capital jujeña, donde estaban cortadas las rutas nacionales N° 9 y N° 66, y la provincial N° 1, desde donde se comunicaron con el ministro de Trabajo de la Nación, Alfredo Atanasof. Sin embargo, algunas rutas seguían cortadas en el interior de la provincia. Por otra parte, los 17 manifestantes que habían sido detenidos tras los incidentes del jueves último en La Quiaca fueron trasladados a la capital provincial y quedaron alojados allí en distintas unidades.

En Misiones, un grupo de desocupados beneficiarios del Programa de Solidaridad cortaron la Ruta Nacional N° 12, a la altura de El Dorado, a 100 kilómetros de las Cataratas del Iguazú. Esa ruta es la única vía de acceso a dicho complejo turístico y es la arteria que utilizan los transportes de carga para llegar a Brasil. Los manifestantes pidieron, también, la distribución de bolsas de alimentos para atenuar el drama de dos mil familias beneficiarias del programa Nacional de Solidaridad vigente desde marzo de 2001. En Tucumán, los comerciantes de Famaillá, a 40 kilómetros de la ciudad capital, cerraron los negocios para participar de una marcha de protesta por la grave crisis económica que atraviesan. Protestaron, asimismo, contra la gestión del intendente de la ciudad, Enrique Orellana. Hubo una refriega entre manifestantes y algunos empleados municipales

que, palos en mano, buscaron obstaculizar la marcha. En la madrugada, Orellana había sido herido levemente en un episodio bastante confuso en el que, al parecer, también resultó lastimada una mujer que repartía panfletos en contra de su gestión de gobierno. Otra versión había asegurado que el intendente compartía algunas copas con amigos cuando una discusión derivó en un ataque al funcionario.

En Catamarca, organizaciones de desocupados de la localidad de Belén, a 300 kilómetros de la capital provincial, se concentraron frente a la Municipalidad para reclamar por puestos de trabajo. Miembros de los grupos “Los Sin Techo” y “La Voz del Pueblo” acusaron a las autoridades de realizar un *“manejo político”* de esos puestos de trabajo. Guillermo Valdez Franco, dirigente de “La Voz...” denunció: *“Se los reparten entre radicales y peronistas y no tienen en cuenta a las familias que los necesitan.”* En San Juan, los estatales pararon en sus lugares de trabajo y protestaron cortando calles en reclamo de salarios atrasados, que no cobraban desde noviembre.

En la provincia de Entre Ríos, un grupo de 700 personas saqueó el depósito de un autoservicio que permanecía cerrado desde hace un año en Bovril, un pueblo que dista 150 kilómetros de la capital provincial, Paraná. Los manifestantes asaltaron el depósito mientras un camión del Ministerio de Acción Social provincial llegaba a Bovril para repartir 600 cajas de alimentos, bajo la supervisión de miembros de Cáritas. La mercadería robada estaba bajo custodia judicial a raíz de un juicio sucesorio. Desde el gobierno provincial hubo preocupación debido a que la mercadería saqueada, en su mayoría enlatada, estaba vencida y podría afectar la salud de quienes la consumieran. Por otro lado, las entidades de la producción entrerrianas protestaron frente a los bancos privados de cinco ciudades de la provincia por la *“situación de desesperanza y quiebra en la que nos encontramos luego de décadas de aplicación de políticas contrarias al interés nacional”*, según expresaron miembros de ese sector.

En la provincia de Neuquén, la Cámara de Apelaciones de la Justicia provincial debía decidir si atendía los pedidos de excarcelación de los cuatro dirigentes estatales detenidos y de absolución de cargos de otros siete que todavía no se habían presentado. Los once acusados enfrentaron cargos de coacción agravada contra tres funcionarios de la obra social neuquina -todos miembros de la CTA- que fueron lesionados en una protesta sindical. Los cuatro dirigentes presos eran Julio Durval Fuentes, secretario general de la CTA local; Horacio Fernández, vocal gremial del Instituto de Seguridad Social; Miguel Peralta, trabajador sanitario; y la dirigente Hilda Locatti. Sus compañeros ya habían realizado otras manifestaciones para reclamar su libertad y ese día se llevó a cabo un nuevo acto al costado de la Casa de Gobierno provincial que contó con la participación de la

dirigente de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien sostuvo: *“Venimos a pedir la libertad de los compañeros de Neuquén que injustamente están presos. Venimos a pedir por los presos que tenemos en nuestro país, para que se desprocesen a los más de 2.800 trabajadores por cortes de ruta, por pedir trabajo, por pedir que les paguen, por pedir un sueldo digno, por decir no al hambre, no a la desocupación. Venimos a pedir justicia para todos y que vayan a la cárcel todos los que se lo merecen.”*

Miembros de la comisión coordinadora del Diálogo Social Argentino aseguraron que el saldo de la primera semana de encuentros había sido *“positivo”*. Afirmaron que los diferentes sectores se mostraron dispuestos a *“recuperar la paz social y un profundo deseo de colaboración y participación”* y que, pese a las diferencias existentes entre los participantes a los encuentros, éstas no se consideraban *“insalvables”*. Para esa semana se intensificarían las reuniones, continuarían funcionando las mesas de trabajo y se iniciaría una ronda de contactos con embajadores y representantes de organismos internacionales como los de la Unión Europea, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, y los representantes locales del FMI y el Banco Mundial, que la semana anterior habían faltado al encuentro. La idea de los obispos y del Gobierno era tratar de alcanzar un primer borrador de un *“documento de entendimiento nacional”* que fijara las cuestiones básicas sobre las que producir acuerdos.

Martes 22 de enero:

Al amanecer, hubo vecinos que cortaron Av. Santa Fe a la altura de las avenidas Pueyrredón y Callao, dos cruces céntricos y sumamente transitados de la ciudad, en un nuevo repudio al corralito que inmovilizaba los ahorros de la ciudadanía.

Trabajadores estatales del Hospital Posadas del partido bonaerense de Morón se movilizaron hasta el Ministerio de Salud de la Nación para concentrarse, finalmente, en la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Los manifestantes, sin embargo, pudieron llegar sólo hasta la Pirámide de la República, ubicada en el centro de la plaza, porque la policía instaló allí un vallado que les impidió avanzar hasta el frente de la Casa Rosada. La columna, de no más de 500 personas, obligó a la policía a cortar el tránsito sobre la calle Hipólito Yrigoyen, que bordea la plaza, a la altura del Cabildo. Los marchantes exigieron la *“normalización inmediata de la conducción del organismo”*, que estaba intervenido, protestaron contra *“el desmantelamiento del hospital”* y reclamaron el cobro de sus salarios sin recorte, la restitución del 13 por ciento del sueldo descontado desde hacía meses a los trabajadores estatales y la reactivación y puesta en marcha de la farmacia del

hospital. Hubo un abrazo simbólico al edificio del Congreso de la Nación en reclamo de la devolución de los depósitos, un “llaverazo”³⁶ frente al Palacio de Justicia y una marcha de empleados de la salud. Como se mencionó anteriormente, estas acciones de protesta habían sido convocadas por las asambleas barriales y los participantes de las mismas fueron vecinos de los distintos barrios donde funcionan las asambleas. Mientras protestaban, vecinos de Almagro pidieron *“la nacionalización de la banca, de las empresas privatizadas y las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones”*. Reclamaron también *“el no pago de la deuda externa, el cambio de los jueces de la Corte Suprema y juicio y castigo para los responsables de la represión en Plaza de Mayo”* ocurrida el 20 de diciembre. En tanto, llegaron hasta el Palacio de Justicia deudores hipotecarios no bancarizados para exigir la pesificación de sus deudas teniendo en cuenta la paridad un dólar igual a un peso estipulada por el plan de Convertibilidad, vigente hasta los últimos días de 2001. Los manifestantes no protestaron con cacerolas, sino con llaves a modo de improvisados sonajeros.

En la ciudad de La Plata, más de cien ahorristas se concentraron con ollas, sartenes, espumaderas y demás objetos culinarios potencialmente ruidosos bajo el sol radiante del mediodía frente a los bancos del centro de la ciudad y repudiaron las medidas que restringieron los movimientos bancarios de los ahorristas. A pocas cuadras de allí, 150 empleados del Ministerio de Salud bonaerense cortaron el tránsito frente a la Casa de Gobierno provincial y exigieron el pago de los sueldos adeudados. También protestaron con cacerolazos frente a distintos hospitales los médicos agrupados en la Coordinadora Interhospitalaria del Conurbano de la provincia de Buenos Aires, por la carencia de insumos básicos como jeringas y gasas.

En Jujuy, un grupo de desocupados demandó nuevas fuentes de trabajo y cortó dos rutas: la Nacional N° 34, a la altura del Puente San Pedro, y la Provincial N° 1, cerca de El Rodeito. En San Juan, trabajadores de la salud se sumaron al paro que realizaron los empleados estatales por salarios adeudados cortando calles frente a distintas reparticiones públicas. En el microcentro de la ciudad de Rosario (Santa Fe), vecinos instalaron una cacerola pública de un metro de alto sostenida por un trípode del que pendía una cadena con un gran plato metálico que podía golpearse con un garrote. La intención de quienes la colocaron era provocar la catarsis de los transeúntes rosarinos. Hasta ese momento, la idea había tenido buena acogida a juzgar por la cantidad de abollones que mostraba la cacerola. En la ciudad capital de esa provincia, Santa Fe, se

³⁶ Forma de protesta consistente en hacer sonar un manojo de llaves.

movilizaron desde el Ministerio de Agricultura hasta la Casa de Gobierno provincial un puñado de productores agropecuarios. Hubo algunos bocinazos de autos y camionetas; el gobernador Carlos Reutemann se comprometió a conformar una mesa de concertación con todos los sectores productivos de esa provincia.

En Salta, unas 400 personas cortaron el acceso a la ciudad de Pichanal para pedir puestos de trabajo. A la noche permanecían aún en el lugar. En Neuquén, desocupados cortaron por segundo día consecutivo la Ruta Provincial N° 7 en demanda de comida, empleo y subsidios para los trabajadores en esa condición. En La Rioja, los trabajadores de la salud protestaron por la falta de insumos en los hospitales, tiraron piedras al edificio de la gobernación y huevos frente a la casa del gobernador Ángel Maza, cuyo padrino político es el ex presidente Carlos Menem.

En Bariloche, provincia de Río Negro, unos 60 beneficiarios del Programa de Empleo Rionegrino (PER) provocaron disturbios y quemaron muebles en la Municipalidad debido a que el gobierno provincial les adeudaba parte de los 150 pesos correspondientes a diciembre. Los manifestantes se concentraron desde temprano frente al edificio municipal, ubicado en el Centro Cívico (espacio obligado de paseo de los cientos de turistas nacionales y extranjeros que visitan esa ciudad patagónica) para reclamar por la deuda, pero alrededor de las 16 comenzaron los disturbios: rompieron muebles de la sala de prensa de la Municipalidad, encendieron fuego y arrojaron sillas contra las ventanas, destruyeron los vidrios de la planta baja y el primer piso del edificio. El personal abandonó el lugar por las ventanas traseras, mientras la policía intervenía con su brigada antimotines. A las 17, los manifestantes se entrevistaron con el intendente Atilio Feudal para exigirle el pago adeudado aunque, en rigor, era responsabilidad de la administración provincial, a cargo del gobernador Pablo Verani (UCR-Alianza). El conflicto se desató cuando Feudal les transmitió lo que le había informado el vicegobernador Bautista Mendióroz: el pago llegaría recién el sábado 26. La noticia generó una fuerte discusión en la que Feudal resultó golpeado y debió escapar hacia los pisos superiores de la Municipalidad. Allí, un grupo de manifestantes comenzó a romper los muebles. Después, salieron a la calle, arrojaron piedras contra las ventanas del edificio y encendieron una gran pila de neumáticos que cubrió de un espeso y negro humo el microcentro de la ciudad y puso en peligro las instalaciones del Museo de la Patagonia, ubicado en el mismo Centro Cívico. La intervención del juez Héctor Leguizamón Pondal, quien medió entre las partes, logró frenar los destrozos.

En la localidad de Bell Ville, provincia de Córdoba, unas cuatro mil personas se movilizaron pacíficamente en repudio al sistema financiero y contra el corralito.

La marcha fue encabezada por el Centro Comercial e Industrial de Bell Ville y participaron también desocupados y empleados municipales. Al tiempo que ocurría la marcha, la mayoría de los comercios de la ciudad cerraron sus puertas en señal de protesta.

En el plano institucional, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Seguridad de la Nación, Juan José Álvarez, se reunieron con los titulares de la Policía Federal (Roberto Giacomino), de la Gendarmería (Hugo Miranda) y de la Prefectura Naval (Juan José Beltritti). El eje de la convocatoria fue la preocupación de la administración Duhalde frente a un posible recrudecimiento de la protesta social y la violencia. De allí la importancia de la reunión presidida por Capitanich en la sede gubernamental. Una alta fuente del gobierno les comentó a los periodistas que cubrieron el encuentro que la protesta social *“tiene un piso alto y riesgoso”*. Durante la reunión, se analizó, entre otros puntos, la situación de cada una de las fuerzas, y los tres jefes coincidieron en el reclamo de la renovación de equipamientos y uniformes. Giacomino pidió contar con más refuerzos y armas básicas para operar, y comentó que el helicóptero que la Policía Federal utilizaba para el traslado de heridos hasta el Hospital Churruca estaba fuera de servicio. Beltritti informó que la Prefectura Naval gastaba buena parte de su presupuesto en reflotar barcos hundidos y pidió que se produjeran cambios en la ley que le impide a su fuerza ocuparse del asunto cuando las embarcaciones aún no se han hundido. Finalmente, Miranda explicó que, con la devaluación, hubo cambios en la frontera de la Argentina con Bolivia y Paraguay: ahora era en esos países vecinos donde se habían reforzado los controles por el contrabando que operaba desde la Argentina.

Miércoles 23 de enero:

Tras seis horas de reunión con el presidente Duhalde, los gobernadores justicialistas acordaron apoyar el recorte presupuestario estimado para 2002, requisito indispensable para avanzar en las gestiones de un acuerdo financiero con el FMI. El recorte afectaría a los estatales, puesto que se consideraba la posibilidad de no pagar los aguinaldos para reducir costos en la administración pública. Aunque el apoyo de los gobernadores demostró un compromiso férreo con la propuesta presidencial, la preocupación por el posible desmadre de la protesta social ante un nuevo ajuste consternó a los mandatarios. Las estimaciones del gobierno estipulaban una reducción de ocho mil millones de dólares en el presupuesto nacional para 2002, sin afectar servicios básicos como salud y educación, además de los 1.200 millones de dólares que se preveían destinar a los planes sociales de asistencia en la crisis.

Comenzó a regir la flexibilización del corralito financiero. Hasta cinco mil dólares de las cuentas en los bancos podrían ser convertidos a pesos al cambio de 1,40, lo que equivaldría a siete mil pesos. Sin embargo, Duhalde se mostró molesto y preocupado por las dificultades de los bancos en llevar a la práctica tal flexibilización dado que las entidades financieras alegaban falta de tiempo para adaptar sus sistemas informáticos. El presidente remarcó que aquellos bancos que no aplicaran eficientemente las nuevas medidas serían sancionados por la legislación entonces vigente.

Desde el mismo momento en que se manifestó favorable a una devaluación del peso, el Presidente y su equipo económico fueron blanco del lobby de diferentes sectores económicos –principalmente el industrial y el financiero- que esperaban eludir las consecuencias de la reconversión del tipo de cambio. Se realizó una reunión entre titulares de los bancos Citibank, BankBoston, Río y Francés, y la cúpula de la UIA, quienes se unieron en un lobby común para solicitar la pesificación de las deudas y de depósitos uno a uno y la entrega a los ahorristas de bonos por 40 centavos por cada dólar. A pesar de las especificaciones³⁷ sobre esta modalidad, el Presidente y su equipo económico no quedaron convencidos acerca de la idea de emitir un bono, dado que podría perder valor rápidamente, lo cual volvería a desatar la furia de los ahorristas.

Mientras se desarrollaban las negociaciones, el grupo comenzó a dividirse. Los industriales propusieron cobrar retenciones a las exportaciones agropecuarias, notablemente favorecidas por la devaluación, para cancelar a los ahorristas en menor tiempo los 40 centavos; pero la sugerencia fue rechazada por Duhalde sobre la base de un compromiso asumido con las entidades ruralistas de no implementar retenciones.

Hacia la tarde, el ministro de la Producción, José Ignacio De Mendiguren, ex titular de la UIA, estuvo en la sede de dicha entidad reunido con los industriales. Allí decidieron negociar sin considerar los intereses de los bancos y proponerle al gobierno mantener las deudas uno a uno y que los bancos devolvieran los depósitos en pesos a una paridad de 1,40. Los industriales querían que el gobierno pesificara los préstamos que habían cambiado por títulos públicos en la fase uno del canje a una paridad de 1,40 y que con esos activos los bancos respondieran a los ahorristas. Por su parte, los banqueros estimaban que, si en la negociación de la deuda recibían pesos a 1,40 más un interés del siete por ciento y un índice de indexación adecuado, su situación resultaría ventajosa. Pero, de todos

modos, no querían resignarse a cobrar deudas en pesos uno a uno y pagar depósitos a 1,40. En este punto, si el Presidente apoyaba el consejo de su ministro de la Producción y el resto de los industriales, se pondría en contra a los banqueros y a los ahorristas. Por otro lado, sería acusado de salvar a las grandes empresas en detrimento de los ahorristas. Los mayores deudores del sistema financiero eran Pérez Companc, que adeudaba 340 millones de dólares, y Repsol, que debía 310 millones; ambas petroleras exportaban y recibían ganancias extraordinarias en dólares por su producción. Pesificarle las deudas era licuarles su pasivo sin justificación alguna. Más allá de las reiteradas manifestaciones de Duhalde a favor de una alianza con los sectores productivos, la capacidad de presión de los bancos, en relación con la frustración de los ahorristas, mantenía la puja soterrada por la distribución de los costos de la devaluación.

Por la mañana, los vecinos de Palermo, enfurecidos y autoconvocados, llevaron adelante un cacerolazo que comenzó en la esquina de las avenidas Scalabrini Ortiz y Santa Fe y continuó con una "clausura" a varios bancos de la zona: en las puertas de los bancos pegaron carteles con la consigna "*clausurado por robar*". A la protesta se sumaron quienes habían hecho largas colas en las instituciones bancarias y no habían podido retirar el dinero prometido por las nuevas medidas oficiales. Los bancos, argumentando que no habían tenido tiempo para adaptar sus sistemas informáticos a los nuevos límites del corralito, impidieron a sus clientes realizar buena parte de las operaciones que estaban autorizadas.

En el barrio porteño de Caballito, los vecinos también se manifestaron a través de un cacerolazo. Además, ocuparon el Banco Nación y desde allí reclamaron sus ahorros. Luego, abandonaron el lugar pacíficamente para dirigirse hacia la Banca Nazionale del Lavoro. La furia contra los bancos se reavivó debido a las dificultades que encontraron muchos vecinos para retirar sus ahorros en dólares con el nuevo cambio a 1,40. En Palermo y en Caballito funcionaban dos de las asambleas de vecinos autoconvocados más importantes donde era tratado el tema de los ahorros atrapados en el corralito junto con la discusión de otras formas de acción solidaria tales como: compras comunitarias, formas de control sobre los precios, acciones contra las grandes empresas de servicios, como apagones o descuelgue de teléfonos durante ciertas horas, etc. También allí se discutían proyectos políticos y se coordinaban acciones de protesta.

³⁷ El bono pagaría 20 por ciento de capital anualmente más un índice de indexación y un interés. Con estas medidas esperaban quebrar la probable resistencia de Duhalde a la emisión de los bonos.

Varios centenares de personas se juntaron frente a Tribunales y marcharon hacia Plaza de Mayo exigiendo el “uno a uno”; se trataba básicamente de deudores extrabancarios o que no fueron incluidos en la ley de pesificación de las deudas hipotecarias y cuyos préstamos se multiplicaron o quedaron a criterio del prestador, con el peligro de perder las viviendas que adquirieron. Una delegación de estos manifestantes fue recibida en la Casa de Gobierno. El vocero presidencial, Eduardo Amadeo, declaró que el gobierno estaba *“escuchando el mensaje”* de los cacerolazos, pero estaba tratando de *“desarmar la bomba de tiempo que con perversidad infinita dejó Domingo Cavallo con su locura”*.

En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, hubo una marcha en la que participaron comerciantes, vecinos, obreros metalúrgicos y autoridades de la ciudad. Se trataba de caminar siete kilómetros hasta la autopista Aramburu, que vincula esta ciudad con la de Buenos Aires, para manifestarse “en contra de la usura de los bancos y el corralito financiero”, por lo que las siete sucursales bancarias del lugar decidieron cerrar sus puertas. En esta ciudad, que en algún momento constituyó un importante polo metalúrgico, se registraba un índice del 30 por ciento de desocupación al tiempo que el desorden producido en los bancos había hecho que la comuna sólo pudiera recaudar el 15 por ciento de los impuestos respecto del mismo período del año anterior.

La lentitud para poner en marcha los planes sociales hizo recrudecer la protesta de los piqueteros. Cerca de mil desocupados de la Coordinadora Aníbal Verón cortaron la rotonda de Alpargatas, en la localidad bonaerense de Florencio Varela, para que el presidente Duhalde cumpliera con la promesa de Rodríguez Saá de entregar *“un millón de planes Trabajar”*. El dirigente de este sector de los piqueteros, Juan Cruz Dafunccio, indicó que también estaban allí *“en solidaridad con la clase media y los pequeños ahorristas, porque si bien no tenemos para comer, ni cuentas bancarias, consideramos que es una injusticia, un robo lo que el gobierno hizo con el corralito”* y no descartó que los piqueteros se sumaran al cacerolazo nacional convocado para ese viernes.

También se produjeron dos cortes de ruta en reclamo de la renovación de los planes Trabajar por parte de los integrantes del Movimiento de Barrios en Pie y de la CTA: uno de los cortes se produjo en Puente La Noria, acceso sur a la ciudad de Buenos Aires y el otro se constituyó en la intersección de la Ruta Nacional N° 3 y las vías en Isidro Casanova, en el oeste del Gran Buenos Aires.

La CCC y el MIJP (Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados) realizaron un corte de ruta en la localidad de Billingshurst y otro en Tigre, provincia de Buenos Aires en reclamo de la excarcelación de

Emilio Alfí y Raúl Castells, referentes del movimiento de desocupados y de jubilados, respectivamente, además de los tres mil presos encarcelados como consecuencia de su participación en distintas protestas sociales. También se produjeron cortes de ruta en Mar del Plata, La Plata (Buenos Aires) y Allen (Río Negro). En Esteban Echeverría, sur del GBA, los desocupados del Polo Obrero cortaron Av. Santamaría y calle 500 en demanda de planes de asistencia social. El panorama se completó con cortes de ruta en las provincias de San Juan y Catamarca, mientras que en Jujuy se produjeron movilizaciones de comerciantes y profesionales, y cortes de ruta por parte de desocupados.

En el barrio porteño de Parque Lezama, se desarrolló un cacerolazo a los bancos de la zona y un escrache en las casas de Hugo Moyano, líder de la CGT disidente, y Héctor Lombardo, ex ministro de Salud, ambas ubicadas en la zona. Durante el transcurso del cacerolazo, convocado por la asamblea vecinal que funciona en el barrio, se incorporó un grupo de hombres que amenazaron a un fotógrafo, golpearon a algunos vecinos y rompieron la cámara de un periodista de un canal de cable. El objetivo de los matones era disuadir a los participantes de la protesta que insistían con la consigna: *“¿Dónde está, que no se ve, la famosa CGT?”* Los sucesos desataron el enfrentamiento entre el grupo violento y los policías, quienes creyeron identificarlos como *“los camioneros”*, gremio que lidera Moyano.

El cacerolazo trascendió las fronteras nacionales: en Berlín, frente a la embajada argentina en Alemania, se produjo un cacerolazo en solidaridad con la protesta argentina. La marcha fue convocada por las asociaciones de refugiados latinoamericanos, entre ellas, el grupo de solidaridad con los presos políticos en Chile y el Centro de Investigaciones y Documentación sobre América Latina. Los organizadores reclamaron *“el cese del pago de la deuda externa, de la confiscación de los millones robados y de la política represiva”*.

Por la noche se discutió en el Senado un proyecto solicitado por el FMI de modificación de la ley de quiebras vigente, para dar amparo a las empresas deudoras del sistema financiero. También se planteó extender la pesificación uno a uno a todos los créditos hipotecarios de hasta cien mil dólares que no hubieran sido otorgados por bancos. Mientras se debatía en el Congreso, en la calle se realizó un *“llaverazo”* motorizado por los damnificados -que representan cerca de tres millones de personas- con las deudas contraídas fuera del sistema bancario, es decir, que no se beneficiaban con la pesificación uno a uno, lo cual, según sostenían, podría significar la pérdida de sus casas. Junto al sonar de las llaves se

sumaron también quienes sacudían palas y cucharas de albañil y aducían que *“con esto hicimos nuestras casas”*.

El FMI, tras las críticas internacionales a las recetas implementadas en la Argentina por más de diez años, atribuyó la crisis a *“problemas domésticos”* antes que externos y reafirmó que se debería presentar un plan *“sustentable”* para que se destrabaran los desembolsos ya acordados. Los comentarios proferidos por Horst Köhler, director gerente del FMI, acerca de que *“no hay éxito sin sufrimiento”*, fueron repudiados unánimemente por la dirigencia local y buena parte de la internacional. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseveró que *“los argentinos no necesitamos que nadie nos diga a nosotros cómo tenemos que sufrir”*. Según Rodrigo Rato, ministro de Economía español, *“a la población argentina ya se le pidió mucho esfuerzo y desgraciadamente no se obtuvieron resultados positivos”*.

Jueves 24 de enero:

Cerca de la 10 de la mañana unos 200 integrantes del MIJP marcharon a la Municipalidad de Hurlingham, liderados por Nina Peloso, en reclamo de planes de trabajo. El secretario de gobierno municipal les aseguró que en un polideportivo cercano serían recibidos, pero a 200 metros del lugar la columna de manifestantes fue interceptada por seis autos sin identificación ocupados por hombres armados que reprimieron, hirieron a un manifestante y secuestraron a Peloso, esposa de Raúl Castells, líder del movimiento. *“La subieron a un auto particular y durante dos horas le dijeron te vamos a reventar, te vamos a volar la cabeza”*, declaró Castells, quien responsabilizó a los gobiernos provincial y nacional.

También en la ciudad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, 200 desocupados pertenecientes al MIJP y a la CCC realizaron el petitorio de *“500 bolsas de alimentos porque nos estamos muriendo de hambre”* en tres supermercados de la zona, los cuales se negaron a darles comida. El subgerente del supermercado Norte, el primero en ser visitado por los manifestantes, aseguró: *“Me pidieron 500 bolsas de alimentos a través de un petitorio. Llamé a la central y me dijeron que no podía darles nada. Hacemos obras de beneficencia, pero con entidades públicas.”* Ante la negativa, los desocupados respondieron con insultos, cánticos y quema de gomas; de todos modos, no hubo ningún incidente mayor. Luego se dirigieron hacia los supermercados Disco y Jumbo, donde se reiteró la negativa a darles alimentos.

Al mismo tiempo, a casi cuatro kilómetros de allí, unas 150 personas de la Cooperativa Padre Mujica continuaban con el corte de ruta en Acceso Oeste y Vergara, iniciado el lunes anterior por la tarde: *“No tenemos nada que ver con los piqueteros que piden comida. Nosotros reclamamos la construcción de viviendas en*

Hurlingham, aunque tampoco tenemos para comer”, declaraban los manifestantes intentando precisar su demanda.

Cerca de siete mil personas salieron por las calles de Neuquén, bajo un sol implacable que elevó la temperatura a más de 31° C, a reclamar la libertad de cuatro dirigentes de la CTA y el cese de la persecución a otros siete trabajadores estatales acusados de haber golpeado y coaccionado al funcionario de la obra social provincial Gerardo Hettinger durante una manifestación. Por delante de la columna, que ocupó cerca de ocho cuadras, se ubicaron los diputados nacionales Ariel Basteiro del ARI y los justicialistas Franco Caviglia y Tom Romero. También llegaron para participar de la marcha los secretarios generales de ATE en las provincias de Córdoba, Jujuy, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut y ciudad de Buenos Aires; además, se presentó la secretaria general de CTERA, Marta Maffei. Basteiro y Maffei fueron los principales oradores en el acto que se realizó en la esquina de la Casa de Gobierno. El diputado nacional, quien fuera encarcelado como dirigente de los trabajadores aeronáuticos en 2001 en la protesta que se realizó en el aeropuerto de Ezeiza contra el vaciamiento y la posterior privatización de Aerolíneas Argentinas, afirmó: *“La libertad de los cuatro compañeros neuquinos debe ser inmediata, porque es impensable que ellos estén presos y haya tanto ladrón y tanto corrupto suelto en las calles de nuestro país.”*

La familia Wakstein tenía pensado irse de vacaciones, pero el proyecto se vio frustrado debido a que sus ahorros quedaron atrapados en el inefable “corralito”. Marcelo Wakstein, de 46 años, comentó: *“Pensábamos irnos a Villa Gesell, como todos los años. Pero vinimos al único lugar que nos permite ir el banco: ¡al banco!”* Así fue como, junto a su esposa y sus dos hijos adolescentes, se instaló en el hall del banco HSBC provisto de reposeras, baldes, palitas, arena, caracoles y demás adminículos propios de un día de playa. También la vestimenta de la irónica familia evocaba las frustradas vacaciones: mallas, shorts, ojotas, anteojos de sol, etc. Durante las horas que pasaron allí recibieron el apoyo de los ahorristas indignados por la restricción bancaria, quienes redactaron un cartel que dejaron junto a los objetos playeros de los insólitos “veraneantes”: *“Este banco se quedó con el futuro de mis hijos, devuélvanselo.”*

Hacia la tarde, los 34° C de calor que azotaron a la ciudad de Buenos Aires no impidieron que un cacerolazo de más de seis mil personas se desarrollase en las puertas del Palacio de Justicia, demandando, al ritmo de las cacerolas y los cánticos, la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Entre cánticos alusivos: “Salta, salta, salta, pequeña langosta, Menem y la Corte son la misma bosta”; y consignas impiadosas: “Habrá cacerolazos hasta que se vayan”, “Se fue De la Rúa, se fue Grosso,

Rodríguez Saá, ¿quién dijo que no lograremos que se vaya esta Corte?”, “Que se vayan todos, Asamblea popular constituyente”, “Que el pueblo elija los jueces”, “Nueve jueces, nueve coimas, nueve gangsters, Corte Suprema, asociación ilícita”. Agonizaba la legitimidad de una Corte cercada por la protesta popular y abandonada por el poder político. Se repitieron imágenes que se habían convertido en símbolos de la protesta social contra el alto tribunal: el lienzo con una caricatura de la justicia con un pecho al aire y el cartel con una rata de anteojos que fuma habano y muestra billetes verdes en las manos, acompañado por la frase “fuera la banda de Nazareno”. Cada jueves reaparecían diferentes consignas para la misma premisa: “que se vayan todos”. En la protesta estuvieron presentes varias asambleas barriales, como las de Paternal, Villa Crespo, Belgrano, Floresta, Caballito, Boedo, Florida, Vicente López, Liniers, San Cristóbal, etc. También participaron estudiantes, Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Kiosqueros y Autores Unidos.

Hacia las seis de la tarde asomaron las banderas argentinas y se entonó el Himno Nacional. Finalmente, se realizó una vuelta alrededor del edificio, donde podía observarse la representación de nueve variedades de serpientes. Debajo de cada figura estaba escrito el nombre de cada uno de los integrantes de la Corte. Más tarde, se dirigieron hacia la casa de Nazareno, donde se realizó un escrache a pesar de que el juez no se encontraba en la ciudad; también fue objeto de un escrache el domicilio del ministro Antonio Boggiano. Durante el transcurso de la tarde volaron los papelitos amarillos que anunciaban el plato del día: “Suprema a la cacerola”.

“Esto ya no es espontáneo, tiene algún grado de organización y eso implica que hay un riesgo extra”, declaró el secretario de Seguridad en referencia al cacerolazo anunciado para el viernes siguiente. Según el funcionario: “el piso de la protesta está muy alto en todo el país y puede estallar por cualquier motivo”. El panorama de protestas para el fin de semana que se aproximaba incluía un cacerolazo nacional convocado por la Asamblea Interbarrial para el viernes por la noche y una marcha de los desocupados de La Matanza que partiría de la provincia el domingo por la noche, confluyendo en Plaza de Mayo el lunes al mediodía. Entre los funcionarios cercanos a Duhalde circuló la idea de la presencia de “activistas de la izquierda dura dispuestos a acelerar el conflicto social”; la reaparición de la figura del infiltrado presagiaba un desarrollo convulsionado de la protesta. La inquietud de las autoridades se incrementaba en la medida que la solidaridad entre caceroleros y piqueteros ampliaba los márgenes de la protesta y concentraba las demandas.

Los "indicadores" del conflicto social no resultaban alentadores. En Junín, provincia de Buenos Aires, se realizó un cacerolazo que recorrió varias casas de dirigentes políticos de la zona, entre ellas, la del intendente Abel Miguel y la de la diputada nacional justicialista Mirta Rubini. En ambos casos, los manifestantes expresaron su bronca hacia los políticos a través de insultos y cánticos. En el escrache frente a la casa de la diputada Rubini algunos manifestantes comenzaron a patear las puertas de entrada y del garaje rompiendo la hoja de la ventana de madera. En ese momento, un disparo salió del interior de la casa de Rubini e hirió gravemente a uno de los manifestantes. El suceso desató la ira de los caceroleros, que incendiaron la vivienda, destrozaron muebles, cortinas y ropa. Al encontrar una camioneta cuatro por cuatro en el garaje, la volcaron contra el pavimento. Un cordón humano impidió a los bomberos penetrar en la vivienda, sólo lo hicieron cuando el fuego hubo hecho suficientes destrozos. Cerca de las dos de la mañana, la protesta fue diluida por la policía, que lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes. Al día siguiente, fue detenido el hijo de la diputada, un abogado de 31 años, acusado de ser el autor del disparo.

El Banco Central difundió la lista de excepciones al corralito, que correspondían a personas de 75 o más años, a quienes tuvieran fondos atrapados de una indemnización u otros pagos laborales extraordinarios y a aquellos que hubieran cobrado un seguro de vida. También quedaron exentas de las restricciones aquellas personas que tuvieran que someterse a una intervención quirúrgica o a un tratamiento médico, ya sea en la Argentina o en el extranjero. Exceptuando a los mayores de 75 años, se establecieron topes a los montos de dinero que podían retirarse. Los beneficiarios no se encontrarían en sus manos con el efectivo, sino que tendrían que mover sus ahorros a través de transferencias bancarias o dentro del corralito.

Después de una jornada caótica en el proceso de pesificación, los bancos operaron con cierta normalidad dando curso a la flexibilización del corralito financiero. La mayoría de los ahorristas que concurrieron a las entidades optaron por pesificar hasta cinco mil dólares de sus depósitos reprogramados.

Viernes 25 de enero:

Según lo programado por la Asamblea Interbarrial del domingo 20, se realiza el primer cacerolazo nacional durante la gestión del presidente Duhalde. La Plaza de Mayo se vio invadida una vez más por alrededor de veinte mil personas que protestaron básicamente contra el corralito y por la renuncia de la Corte. Igual

que en protestas anteriores, se destacó la presencia predominante de un sector medio urbano no sólo afectado en sus intereses materiales, sino también movilizado sobre la base de incipientes formas de organización barrial y ciudadana. A las consignas aglutinantes se sumaron otras no menos importantes que se vociferaban alrededor de la Plaza de Mayo y en varias zonas destacadas de importantes ciudades provinciales: por la pesificación uno a uno respecto del dólar de todas las deudas sin limitaciones de monto, por el llamado a elecciones anticipadas y contra el sistema financiero. Más allá de las diversas demandas y consignas, una exigencia urgente parecía integrarlas en un eje común: *“Que se vayan todos”*.

Sigilosamente, se hicieron presentes en la plaza algunas banderas políticas de partidos de izquierda; las mismas que durante la década del ‘90 fueron las impulsoras de las protestas contra el régimen de acumulación y el gobierno menemista bajo la consigna del combate al “modelo neoliberal”. La convocatoria y el protagonismo excluyente en el cacerolazo corrieron por parte de las asambleas barriales que recurrieron a cadenas masivas de correo electrónico para publicitar sus decisiones.

Entre los bancos tabicados y el desmesurado despliegue de las fuerzas de seguridad -el gobierno dispuso de casi diez mil efectivos de la Policía Federal para contener la protesta, a los que se sumaron 1.500 efectivos de las fuerzas de choque: Infantería y Policía Montada- el escenario urbano lucía tan tenebroso como intimidante. La protesta se desarrolló de forma pacífica bajo una persistente lluvia que en lugar de disuadir a los participantes, los estimuló por el marco épico que suministraba la imagen de miles de personas marchando por las principales avenidas de la ciudad bajo una cortina de agua. Avanzada la madrugada, cuando el grueso de los manifestantes ya se había desconcentrado, se produjeron algunas escaramuzas en el Cabildo y el Obelisco entre militantes de partidos de izquierda y la policía. La consecuencia fue el desalojo de los manifestantes que aún permanecían en la plaza como resultado de los gases lacrimógenos arrojados por la Guardia de Infantería.

En el interior, las principales manifestaciones se registraron en La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta y Bariloche. Además de las plazas centrales y casas de gobierno, los manifestantes se dirigieron en todas las ciudades a las zonas de mayor actividad financiera para realizar escraches a los bancos.

Desde EE.UU., el secretario del Tesoro Paul O’Neill pidió reunirse con el canciller argentino Carlos Ruckauf para discutir los lineamientos políticos del nuevo programa económico. En este mismo sentido, la representante del FMI, Anne Krueger, dijo: *“el organismo está ansioso por trabajar con Argentina, ayudar al país*

y encontrar una salida a la difícil situación". Además del encargado del Tesoro, también el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, se mostró interesado en reunirse con el canciller argentino con el objetivo de analizar las consecuencias que la crisis argentina podría tener para los intereses norteamericanos en la región.

La confusión producida por la implementación de las nuevas medidas económicas, centralmente, los nuevos límites para la extracción de dinero del corralito, derivó en una nueva jornada convulsionada en bancos y casas de cambio. Las largas colas volvieron a desatar el fastidio de los ahorristas. En los bancos, las consultas más frecuentes fueron en torno a montos, tipos de paridad, límites y sobre el destino del saldo excedente de las cajas de ahorro en dólares con acreencias superiores al límite permitido para pesificar, establecido en cinco mil dólares. Desde el Banco Central, aseguraron que no existían reservas suficientes para mantener de forma indefinida el control del tipo de cambio. Según declaraciones, en lo que iba del mes se habían destinado 600 millones de dólares para controlar el aumento en el valor de la divisa. Un aumento acelerado del valor del dólar hacía prever el peor de los escenarios: una profunda recesión combinada con un proceso hiperinflacionario.

Sábado 26 de enero:

El equipo económico de Remes Lenicov se reunió en el Ministerio de Economía para trabajar en un programa económico orientado según las demandas del FMI. De acuerdo con lo previsto, el ministro estimaba un déficit para el presupuesto algo menor de los cuatro mil millones de dólares, cifra que se adecuaba a las estimaciones del Fondo Monetario. En la misma reunión se anunció que el presupuesto podría ir al Congreso en el curso de la semana. Con respecto al corralito, anunciaron a medios periodísticos que no habría *"más parches ni arreglos"*. Por otra parte, se trabajó en la elaboración de las respuestas que debería llevar el canciller Ruckauf a Estados Unidos en su inminente viaje.

El presidente Duhalde, por su parte, anunció que se presentaría un plan económico en los próximos días, coincidiendo con los anuncios de Economía. En una transmisión por Radio Nacional, en un ciclo semanal destinado a responder a las preguntas de la ciudadanía, el Presidente recordó a la población argentina que *"la gente perdió la percepción de que este presidente tiene sólo 25 días de ejercicio"*. Refiriéndose a la crisis, culpó a la *"alianza del gobierno anterior con el sector financiero y bancario"*. Aclaró también que la inflación no llegaría al dos por ciento después de la devaluación.

El presidente también hizo referencia a los cacerolazos y pidió evitar *"la tentación de creer que haciendo líos o barullo se solucionan los problemas"*, y

agregó una de sus frases más repetidas en aquellos días: *“Los países no toleran la anarquía”*. Su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde, coordinadora del área social del gobierno de su marido, afirmó en una entrevista haber visto por televisión el cacerolazo del viernes 24 junto a su marido, pero a diferencia de aquél, opinó que *“el reclamo de la gente es legítimo”*.

Domingo 27 de enero:

Se realizó en Parque Centenario (ciudad de Buenos Aires) la segunda gran Asamblea Interbarrial, que congrega a 1.500 personas. Allí se reunieron las asambleas de todos los barrios porteños y las que representaban a buena parte del conurbano bonaerense; participaron alrededor de 80 uniones barriales que se habían formado en los últimos días de diciembre. Además de asegurar la continuidad de los cacerolazos, votaron a favor de concentrar los reclamos en cuatro puntos: la renuncia de los miembros de la Corte Suprema, el fin del corralito, un llamado a elecciones presidenciales y el no pago de la deuda externa. También acordaron apoyar la marcha de los piqueteros que partiría esa misma noche de La Matanza para llegar al mediodía del día siguiente a Plaza de Mayo.

Seguía el impacto internacional de la crisis argentina. En España, se realizaron cacerolazos en apoyo a la Argentina bajo la denominación de *“jornadas de solidaridad con la resistencia del pueblo argentino”*. Decenas de personas de distintas entidades de asistencia pública españolas y de inmigrantes argentinos protagonizaron un ruidoso cacerolazo acompañado de bombos y silbatos frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en la Plaza de Santa Cruz. A la demostración se sumaron turistas argentinos que visitaban la vecina Plaza de España y también ciudadanos españoles. Entre los grupos que se hicieron presentes, se encontraban los representantes de movimientos antiglobalización que acordaron con otras organizaciones el lanzamiento de un *“cacerolazo global”* a partir de la siguiente semana. En un manifiesto que se divulgó por la tarde, los organizadores del *“cacerolazo global”* identificaban a las *“multinacionales, bancos, políticos y gobiernos ladrones y corruptos”* como responsables de la grave situación argentina. Añadían, además, que se trataba de los mismos *“explotadores”* reunidos en el Foro Económico Mundial que se hizo famoso por sus reuniones en Davos, Suiza. El informe se completaba con un largo análisis de la situación argentina que condenaba al *“modelo económico neoliberal”*.

Lunes 28 de enero:

Se concreta la marcha de piqueteros en la que participan alrededor de 15 mil personas entre desocupados, integrantes de las asambleas barriales y

militantes de partidos de izquierda. Llegaron alrededor de las 17 a Plaza de Mayo, luego de marchar casi 18 horas desde distintos puntos del conurbano bonaerense y de los márgenes la ciudad capital. Algunas columnas venían de las zonas más pobres y castigadas del conurbano: *“Vamos a ser más de diez mil”*, aseguraba D’Elía, líder de la FTV, al iniciar la marcha, cuando apenas lo rodeaban 200 desocupados de los barrios San Javier, Sapito, Bernaza y El Pino. Entre ellos, estaba Gabriel Ferreyra, de 30 años, que llevaba ya un año y medio sin trabajo tras ser despedido de la fábrica de la empresa Royal, en Canning: *“Hago changas, pero no alcanza; hay que ir a la plaza para que nos escuchen”*, proponía. Durante la marcha, los organizadores mostraron reiteradamente su entusiasmo por la adhesión y el apoyo de los “caceroleros”: a lo largo del camino, la columna que había salido de La Matanza recibió tanto la adhesión de vecinos como de comerciantes que suministraron agua a los manifestantes para paliar los efectos del calor abrasador del mediodía estival. Ya por Av. Rivadavia, al ingresar en la ciudad de Buenos Aires, las persianas de los negocios no se cerraban, sino que se abrían para asistir a los participantes, mientras caía papel picado de algunos edificios. El mismo sector social desafectado, que había generado apenas un mes antes el terror de los comerciantes porteños ante una posible ola de saqueos, era saludado ahora jubilosamente como símbolo de la lucha social. El líder piquetero Luis D’Elía, resumió su entusiasmo con una curiosa metáfora: *“Hemos embarazado a la Argentina de esta nueva criatura, que es la formidable alianza entre trabajadores, desocupados, vecinos y comerciantes.”*

La principal columna piquetera estuvo encabezada por Víctor De Gennaro (titular de la CTA), Luis D’Elía (FTV-CTA) y Juan Carlos Alderete (CCC). También participaron varios diputados nacionales de partidos de oposición a la alianza parlamentaria entre UCR y PJ que sostenía al gobierno de Duhalde. Ya en la Plaza de Mayo se encontraba una columna del Polo Obrero que había arribado alrededor de las 14, mientras otro grupo importante de manifestantes, identificados como integrantes de la CCC, protestaba frente al Congreso interrumpiendo el tránsito en Av. Callao.

Antes de converger en Plaza de Mayo, realizaron un acto frente al Congreso en el cual exigieron el cumplimiento de la promesa del gobierno de crear un millón de puestos de trabajo y la renuncia de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Desde un palco improvisado en un camión hablaron, entre otros, el escritor Miguel Bonasso, el docente Hugo Yasky, el estatal Pablo Michelli y los líderes piqueteros Juan Carlos Alderete y Luis D’Elía. También estuvo presente el estatal jujeño Carlos “Perro” Santillán, fundador de la CCC y símbolo de la protesta piquetera. *“Señores congresales, si mantienen este rumbo de hambre para el*

pueblo, los vamos a correr hasta abajo de la cama”, tronó la voz de Alderete frente al Parlamento. Rescatando la convergencia entre la lucha “piquetera” y “cacerolera”, el locutor del acto leyó un documento producido por la Asamblea Interbarrial: “Para volver a creer en la Justicia, deben ser enjuiciados Menem, De la Rúa, Cavallo y todos sus cómplices. Para eso, fuera la Corte Suprema”, sentenciaba el texto.

Las dimensiones de la jornada de protesta piquetera trascendieron los límites de la ciudad de Buenos Aires y del GBA donde se había organizado. En La Plata, unos 500 desocupados cortaron el camino Centenario a la altura de Gonnet para manifestar su apoyo a la marcha; cerca de las 11 de la mañana, quemaron cubiertas y provocaron un gran caos en el tránsito, ya que se trata de la vía de acceso a la Ruta N° 2, que comunica a Buenos Aires y La Plata con la ciudad de Mar del Plata. Los manifestantes, pertenecientes a la Corriente Clasista y Combativa de La Plata, Berisso y Ensenada, reclamaron el otorgamiento de 600 nuevos planes subsidiados de empleo y también pidieron que los 400 que estaban a punto de caducar fueran renovados, todos ellos, con montos mensuales de 200 pesos. En Mar del Plata, entidades sociales y de desocupados adhirieron a la marcha piquetera cortando rutas y calles. Los cortes de ruta, iniciados cerca de las 10 de la mañana, se efectuaron desde las avenidas céntricas hasta la cercanía de la Ruta N° 2, sobre la costanera y en la Ruta Provincial N° 88. También se realizó una concentración enfrente de la Municipalidad. Los manifestantes pertenecían a la CCC y al Movimiento Teresa Rodríguez.

En Rosario, los habitantes de barrios pobres, nucleados en la Federación Tierra y Vivienda, se concentraron en la Plaza Sarmiento. En la ciudad de Santa Fe, los movimientos de desocupados entregaron un petitorio a la gobernación de la provincia en reclamo de 60 mil puestos de trabajo o subsidios de empleo de 200 pesos.

Finalmente, y como resultado de la marcha, los dirigentes de las organizaciones de desocupados participantes recibieron una invitación del presidente Duhalde a una audiencia para tratar los problemas del sector, programada para el miércoles 30 en la Casa de Gobierno. Las demandas de los piqueteros, transmitidas inmediatamente a Duhalde, eran: la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo, el desprocesamiento de los dirigentes sociales presos y la instauración de un seguro de desempleo de 380 dólares.

Sin embargo, la movilización social de aquel lunes convulsionado no se restringió a la protesta de las organizaciones de desocupados. Frente a los tribunales porteños, se realizó otro llaverazo bajo la consigna: *“Un dólar, un peso,*

sin excepciones.” Participaron los deudores hipotecarios, prendarios y privados, bancarios y no bancarios que no estuvieron contemplados en la pesificación de la ley de emergencia pública, que establecía que se pesificarían en relación uno a uno sólo las deudas bancarias de hasta cien mil pesos únicamente, destinadas a la compra de viviendas. Como lo venían haciendo tres veces por semana, se congregaron ante las puertas del Palacio de Justicia para exigir además que no se les aumentaran los intereses ni se les aplicaran cláusulas de reajuste o indexación de ningún tipo. Agitando sus llaveros, plantearon la inquietud de cuatro millones de personas afectadas en procura de una solución urgente.

Martes 29 de enero:

Se manifiestan las secuelas de la gran movilización piquetera del día 28. Cerca de 500 jubilados y desocupados del movimiento “Paz, Pan y Trabajo” mantuvieron el corte iniciado el día anterior en el Puente La Noria en demanda de *“ayuda alimentaria y planes Trabajar”*. El reclamo se dirigió principalmente al intendente de Lomas de Zamora, de quien, debido a la infinidad de promesas de asistencia incumplidas, los manifestantes opinaban: *“Se burló de nosotros.”*

Miles de piqueteros que habían marchado el día anterior desde Lomas de Zamora bajo la denominación “los más pobres de todo el movimiento” llegaron a la ciudad de Buenos Aires. Los dirigentes de este grupo fueron recibidos por el presidente Duhalde, a quien le expresaron su reclamo por la creación de puestos de trabajo y la creación de un seguro de desempleo. Luego de la reunión, los dirigentes piqueteros y miembros de la CCC que participaron también de la protesta manifestaron su satisfacción por la unión simbólica de “piquetes y cacerolas”.

Mientras el gobierno analizaba la posibilidad de liberar la cotización del dólar y establecer un único mercado libre de cambio, requisito indispensable exigido por el FMI para comenzar a tratar un posible paquete de asistencia financiera, los obispos presentaban un demorado documento resultado de las discusiones en el interior de la “mesa del consenso nacional” para la cual habían prestado el *“ámbito espiritual”*, según lo había solicitado oportunamente el Presidente. Con tono resignado, los clérigos pedían en el documento *“renuncias personales y la necesidad de rehacer los lazos sociales”*.

Miércoles 30 de enero:

En los grandes centros urbanos se incrementó la protesta contra los bancos, identificados como responsables de una gran estafa a escala nacional. Durante el mediodía, cientos de ahorristas realizaron un cacerolazo contra la pesificación de

sus depósitos frente al Ministerio de Economía y frente a entidades bancarias. Otro grupo realizó escraches a los bancos colocando obleas con la leyenda *“cerrado por falta de fondos”*. En Núñez, asambleístas de la asamblea correspondiente a los barrios de Núñez y Belgrano escracharon a los bancos de la zona realizando “corralitos humanos” para exigir *“la inmediata devolución de los depósitos”*. En La Plata, caceroleros también realizaron escraches a diferentes entidades bancarias. En Salta, se realizó una masiva protesta multisectorial que se manifestó, entre otras cosas, en demanda de *“la devolución de los depósitos”*.

Por la tarde noche, cientos de deudores “no pesificados” manifestaron a través de un abrazo al Congreso para solicitar la pesificación uno a uno de sus deudas. La protesta tuvo como incidente principal la agresión al diputado Franco Caviglia, quien, a la salida del Congreso, fue identificado por un grupo de manifestantes. Caviglia recibió insultos y trompadas y debió refugiarse en un bar de la zona del cual pudo retirarse algunas horas más tarde custodiado por agentes de la Policía Federal. Como había sucedido en Jujuy durante el mes de diciembre, algunos manifestantes recurrieron a la “autocrucifixión” como forma de expresar dramáticamente su protesta.

Entrada ya la noche, los diputados aprobaron la pesificación uno a uno de las deudas no bancarias. Esta medida fue acompañada por la decisión de suspender por 180 días los remates judiciales. Durante el transcurso de la jornada, el ministro de Economía Remes Lenicov se reunió con algunos funcionarios de FMI para discutir las medidas económicas a tomar. En busca de acuerdos, el Presidente mantuvo reuniones con muchos gobernadores aliancistas.

Jueves 31 de enero:

Abogados laboristas convocaron a un nuevo cacerolazo contra la Corte Suprema de Justicia frente a Tribunales. En la protesta participaron miles de personas y varios grupos sindicales bajo el lema *“que se vayan todos, que no quede ni uno solo”*. La protesta fue custodiada por una fuerte presencia policial; si bien no se registraron incidentes, los manifestantes arrojaron huevos contra el edificio de Tribunales.

Como era costumbre en las manifestaciones de los jueves, a la protesta en Plaza Lavalle siguió una recorrida de escraches frente a los domicilios de los ministros de la cuestionada Corte. Luego de una solemne entonación del Himno Nacional, los manifestantes concluían con huevazos y unánimes acusaciones de *“chorro, ladrón, traidor a la patria”*.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

- ADOC (Asociación de Documentalistas Argentinos). "Por un nuevo cine en un nuevo país", documental del 19 y 20, ADOC, 25 minutos. Buenos Aires.
- Altamira, Jorge. (2002). *El Argentinazo*. Buenos Aires: Ediciones Rumbo.
- Argentina Arde. "Video-informe I, II y III". Compilación de noticias no tomadas por la prensa en relación a diversos acontecimientos y protestas posteriores al 19 y 20. En el armado de estos "noticieros" participaron diversos grupos de cine y documentales alternativos que formaron parte del colectivo artístico Argentina Arde. Buenos Aires.
- Armellino, M., (2001). *Acción colectiva y acciones de protesta: el caso de la CTA*, Buenos Aires, (mimeo).
- Aronson, P., (1998). La ciudadanía en entredicho. El caso de Memoria Activa, Buenos Aires, (mimeo).
- Auyero, J., "El juez, la reina y el policía. Etnografía, narrativa, y los sentidos de la protesta", en *Revista Apuntes de Investigación del CECYP N° 6*, Buenos Aires, noviembre 2000.
- _____. "Los estallidos en provincia: globalización y conflictos locales", en *Revista Punto de Vista N° 67*, Buenos Aires, Agosto 2000.
- _____. (2002). *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática*. Buenos Aires: Libros del Rojas.
- Cafassi, Emilio. (2002). *Olla a presión. Cacerolazos, piquetes y asambleas sobre fuego argentino*. Buenos Aires: Libros del Rojas.
- Camarasa, Jorge. (2002). *Días de Furia. Historia oculta de la Argentina desde la caída de De la Rúa hasta la asunción de Duhalde*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Caparrós, Martín. (2002) *Qué país. Informe urgente sobre la Argentina que se viene*. Buenos Aires: Editorial Planeta – Espejo de la Argentina.
- Casullo, Nicolás. (2002). *Qué clase mi clase sin clase*, Buenos Aires, (mimeo)
- _____. "Cacerolazos, sin sacralizar ni consagrar", entrevista realizada por María Moreno para *Página 12*, 04/03/02.
- Colectivo Situaciones. (2002) *19 y 20: Apuntes para el nuevo protagonismo social*. Buenos Aires: Ed. De mano en mano.
- Cotarelo, M. C., (1999) "El motín de Santiago del Estero. Argentina, diciembre de 1993", en *PIMSA. Publicación del Programa de Investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina*, Buenos Aires.
- El Ojo Obrero. "El Argentinazo" y "Asambleas Populares". Cortos sobre el 19 y 20, y distintas asambleas populares, respectivamente. Buenos Aires.

- Farinetti, M. "Qué queda del 'movimiento obrero'? Las nuevas formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina", *Documento de trabajo, Cátedra: Análisis de la Sociedad Argentina, Carrera de Sociología, FCS-UBA*, Buenos Aires, mayo 1998.
- _____. "Violencia y risa contra la política en el Santiagueñazo. Indagación sobre el significado de una rebelión popular", en *Revista Apuntes de Investigación del CECYP N° 6*, Buenos Aires, noviembre 2000.
- González, Horacio. (2002). *La multitud creadora*, Buenos Aires, (mimeo)
- _____. "Cacerolas, multitud, pueblo", entrevista realizada por María Moreno para *Página 12*, 11/02/02.
- Gruner, Eduardo, "La protesta según Gruner", entrevista realizada por María Moreno para *Página 12*, 25/02/02.
- Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C., "La protesta social en los '90. Aproximación a una periodización", en *PIMSA. Publicación del Programa de Investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina*, Buenos Aires, 2000.
- Iñigo Carrera, Nicolás. (2002) *La rebelión: de la revuelta del hambre a la insurrección espontánea*, Buenos Aires. (mimeo)
- _____. "Piqueteros: los caminos de la protesta popular", en *Revista Enfoques Alternativos*, Buenos Aires, abril 2002
- Ithurburu, Julio, "El porteñazo, o la desobediencia debida", Buenos Aires, 2001 (mimeo)
- Kohan, Néstor, "El Argentinazo", Buenos Aires, 2001 (mimeo)
- Krichmar, Fernando. "Las Madres en la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001", Cine Insurgente, 35 minutos. Buenos Aires
- Nardacchione, G., "¿Qué vínculo existe entre el cacerolazo y la política?", Paris, febrero 2002 (mimeo).
- Pérez, G., "Pálido fuego: Hannah Arendt y la declinación de la figura del trabajador en las sociedades contemporáneas. Apuntes sobre los piqueteros en Argentina", Buenos Aires, noviembre de 2001 (mimeo).
- Peruzzotti, Enrique, "Cacerolazo para la renovación política", *Diario La Nación*, 4 de febrero de 2002
- Portantiero, Juan Carlos, De Ipola, Emilio, Cheresky, Isidoro, Altamirano, Ricardo, Mazzorín, Edgardo, Mocca, Edgardo y Tula, Jorge, Mesa redonda: "La crisis de la Argentina: en qué consiste y adónde puede llevarnos", publicado en *Revista La Ciudad Futura N° 51*, Buenos Aires, Otoño 2002
- Revista Estrategia Internacional*, N° 18, "Las jornadas revolucionarias del 19 y 20". Buenos Aires.

Revista La escena contemporánea, "19 y 20 de diciembre: sospechas, hipótesis y crónicas", Buenos Aires, 2002.

Revista La masa N° 3 dedicada al 19 y 20. Buenos Aires.

Revista Ladrán Sancho, N° 2 dedicada a la rebelión popular del 19 y 20. Buenos Aires.

Schuster, F. L. y Pereyra, S., "Transformaciones de la protesta social en Argentina: balance y perspectivas de una forma de acción política", en Giarraca, N. y AAVV, *Protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Alianza, Buenos Aires, 2001.

Schuster, Federico L., "Protestas sociales y represión a la oposición política", en *Informe anual de la situación de los derechos humanos en la Argentina*, CELS, Buenos Aires, 1997.

_____. "Social protest in Argentina today: is there anything new?", en Muñoz, J. y Riba, J. (eds.), *Treball i Vida en una economia global*, Edicions Llibreria Universitaria, Barcelona, 1999.

Scribano, A., "Argentina Cortada: 'Cortes de Ruta' y Visibilidad Social en el Contexto del Ajuste", en López Maya, M. (ed.), *Lucha Popular, democracia, neoliberalismo: Protesta Popular en América Latina en los Años del Ajuste*, Nueva Visión, Caracas, 1999.

Scribano, A., y Schuster, F. L., "Protesta social en la Argentina de 2001: entre la normalidad y la ruptura", en OSAL: Observatorio Social de América Latina N°, CLACSO, Buenos Aires, 2001.

Svampa, Maristella, "Las dimensiones de las nuevas protestas sociales", Buenos Aires, marzo 2002 (mimeo)

Vázquez Montalbán, Manuel, "Es que lo argentinos ni las mentiras se creen ya", artículo escrito desde el Foro Social de Porto Alegre, *Página 12*, 04/02/02.

OSAL, 1999, 2000a, 2000b, 2001

ANEXO DOCUMENTOS

MENSAJE DEL PRESIDENTE FERNANDO DE LA RÚA EMITIDO POR CADENA NACIONAL (19-12-2001)

Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso, he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles, que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral.

Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas; las comprendo y las sufro. Pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos, y eso estamos haciendo. He dispuesto multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados; tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. Pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que, aprovechando esta situación, utilizan el desorden para crear el caos.

Así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como Presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Como lo dije muchas veces, la situación requiere además, de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Por eso, convoco, una vez más, a los partidos políticos, a los gobernadores provinciales y a los bloques legislativos del Congreso Nacional para acordar las decisiones que exige la hora.

Las causas de esta situación vienen de lejos. Todos los que hemos gobernado o ejercido posiciones de poder durante décadas nos debemos la autocrítica. Sólo saldremos adelante, si cada uno asumimos nuestra responsabilidad histórica, dejamos de echarnos mutuamente culpas y decidimos, de una vez por todas, trabajar juntos para resolver los problemas. Convoco pues, una vez más, a

la responsabilidad de la dirigencia nacional y pido a mis compatriotas mantener la calma y colaborar para el reestablecimiento del orden. Pido a las organizaciones sociales, y especialmente a los medios de información, contribuir a recrear el clima de paz necesario para recuperar la seguridad y la tranquilidad en todo el país.

Confío en que muy pronto, con la unidad nacional como bandera, retomaremos el camino del crecimiento y superaremos los problemas que trabaron nuestro progreso. Buenas Noches.

**DISCURSO DEL PRESIDENTE ADOLFO RODRIGUEZ SAA
ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (23-12-2001)**

Señor Presidente; Honorable Asamblea Legislativa: vengo a cumplir el mandato constitucional que acaba de otorgarme esta Honorable Asamblea Legislativa para desempeñar la función de presidente de la Nación Argentina, lo que haré con la misma responsabilidad, dedicación y entrega con la que hasta ayer lo hice cuando me tocó conducir los destinos de la provincia en que nací. (Aplausos).

Esto, en uno de los contextos más difíciles y dramáticos, pero también más profundos y transformadores que le ha tocado vivir a nuestra Argentina; contexto que se patentizó en la noche del martes pasado, donde comenzó lo que me animo a calificar como uno de los más grandes movimientos populares de nuestra historia, cuando los hombres y mujeres de este país salieron a la calle a manifestar que no soportaban más el caos, el hambre, la desocupación, la marginalidad, la inseguridad, la exclusión social, la indecisión, la situación dolorosa por la que estamos atravesando, y la jerarquía de esta Honorable Asamblea me exime de una descripción más detallada de la misma.

La Argentina se vio enfrentada con su mejor rostro, pero también con su peor cara. El mejor rostro en el legítimo ejercicio del derecho de expresarse para poner fin a todo un período de opresión y postración que ya no soportaba más y a decirle no a toda una generación que se empeñó en pensar y actuar a espaldas de los intereses y necesidades del pueblo. La peor cara en las manifestaciones del vandalismo, el saqueo irracional y la muertes absolutamente innecesarias.

Todo esto no podemos ocultarlo y todos debemos reflexionar lo que sucedió esa noche, porque será a través de esa mirada, de ese análisis, que encontraremos los caminos, los procedimientos, los instrumentos que nos llevarán a dejar atrás para siempre esa situación que nuestros pueblos y nuestros hijos no merecían. (Aplausos)

Todo fue el producto de la conducción de una generación que aspiramos que termine, para que desde hoy entre todos empecemos a crear y transitar una nueva República, a remover los obstáculos de la injusticia social y del atraso.

De inmediato nos abocaremos a eliminar todos los conflictos y situaciones de injusticia que hayan tenido origen en estos hechos. La observación de estos trágicos días nos obliga a que en las próximas horas estemos proponiendo al Honorable Congreso de la Nación una ley para indemnizar a todos aquéllos que fueron víctimas de la protesta popular. (Aplausos)

Pero también quiero dejar en claro que estoy de acuerdo con quienes supieron mostrar el rostro de lo mejor de la Argentina, la expresión popular que luchó por sus derechos. Dejo en claro que repudio los saqueos y desmanes, como así también las violaciones de los derechos individuales. (Aplausos).

En esas jornadas vimos algo que no pudimos nunca imaginar los hombres y mujeres que integramos esta democracia, que con tanto dolor y sangre costó a los argentinos antes de 1983, nada más y nada menos que el símbolo de la lucha por su recuperación. Me refiero a las Madres de la Plaza de Mayo reprimidas inexplicablemente por las fuerzas de la democracia. (Aplausos).

No puedo dejar de rendir un homenaje a los muertos en estas jornadas, sangre innecesariamente derramada.

Señores legisladores: ¿qué necesidad había de estas muertes, del dolor de estas familias que perdieron a sus seres queridos, por nuestra desidia, nuestra ceguera y tal vez hasta nuestra irresponsabilidad. Estas pérdidas irreparables son la bisagra que hará posible una nueva Argentina, con un nuevo estilo de gobernar, un gobierno para 37 millones de argentinos que creyeron que en cada uno de nosotros encontraría una persona que trabajaría para ellos, para su presente y el futuro de sus hijos. (Aplausos)

Esta debe ser desde hoy nuestra visión, el cristal con que debemos enfocar cada una de nuestras decisiones. Nunca más un gobierno para beneficio de los que gobiernan.

Nuestros paradigmas son y serán la libertad, la igualdad, la transparencia, el verdadero respeto de los derechos humanos, la austeridad. Espero que esta sea la última declamación sobre estos puntos y que ahora los concretemos, porque los argentinos ya sabemos perfectamente bien de qué se trata. No permitamos más explicaciones, sí en cambio ansias que se concreten, que sean realidad en el día de todos y cada uno de nosotros.

Somos perfectamente conscientes de que hoy alumbra una nueva república, hoy comienza la transformación de nuestro querido país; a partir de hoy ya nada será igual, gobierna desde hoy otra generación. (Aplausos)

Emergencia social.

Lo social es el más grave problema de la Argentina, es el desafío que nos presenta el mundo globalizado de nuestro tiempo. El capitalismo, tal cual se nos presenta hoy, no puede dar respuestas al desempleo, la marginación, la exclusión, la pobreza. Desde esta jornada los argentinos exigen un cambio, exigen una respuesta, exigen que el centro de preocupación del Gobierno sea la cuestión social. Hoy venimos a aceptar ese desafío, es cierto que cada argentino tiene derecho a un trabajo digno y queremos concretarlo. Esta noche, esta madrugada, comenzaremos a instrumentar el plan social para crear un millón de empleos en la Argentina. (Aplausos)

Debemos esforzarnos y pido ayuda para que esto se concrete en el más breve tiempo posible, de manera que dentro de un mes estemos pensando en ampliar este plan para acercarnos al sueño de hacer cierto que cada argentino tenga su fuente de trabajo.

Esto es posible, pero sin corruptela, que el esfuerzo del Estado y del Gobierno llegue a la gente, y que entendamos que la oportunidad debe ser, en primer lugar, para el grupo familiar. Donde hay una familia sin empleo, ésta será la prioridad. Convocamos a la sociedad civil, a la Iglesia, a las organizaciones no gubernamentales, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a las municipalidades y a los gobiernos provinciales a unir esfuerzos y controles. Solamente con el esfuerzo sincero y responsable podremos evitar la corruptela.

Vamos a consultar, reflexionar y decidir en las próximas horas acerca de restablecer el derecho constitucional según el cual cada trabajador tiene derecho a acceder a un salario mínimo, vital y móvil. (Aplausos)

Plan alimentario.

No se puede concebir que en un país con todas las posibilidades de producción de alimento el pueblo esté sometido al hambre, la marginación y la pobreza. Sin dudar, vamos a implementar de inmediato un plan de emergencia alimentaria para contener a todos los excluidos, marginados y postergados. Lo haremos en estrecha colaboración con cada una de las jurisdicciones provinciales. Esto implica la reconstrucción de la red solidaria, que jamás debimos permitir que se destruya.

Austeridad.

Remitiremos a la brevedad a este Congreso de la Nación una ley para concretar la decisión de disminuir los salarios de los funcionarios en actividad del Poder Ejecutivo Nacional (Aplausos) y sus entidades autárquicas y descentralizadas, de manera tal que nadie –repito, nadie- pueda ganar más que el presidente de la

Nación, cuya remuneración, por todo concepto, será fijada en 3.000 pesos. (Aplausos)

Se congelarán todas las vacantes de la Administración Pública Nacional, de la planta permanente, contratados, transitorios o cualquier tipo de subterfugio para contratar personal, impidiendo toda nueva incorporación de personal.

Se dispondrá la inmediata venta de la totalidad del parque automotor asignado a funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional y de todos los entes autárquicos y descentralizados. (Aplausos) Y en la emergencia gravísima que vive el país también pondremos en venta, y nos animaremos a hacerlo, el parque aeronáutico de la Presidencia de la Nación. (Aplausos)

Invitamos a las provincias y municipios a adherirse a todas estas disposiciones. Los ministerios de Educación, de Salud y Acción Social serán reemplazados por áreas de coordinación, en estrecha vinculación con las jurisdicciones provinciales (Aplausos). El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa serán fusionados.

Ningún trabajador de la Administración Pública Nacional perderá su empleo. Digo: ningún trabajador, excluyo de este concepto a los aprovechados, a los que con lenguaje permisivo llamamos gasto político.

Deuda externa.

No siento que sea justo definir a la llamada deuda externa argentina como el endeudamiento contraído por el Estado Argentino frente a los acreedores extranjeros que merezca definir nuestra posición con la frase: debemos honrar los compromisos asumidos. Siento que las cosas no son así.

No podemos obviar con crudeza que algunos dicen que la llamada deuda externa, al menos parcialmente, es el más grande negociado económico que haya vivido la historia argentina. (Aplausos)

Este concepto se agrava porque su tratamiento porque su tratamiento siempre se ha realizado en escenarios reducidos, en oficinas a puertas cerradas, con decisores desconocidos y a espaldas del interés general. Y lo que es más grave, se ha priorizado el pago de la llamada deuda externa, frente a la deuda que este país tiene con sus propios compatriotas. (Aplausos)

Quiero ser muy claro: la deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda externa interior y exterior de la Nación. (Aplausos).

Vamos a tomar el toro por las astas, vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. (Aplausos prolongados). Esto no significa el repudio de la deuda externa, esto no significa una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del

primer acto de gobierno que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto.

Nuestro Gobierno abre las puertas a este Congreso para tomar conocimiento de todos los expedientes y los actos administrativos que estén vinculados a la deuda externa argentina, incluido este período gubernamental.

La transparencia se hace, no se proclama. Señores: los libros estarán abiertos para ustedes. (Aplausos)

Todos los dineros que estén previstos en el Presupuesto para pagar la deuda externa, mientras los pagos se encuentren suspendidos, serán utilizados sin dudar y sin excepción, en los planes de creación de fuentes de trabajo y el progreso social. (Aplausos)

Convertibilidad.

En la actual crisis económico-social que vive el país, son falsas las opciones de dolarización o devaluación que presentan a la convertibilidad como el mal de la sociedad argentina. Esto no implica desconocer las dificultades que el tipo real de cambio ha venido generando en nuestras relaciones comerciales con el exterior, hechos que serán motivo de acciones específicas.

Frente a esta asfixiante opción, propondremos en el curso de la semana que viene la implementación de una tercera moneda a fin de inyectar liquidez al consumo popular. Esto no perjudicará a nadie y llevará beneficio a los hogares argentinos. Una devaluación significaría disminuir el salario de los trabajadores en la misma proporción, sumado a la posibilidad cierta de un descontrolado incremento de precios afectando el consumo de los sectores asalariados o con ingresos fijos.

Sería muy fácil establecer una devaluación. El efecto inmediato de esta medida consistiría en la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, acentuando aún más la crítica situación que atraviesa hoy el conjunto de los trabajadores argentinos. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque sería una nueva quita al bolsillo de los trabajadores.

Incentivaremos la producción y las nuevas inversiones; pondremos al sistema tributario al servicio de la producción y la inversión. El país no tolera más la evasión ni el contrabando y la inequidad fiscal. La producción, la competitividad y el empleo, dejarán de ser temas olvidados. Queda abierta nuestra agenda productiva.

Señor Presidente, Honorable Asamblea Legislativa, pueblo argentino: creo en la grandeza de nuestros próceres; creo en nuestra bandera histórica; creo en los mártires de la Argentina; creo en el 17 de Octubre del pueblo que dio a Perón la oportunidad de dignificar a los argentinos (aplausos); creo en la resistencia peronista; creo en la lucha de las Madres de Plaza de Mayo; creo que nuestros trabajadores y nuestros productores devolverán con su esfuerzo la grandeza de

Argentina; creo en la libertad y en la Justicia; creo en el principio de la racionalidad; creo firmemente en la legalidad; creo que es posible una Argentina sin pobres, sin desocupados, sin hambre y sin miseria; creo en la justicia social.

Como siempre lo hago, toda vez que me ha tocado afrontar las responsabilidades que el pueblo me delegó, pido la protección de Dios y del milagroso Cristo de la Quebrada (aplausos) a que me ayude e ilumine en los difíciles días que me esperan en este período.

Muchas gracias y a trabajar. (Aplausos).

MENSAJE DEL PRESIDENTE RODRIGUEZ SAA AL PAIS (30-12-2001)

Señoras y señores: durante estos siete días que trabajé por la pacificación del pueblo argentino nunca me referí a lo que suele llamarse la herencia recibida.

Simplemente porque intentaba generar optimismo a nuestro pueblo. Todos sabemos que el país se encuentra en la más grande bancarrota de la historia. Para decirlo en términos simples no han dejado nada. Repito, nada. Ni siquiera el derecho a tener esperanzas.

Hoy, a esta misma hora, pensaba anunciar el plan económico para el país que con un grupo importante de economistas, habíamos elaborado donde, entre otras medidas, definiría la apertura del corralito financiero con las siguientes modalidades: uno, asegurar el pago de los ahorros populares; dos, asegurar que este pago se hará en términos de similar poder adquisitivo al depositado; tres, el cronograma de pago se hará de acuerdo con las posibilidades financieras del banco que el depositante eligió; cuarto, se garantizaban los montos de lo depositado con las garantías que los bancos tienen en su cartera de créditos.

Acompañaban a estas medidas la presentación del Presupuesto para el año 2002 que ya está confeccionado no sólo con equilibrio fiscal, sino además con la eliminación de todos los gastos de la corruptela del Estado.

El Presupuesto 2002 se realizó con toda seriedad tomando los menores cálculos para el cálculo de recursos.

Los recursos tributarios se calcularon en 33.652 millones de pesos; los no tributarios en 3.500 y los de capital en 866, lo que daba un total de recursos para el Presupuesto 2002 de 38.019 millones de pesos, muy inferior al anterior Presupuesto.

Con estos 38.000 millones de pesos el Estado Nacional puede cubrir el 100 por ciento de las remuneraciones, que son 4.917 millones; el 100 por ciento de las jubilaciones y pensiones, que son 16.114; dejar para bienes y servicios 1.300 millones; cubrir el 100 por ciento de las necesidades del PAMI, que son 2.206

millones; dejar cubrir el 100 por ciento de las necesidades de las universidades que son 1.575 millones; los 4.251 millones que corresponden a las provincias que complementan lo pactado por coparticipación federal; un plan social unificado que contempla 1 millón de empleos durante 1 año, que son 2.400 millones y el resto de los planes sociales 1.200 millones. Se prevé pactar en intereses 3.500 millones y una inversión real en obra pública de 554 millones, lo que da un total de 38.019 millones de pesos, exactamente igual que los recursos.

La Argentina puede y debe tener un Presupuesto equilibrado donde, por supuesto, que los recortes deben ir a la corruptela y eliminar los gastos superfluos y no imprescindibles y no a los sueldos de los empleados ni de los jubilados, como se ha hecho éste para el 2002.

También se habían comprometido los gobernadores a firmar una ley de coparticipación que traería pacificación en la relación nación-provincias y permitiría una seria negociación con los organismos internacionales.

Se ha dado comienzo al proceso electoral con la orden de confección de los padrones correspondientes, orden impartida el miércoles pasado. El 3 de marzo habrá elecciones en la Argentina.

Pienso que la sociedad viene cuestionando el accionar de la Corte Suprema. Este tema debe ser incluido en la agenda institucional de la Argentina. En estos 7 días, donde me han exigido que haga lo que no se ha hecho en este país en los últimos 30 años, solamente pude hacer y que no es poco lo siguiente: primero, tomamos la decisión de suspender el pago de la deuda externa, cuestión sobre la que nadie podrá volver atrás. Esta sola decisión ya representa un enorme beneficio económico y social para el país. El Congreso Nacional tiene la participación constitucional correspondiente y el mundo ha comprendido esta justa y prudente medida.

Segundo, comencé el proceso de inclusión social de todos los marginados de un sistema perverso. Esta es una tarea gigantesca y el gran desafío de la era de la globalización. Todos los argentinos somos iguales.

Comencé un plan de un millón de puestos de trabajo que en sólo 7 días ya alcanzó la suma de 230 mil personas y que en los próximos 10 días puede llegarse al millón.

Cuarto, se realizó el más fantástico plan de austeridad eliminando autos oficiales, celulares, salarios excesivos y todo gasto superfluo e irritante.

Se bajaron con un tope de 3 mil pesos los sueldos máximos del Poder Ejecutivo y se disminuyó el 40 por ciento de la planta del personal político.

A pesar de que se quiere transmitir lo contrario, hemos evitado el aislamiento de la Argentina y afianzado los lazos de amistad con Europa, Estados Unidos y el Mercosur.

En el orden interno, mantuvimos excelentes relaciones con las provincias argentinas de todo signo, incluida la Capital Federal.

Levantamos el estado de sitio en Buenos Aires, San Juan y Entre Ríos y comenzamos a transitar por el camino de la paz.

Cambiamos la relación entre las Fuerzas de Seguridad y el pueblo en ocasión del último cacerazo.

Permitimos la expresión popular pacífica y respetuosa que se realizaba y confrontamos sólo y en última instancia, ante el desborde delictivo. Y esto es nuevo en la Argentina.

Todo esto en 7 días, de los cuales solamente 3 fueron hábiles. Hice un gran esfuerzo. El pueblo argentino hizo un gran esfuerzo.

Los lobos o los lobbies que andan sueltos, no han entendido la esencia de los nuevos tiempos y pretenden mantener los privilegios de la vieja Argentina. No voy a ser el presidente de la continuidad de esa vieja Argentina. No voy a ser el presidente de la represión al pueblo para sostener las posiciones de los factores de poder, a los que muchos me incita. No acepto esa infamia.

He pretendido ser quien inicie el cambio en la Argentina. Estoy seguro de haberlo logrado. Salvo los gobernadores peronistas de Formosa, Salta, San Luis, Buenos Aires, Misiones y La Rioja, los demás me han quitado el apoyo. Especialmente el gobernador de Córdoba, que priorizó la interna partidaria a los intereses de la patria. Muchos legisladores siguen creyendo que están primero las prebendas a la patria. Aquellos que me apoyan representan escasa fuente de legitimidad.

Esta actitud de mezquindad y retaceo, no me deja otro camino que presentar mi renuncia indeclinable a la Asamblea Legislativa.

Comunico esta decisión al pueblo argentino y dejo la Presidencia desde este mismo instante en manos del presidente provisional del Senado a quien he comunicado telefónicamente mi decisión.

Si durante mi brevísima gestión he ofendido a alguien, le pido perdón. He puesto mis mejores sentimientos.

Agradezco enormemente a quienes me ayudaron, a quienes me comprendieron y a quienes me siguieron.

Ruego a Dios que ilumine al futuro presidente y que la Argentina reencuentre el camino de la paz y justicia.

Procedo en este acto a entregarle al señor edecán mi **renuncia indeclinable** a la Presidencia de la Nación Argentina dirigida a la Asamblea Legislativa y le pido al señor edecán que proceda a viajar a Buenos Aires a hacerle entrega a ese Honorable Cuerpo.

Buenas noches, muchas gracias, ¡viva la Argentina!

**PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA NACION, DOCTOR EDUARDO DUHALDE,
ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (01-01-2002)**

Honorable Asamblea Legislativa; querido pueblo de mi patria: he sido designado por esta Asamblea Legislativa para ocupar la Presidencia de la Nación hasta el 10 de diciembre del año 2003.

Asumo con el firme propósito de cumplir con la palabra empeñada en estas circunstancias que llaman a la entrega y al sacrificio de todos los argentinos.

Como ustedes saben, a partir de la renuncia del doctor De la Rúa, consideraba que la responsabilidad en el ejercicio de un gobierno de transición es incompatible con la pretensión de competir por una candidatura presidencial en el año 2003. Por lo tanto, me comprometo a realizar un gran esfuerzo personal para resolver la crisis y poder transferir la banda presidencial a otro ciudadano electo por la voluntad del pueblo argentino dentro de dos años. (Aplausos).

Hace pocos días respondimos al urgente llamado a la responsabilidad formulado a la dirigencia política por la Conferencia Episcopal Argentina. La Iglesia prestó el ámbito de CARITAS, donde con el concurso y asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, comenzamos a transitar un proceso de diálogo nacional capaz de cambiar la dirección que llevó al país a este angustioso presente.

Desde mañana, sin delegar la responsabilidad en la recuperación de la paz social que me compete y la tarea que debo realizar, estaremos trabajando juntos con las fuerzas políticas, empresariales, laborales y organizaciones no gubernamentales en la elaboración inmediata de un programa de salvación nacional. Participar de ese abierto proceso de diálogo, es afirmar que queremos mirar de frente a cada argentina y cada argentino y decirles que conocemos sus angustias y desesperanzas y que estamos dispuestos a salvar solidariamente la Nación recuperando la dignidad de cada miembro de la comunidad.

No son horas de festejos las que corren. Sin embargo, son horas de esperanza, porque estamos asistiendo a una experiencia inédita en nuestra vida política que es la formación de un gobierno de unidad nacional construido por sobre

las banderías políticas y los intereses partidarios que constituye unpreciado reclamo de nuestro pueblo.

Mi designación es el fruto de la voluntad de los representantes del pueblo. De allí emana mi legalidad, pero aspiro que este gobierno se constituya progresivamente en el fiel intérprete de los anhelos de las grandes mayorías nacionales.

Hemos tenido una profunda incapacidad moral y política para cambiar un modelo de exclusión social progresivamente instaurado en las últimas décadas.

Mi compromiso a partir de hoy, es terminar con un modelo agotado que ha sumido en la desesperación a la enorme mayoría de nuestro pueblo para sentar las bases de un nuevo modelo capaz de recuperar la producción, el trabajo de los argentinos, su mercado interno y promover una más justa distribución de la riqueza. (Aplausos)

Necesitamos la comprensión y la cooperación internacional. Hemos tenido que suspender el pago de los intereses de nuestra deuda pública porque no estamos en condiciones de hacerlo en esta circunstancias críticas que han generado una fuerte eclosión social. Y la única manera de hacer frente a nuestros compromisos internos y externos, es mediante el crecimiento de nuestra economía que derive en un auténtico desarrollo humano.

Conozco la profundidad de nuestro país federal; ese país profundo que suele escapar a la mirada de los ojos cotidianos. Mi compromiso es respetar a nuestras provincias garantizando los pactos suscriptos por los anteriores gobiernos y diseñar en conjunto un proyecto nacional que incluya a los argentinos sin excepción. (Aplausos)

Nosotros todos, sabemos del dolor y de la miseria que agobia a millones de argentinos del país federal. Es una Argentina de trabajo, una Argentina que se quiebra la espalda de los cañeros en Tucumán, de los algodoneros chaqueños, de los viñateros cuyanos, que se astilla las manos de los hacheros, que se oculta en los socavones de las minas, que se quema en el sol de las sequías, de la misma manera que se ahoga en las inundaciones. Ese es el país del que me hago cargo, el país real. Asumo teniendo plena conciencia de estas condiciones y con la decisión de encontrar las soluciones que todo el pueblo espera.

Por eso, hoy no hay nada de qué congratularse. No hay nada de qué celebrar o aplaudir. No es momento de cánticos ni de marchas partidarias. Es la hora del Himno Nacional. (Aplausos)

Quiero decirles que estamos en una situación límite. Lo sabemos. No tenemos crédito externo ni crédito interno. Están metidos en el famoso "corralito" 65.000 millones entre pesos y dólares que los bancos han prestado a empresas,

familias o al sector público. Existe, sin embargo, una denuncia que se ha hecho eco en este Congreso acerca de la probable ilegalidad de la remisión de parte de esos fondos con maniobras al exterior. Hay que investigar seriamente esas sospechas. (Aplausos). Porque se debe garantizar que quienes hayan robado el dinero de la gente y quienes no hayan controlado a los que robaban, vayan presos. (Aplausos).

A los afectados por el "corralito", les digo que el Estado no permitirá que sean víctimas del sistema financiero. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. (Aplausos). Es decir, que el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos.

Además, quiero decirles que la crisis financiera del sector público, como saben, no tiene precedentes. No tenemos hoy un peso para afrontar las obligaciones de salarios, jubilaciones y medio aguinaldo del Estado Nacional.

La excepcional caída de la actividad económica se traduce en una fuerte caída de la recaudación. Genera esto, un círculo vicioso perverso que pone a nuestro país al borde de la desintegración, al borde del caos.

Solamente en el mes de diciembre, la caída de la recaudación respecto del ejercicio 2000, alcanzó el 33 por ciento, cifras que se estiman similares en muchas de nuestras provincias.

El déficit fiscal del ejercicio 2001 alcanza a 9.000 millones de pesos. La deuda flotante del sector público alcanza a 5.000 millones de pesos sin computar las deudas que tiene la Dirección General Impositiva en concepto de reembolso de impuestos.

Como consecuencia de la depresión económica, la caída de nuestro ingreso por habitante alcanzó un 12 por ciento. También aumentó la desocupación superando todos los registros históricos del país y el índice de pobreza llegó al 40 por ciento de la población. Eso significa, ni más ni menos, que 15 millones de hermanos nuestros viven debajo de la línea de pobreza.

Durante el ejercicio 2001, las reservas del Banco Central de la República Argentina cayeron 18.000 millones de pesos o dólares y el 24 por ciento de los depósitos del sistema financiero fugaron como consecuencia, entre otros, de la crisis de confianza.

No es momento, creo, de echar culpas. Es momento de decir la verdad. La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo. La propia esencia de este modelo perverso terminó con la convertibilidad, arrojó a la indigencia a 2 millones de compatriotas, destruyó a la clase media argentina, quebró a nuestras industrias, pulverizó el trabajo de los argentinos. Hoy, la producción y el comercio están, como ustedes saben, parados;

la cadena de pagos está rota y no hay circulante que sea capaz de poner en marcha la economía.

Hay, por tanto, que sincerar esta situación, hay que explicar seriamente a nuestro pueblo dónde hemos caído y qué debemos hacer para levantarnos.

Honorable Asamblea: venimos con toda la fe, con toda la confianza, con todo el amor de que somos capaces a poner de pie y en paz a la Argentina.

Los pueblos toleran cualquier circunstancia adversa. ¡Y vaya si lo toleran!. Lo que ningún pueblo tolera es el caos, la anarquía. Y quiero decirles que el caos y la anarquía que vivimos, no se resuelve con balas ni con bayonetas (Aplausos), se resuelve ocupándonos seria y responsablemente de los problemas que afligen a millones y millones de excluidos en la República Argentina. Excluidos de todas las relaciones: políticas, económicas, sociales, culturales, laborales. Millones son los que están afuera. Y decir que venimos con todo el amor, como antes manifestaba, a poner de pie a nuestro país.

La doctrina social de la Iglesia es nuestra guía y, además, nuestro norte. Sus principios humanistas y cristianos, serán los pilares sobre los que se apoyen todas nuestras acciones de gobierno.

Esta gestión que hoy mismo comienza su tarea, se propone lograr pocos objetivos básicos: primero, reconstruir la autoridad política e institucional de la Argentina; segundo, garantizar la paz en Argentina; tercero, sentar las bases para el cambio del modelo económico y social.

Reconstruir la autoridad política e institucional, significa predicar con el ejemplo, en primer lugar; significa recuperar la patria sus instituciones y la fe del pueblo en ellas; significa que debemos empezar por cambiar nosotros mismos ejecutando, sólo para empezar y de inmediato, las medidas de austeridad y sacrificio que el pueblo nos reclama. Debemos tomar acciones esenciales que permitan promover una nueva organización institucional en la Argentina para recuperar esta república arrasada por la corrupción y el desgobierno.

Garantizar la paz social, significa no resignarnos a transitar el camino contradictorio de ser un país rico poblado de pobres. No es posible que el 40 por ciento de nuestra población viva bajo la línea de pobreza. Eso significa, ni más ni menos, que 15 millones de compatriotas no logran acceder a la canasta básica y que, según cifras oficiales, el último año, sólo el último, 730 mil ciudadanos argentinos dejaron la clase media para convertirse en pobres por declinación de ingresos o por pérdida de su empleo.

Garantizar la paz social, significa recuperar el crecimiento de la economía, promover la transformación productiva con equidad y propiciar un modelo sustentable fundado en la producción y en el trabajo.

Garantizar la paz social en forma inmediata, significa mantener el programa de creación de un millón de puestos de trabajo aquí anunciados hace una semana por el ex presidente Rodríguez Saá. Es indispensable ponerlo en marcha pero debemos reconvertirlo. No es posible en poco tiempo organizar para que trabajen un millón de personas en la Argentina. Debemos reconvertirlo en otro programa que sea un seguro de empleo y formación profesional destinado a jefas y jefes de hogares desocupados. (Aplausos).

Sentar las bases de un modelo nuevo económico, social, cultural, significa romper definitivamente con el pensamiento único que ha sostenido y sostiene que no hay alternativa posible al modelo vigente. Esa es una falacia teórica que sólo ha podido sostenerse en la Argentina en el marco de la falta de un debate nacional serio y profundo.

El mundo, como todos sabemos, reconoce la existencia de una pluralidad de modelos instrumentados por los distintos países para integrarse en un proceso mundial de globalización. Pero en todos ellos, en los exitosos, tienen rasgos comunes que nuestro modelo no tuvo en cuenta.

¿Cuál es uno de los rasgos comunes que tienen todos los modelos exitosos? Es la defensa irrestricta de los intereses permanentes nacionales. Ningún país del mundo se desintegra en estos procesos que son de integración; sólo quienes elegimos los más perversos modelos, nos desintegramos en él. Y el segundo rasgo de aquellos países que progresan, es la conjunción del esfuerzo entre el sector público y el sector privado.

Ustedes que han recorrido el mundo, habrán visto y se han encontrado con legisladores, con intendentes, con alcaldes, con presidentes de otros países que progresan y habrán advertido que todos ellos hablan de la producción, hablan del trabajo, hablan de su gente. Eso es lo que no hemos hecho los argentinos. Pareciera que la clase política está desvinculada del sistema productivo; pareciera ser que somos cosas distintas.

Ustedes -reitero- que conocen, habrán visto que esto es una realidad. Cada funcionario argentino, cada diplomático, cada legislador debe convertirse en un representante de nuestros intereses y en un lobbista de las empresas nacionales. (Aplausos).

La tarea que tenemos por delante es difícil. Pero tenemos que recrear las condiciones para que la Argentina vuelva a traer inversiones productivas. Debemos reconstruir el cuerpo de nuestras empresas e industrias que son las grandes generadoras de empleo. Creemos firmemente en la necesidad de integrarnos al mundo mediante la articulación de bloques comerciales partiendo de la base de un

Mercosur fuerte y capaz de propiciar acuerdos estratégicos con otros bloques tanto el ALCA, Unión Europea y otros mercados en el mundo.

Honorable Asamblea; queridos compatriotas: pertenezco a un movimiento político que a través del presidente Juan Domingo Perón y de Eva Perón (Aplausos) fundaron la justicia social en la Argentina y levantaron las banderas de independencia económica y soberanía política. Banderas que con el tiempo, fueron asumidas por todas las fuerzas políticas de origen popular. Esas banderas han sido arriadas y tenemos hoy que preguntarnos y preguntarle a los argentinos, si verdaderamente queremos vivir en un país soberano e independiente.

Si la respuesta es positiva, como imagino, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. El camino es luchar juntos para desatar uno a uno los nudos de la dependencia.

A mis compatriotas, les pido que cada uno desde su lugar, participe y se entregue con pasión y fe en la recuperación de esta Argentina que todos amamos.

Por mi parte, le pido ayuda a Dios para asumir ante mi pueblo un solemne compromiso que desearía fuera tomado como una auténtica palabra de honor.

Quiero hacer de mi gobierno un espejo en el cual mirarse y no un vidrio empañado por la sospecha, la insensibilidad o la cobardía. Quiero energía para acometer esta tarea; coraje para no temer a lo nuevo, para no tener que enfrentar gravísimas contingencias; severidad para juzgarme a mí mismo; perseverancia para no abandonar la lucha y firmeza para jamás traicionar los principios. (Aplausos).

Venimos a poner de pie y en paz a la Argentina. La Argentina, lo sabemos, lo sentimos, tiene futuro. Por eso, hoy tenemos que ser más argentinos que nunca.

No lo duden, no lo duden un solo instante: Argentina tiene futuro. (Aplausos).